



Hermosillo, Sonora, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno.

Sentencia definitiva dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa **SEMARA-PRA-35/2020**, de esta Sala Especializada, en la que se declara la existencia de la falta administrativa grave de **DESVÍO DE RECURSOS** prevista en el artículo 93 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en la hipótesis *“el servidor público que autorice actos para la asignación de recursos públicos financieros en contraposición a las normas aplicables”*; así como la responsabilidad administrativa de [REDACTED] en su comisión, y por tanto se le impone la sanción **INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS** para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Asimismo, se declara la existencia de la falta administrativa de particular **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA** prevista en el artículo 109 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en la hipótesis *“el particular que simule el cumplimiento de requisitos establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr un beneficio”*; y la responsabilidad administrativa de la particular [REDACTED] en su comisión; y por tanto se le impone la **SANCIÓN ECONÓMICA** por la cantidad de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional); así como la **INHABILITACIÓN TEMPORAL POR TRES MESES** para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Índice

Contenido	Página
1. Glosario.....	2
2. Antecedentes del caso	3
2.1. Inicio de la investigación.....	3
2.2. IPRA.....	4
2.3. Inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa.....	4
2.4. Emplazamiento.....	4
2.5. Audiencia inicial.....	4
2.6. Envío del expediente a la SEMARA.....	5
2.7. Radicación del expediente SEMARA-PRA-35/2020.....	5
2.8. Admisión de pruebas.....	5
2.9. Recurso de reclamación.....	5
2.10. Incidente de objeción de pruebas.....	5
2.11. Período de alegatos.....	6
2.12. Cierre de instrucción y citación para sentencia.....	6
3. Competencia.....	6
4. Fijación de los hechos controvertidos.....	7

5. Análisis relativo a la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señale como falta administrativa grave o falta de particulares..... 8

5.1. Desvío de recursos..... 10

5.2. Utilización de información falsa..... 49

6. Análisis de la responsabilidad administrativa..... 76

6.1. Análisis de la responsabilidad administrativa de [REDACTED]..... 76

6.2. Análisis de la responsabilidad administrativa de la particular [REDACTED]..... 99

7. Individualización de la sanción..... 108

7.1. Individualización de la sanción de [REDACTED]..... 108

7.2. Individualización de la sanción de la particular [REDACTED]..... 114

8. Ejecución de la sanción..... 118

Puntos Resolutivos..... 119

1. GLOSARIO.

I. Autoridad Investigadora:	Lic. Isaac Madrigal Godínez, Titular de la Coordinación Investigadora del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Nogales, Sonora.
II. Autoridad Sustanciadora:	Lic. Evelyn Denisse Antelo Gauna, Titular de la Coordinación Sustanciadora del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Nogales, Sonora.
III. Ayuntamiento:	Ayuntamiento de Nogales, Sonora.
IV. Expediente de origen:	Expediente E.I.28/2018 del índice del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Nogales, Sonora.
V. Faltas administrativas:	Las Faltas administrativas graves, las Faltas administrativas no graves; así como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
VI. Falta administrativa grave:	Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal.
VII. Faltas de particulares:	Los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados con faltas administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV del Título Cuarto de la Ley Estatal de Responsabilidades, cuya sanción corresponde al Tribunal en los términos de la misma.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

VIII. Magistrado:	El magistrado integrante de la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
IX. Municipio:	Municipio de Nogales, Sonora.
X. Órgano de Control:	Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Nogales, Sonora.
XI. Particular:	La persona física o moral que no desempeña un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito estatal y municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
XII. Presunto responsable y/o responsable:	El servidor público y el particular a quienes se les instruye el procedimiento administrativo sancionador y que aquí se sentencian, en el caso, [REDACTED]
XIII. Sala Especializada, SEMARA o Tribunal:	Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
XIV. Servidor público:	Persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito estatal y municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
XV. Tesorero Municipal:	Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora.
XVI. Tesorería Municipal:	Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora.

2. ANTECEDENTES.

2.1. Inicio de la investigación.

Por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad investigadora tuvo por recibido el oficio **OCEGN1-G2387/18**, de fecha catorce de diciembre dos mil dieciocho, signado por el licenciado Luis Óscar Ruiz Benítez, en su carácter de Titular del

Órgano de Control, al cual este último adjuntó el diverso oficio **341-CCMC-2018**, de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Contador Público [REDACTED] con el que remitió el informe de presuntas irregularidades detectadas en los procesos de entrega-recepción de la Tesorería Municipal. Por lo que, la Autoridad Investigadora formó el expediente **E.I.28/2018** e inició con las investigaciones correspondientes.¹

2.2. IPRA.

Con fecha veintinueve de abril de dos mil veinte, la Autoridad Investigadora elaboró el informe de presunta responsabilidad administrativa, en el que consideró que existen elementos probatorios para acreditar la existencia de la falta administrativa grave **DESVÍO DE RECURSOS**, previsto en el artículo 93, de la Ley Estatal de Responsabilidades, así como la probable responsabilidad administrativa del presunto responsable [REDACTED] su comisión; así como la existencia de la falta de particular **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA**, estipulada en el numeral 109 de la Ley Estatal de Responsabilidades, así como la probable responsabilidad de la particular moral [REDACTED] en su comisión.

Informe de presunta responsabilidad administrativa que, juntamente con el referido expediente de origen **E.I.28/2018**, la Autoridad Investigadora exhibió ante la Autoridad Sustanciadora, mediante oficio OCEGN32-G1015/2020, de diez de veintinueve de abril de dos mil veinte.²

2.3. Inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa.

Por auto de tres de agosto de dos mil veinte, la Autoridad Sustanciadora admitió el IPRA y ordenó emplazar a los presuntos responsables citándolos para que comparecieran a la audiencia inicial, dieran contestación a las imputaciones y ofrecieran las pruebas que consideraran conducentes.³

2.4. Emplazamiento.

Mediante diligencias de veintidós y veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, los presuntos responsables fueron emplazados y citados para comparecer a la audiencia inicial, tal como se desprende de las constancias del expediente remitido.⁴

2.5. Audiencia inicial.

El trece de octubre de dos mil veinte se celebraron las correspondientes audiencias iniciales, a las que comparecieron el abogado particular de los presuntos responsables, así como la particular [REDACTED] en su carácter de representante legal de la moral [REDACTED]⁵

¹ Foja S1 del expediente de origen.

² Fojas 753 a 781 del expediente de origen.

³ Fojas 778 a 181 del expediente de origen.

⁴ Fojas 785, 786, 789 y 790 del expediente de origen.

⁵ Fojas 793, 794, 838 y 839 del expediente de origen.



2.6. Envío de expediente a la SEMARA.

Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, la Autoridad Sustanciadora ordenó el envío del expediente de origen a esta SEMARA, a efecto de la continuación y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa; el cual fue remitido por oficio OCEGN30-G2900/2020, de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve.⁶

2.7. Radicación del expediente SEMARA-PRA-35/2020.

Por auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibido en esta Sala Especializada el expediente de origen adjunto al citado oficio OCEGN30-G2900/2020, el cual se registró con el número de expediente **SEMARA-PRA-35/2020** y se turnó al Magistrado instructor de la Primera Ponencia.

Posteriormente, mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, este tribunal se declaró competente para conocer del presente procedimiento de responsabilidad administrativa.⁷

2.8. Admisión de pruebas.

Mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, este tribunal se pronunció respecto a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes.⁸

2.9. Recurso de reclamación

Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno ante este tribunal, la presunta responsable Marisela Reyes Lomelí, en su carácter de representante legal de la moral [REDACTED], interpuso el recurso de reclamación en contra del auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, dictado por esta Sala Especializada, en el expediente SEMARA-PRA-35/2020, en el que este tribunal se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por las partes.

Recurso de reclamación que fue registrado bajo el número SEMARA-RR-03/2021, asimismo, mediante auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno fue turnado al Magistrado instructor de la Primera Ponencia; y por acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite dicho recurso, ordenándose correr traslado a la Autoridad Investigadora, para que manifestara lo que a su interés conviniera.

Posteriormente, por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno se citó el mencionado expediente para oír resolución, la cual se dictó el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que se confirmó el auto impugnado.⁹

2.10. Incidente de objeción de pruebas

Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno ante este tribunal, el presunto responsable [REDACTED] promovió el incidente innominado

⁶ Fojas 908 y 917 del expediente de origen.

⁷ Fojas 2 a la 4 del expediente SEMARA-PRA-35/2020.

⁸ Fojas 18 a 22 del expediente SEMARA-PRA-35/2020.

⁹ Fojas 41 a 70 del expediente SEMARA-PRA-35/2020.

con la finalidad de objetar las pruebas en cuanto a su alcance y valor probatorio, mismas que fueron ofrecidas por el licenciado Isaac Madrigal Godínez, Titular de la Coordinación Investigadora Adscrita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en relación a las pruebas contenidas en las fojas 01, 51, 52, 53, 261, 273, 275, 276, 279, 283, 001 a la 200, 93 a la 94, 743, del expediente de investigación E.I. 28/2018; las pruebas contenidas en el Informe de Presunta Responsabilidad en su capítulo VII, así como las pruebas contenidas en el referido expediente de investigación que tiene relación con el indicado informe.

Incidente que fue admitido mediante auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, ordenándose correr traslado a la Autoridad Investigadora, para que manifestara lo que a su interés conviniera.

Posteriormente, por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno se citó el expediente para oír la resolución incidental, la cual se dictó el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que, por una parte, se declaró improcedente el incidente respecto a las manifestaciones del incidentista tendentes a objetar los acuerdos de mero trámite y oficios derivados de acuerdos de mero trámite emitidos por la Autoridad Investigadora; y por otro lado, quedaron intocadas las pruebas ofrecidas por la Autoridad Investigadora, a excepción del disco compacto que se hace mención en el agravio noveno en el escrito del incidentista.

Resolución incidental que, al no haber sido combatida por las partes, causó estado declarado mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno.¹⁰

2.11. Período de alegatos.

Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se ordenó la apertura del período de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes a las partes; período en el cual las partes expresaron los alegatos correspondientes.¹¹

2.12. Cierre instrucción y citación para sentencia.

Concluido el período de alegatos, por auto de siete de mayo de dos mil veintiuno se declaró el cierre de instrucción y se citó el presente asunto para oír resolución.¹²

3. COMPETENCIA.

Esta Sala Especializada es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de acuerdo con lo dispuesto expresamente en los artículos 67 TER, párrafo tercero, y 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 9 fracción IV, 12, 105, 248 y 249, de la Ley Estatal de Responsabilidades y, 13 BIS, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa; lo anterior con motivo de que las conductas descritas por la Autoridad Investigadora en su IPRA, constituyen una **falta administrativa calificada como grave y**

¹⁰ Fojas 72 a 146 del expediente SEMARA-PRA-35/2020.

¹¹ Foja 148 del expediente SEMARA-PRA-35/2020.

¹² Foja 184 del expediente SEMARA-PRA-35/2020.



un **acto de particular vinculado con una falta administrativa grave**; cuya comisión se imputa a quien en la época de los hechos era un **servidor público** y a un **particular**, en relación con una dependencia que pertenece a la jurisdicción territorial de este tribunal.

Esto es así, toda vez que al momento de la comisión de los hechos imputados, el presunto responsable [REDACTED] cargo de **Tesorero Municipal** del Ayuntamiento de Nogales, Sonora; y por lo que hace a la moral "[REDACTED] representada legalmente por [REDACTED] ésta tiene el carácter de particular, pues no se demostró que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito estatal o municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora; y el acto de particular se vincula con la Tesorería Municipal del indicado Ayuntamiento.

Tesorería Municipal, la cual es una dependencia de la Administración Pública Directa del citado Ayuntamiento, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 121, fracción II y 148, fracción II, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Nogales, Sonora; y por tanto pertenece a la jurisdicción territorial de este tribunal.

4. FIJACIÓN DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS.

La Autoridad Investigadora en el IPRA de veintinueve de abril de dos mil veinte, consideró que existen elementos probatorios para acreditar la existencia de la falta administrativa grave **DESVÍO DE RECURSOS** prevista en el artículo 93, de la Ley Estatal de Responsabilidades, así como la probable responsabilidad administrativa del entonces servidor público presunto responsable [REDACTED] su comisión.

Lo anterior, expuso la Autoridad Investigadora, en virtud de que el referido servidor público, quien al momento de los hechos ostentaba el cargo de **Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales**, autorizó la asignación de recursos públicos financieros, para el pago a favor de la moral "[REDACTED] en contraposición del contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018** de prestación de servicios por honorarios profesionales, de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, celebrado entre el Ayuntamiento y la mencionada empresa; y sin fundamento jurídico.

Esto es así, ya que el referido presunto responsable en su carácter de **Tesorero Municipal**, durante el período del seis de julio al quince de septiembre de dos mil dieciocho, **autorizó veintidós pagos** a favor de la empresa "[REDACTED]", los cuales dan un total de **\$2,974,347.75** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con setenta y cinco centavos, moneda nacional); lo anterior, sin que el mencionado **Tesorero Municipal** hubiere turnado un listado de deudores de cuentas insolutas por impuesto predial, por el impuesto de traslación de dominio o de cualquier contribución que, a juicio de Tesorería Municipal, requiriera una cobranza especializada, de acuerdo a lo dispuesto en la **cláusula segunda** del mencionado contrato; y sin que hubiere realizado un análisis a la cantidad mensual

acumulada que hubiere sido ingresada al Ayuntamiento por los servicios materia del citado contrato de prestación de servicios, de acuerdo a lo estipulado en las **cláusulas novena y décima primera** del referido contrato. Además, sin que la mencionada moral hubiere exhibido documento alguno que acreditara sus gestiones de cobro realizadas a los deudores de las cuentas insolutas por impuesto predial, por el impuesto de traslación de dominio o de cualquier contribución que, a juicio de Tesorería Municipal, requiriera una cobranza especializada, de conformidad con lo acordado en la **cláusula quinta** del mencionado contrato.

Por otro lado, la Autoridad Investigadora consideró que existen elementos probatorios para acreditar la existencia de la falta de particular **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA** prevista en el artículo 109, de la Ley Estatal de Responsabilidades, así como la probable responsabilidad administrativa de la moral [REDACTED] en su comisión.

Lo anterior, expresó la Autoridad Investigadora, pues la referida empresa simuló el cumplimiento de requisitos con el propósito de lograr un beneficio, en el caso, **simuló el cumplimiento de los requisitos** establecidos en el mencionado contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018** de prestación de servicios por honorarios profesionales, de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, celebrado entre el Ayuntamiento y la mencionada empresa; lo anterior **para obtener un beneficio económico**.

Esto es así, toda vez que la mencionada moral simuló haber realizado gestiones de cobranza y en el periodo comprendido entre el seis de julio y quince de septiembre de dos mil dieciocho, exhibió veintidós facturas ante el Ayuntamiento, por cantidades que dan un total de **\$2,974,347.75** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con setenta y cinco centavos, moneda nacional); lo anterior, sin que en el caso diera cumplimiento a los requisitos estipulados en la **cláusula quinta** del mencionado contrato de prestación de servicios, pues no presentó al Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal, ningún informe mensual de la cobranza judicial o extrajudicial realizada; ni proporcionó los datos obtenidos en función de sus servicios, ya sea a través de medios magnéticos o bajo la forma que el Ayuntamiento y la moral determinaren.

Y no obstante lo anterior, la mencionada empresa obtuvo un beneficio económico por la cantidad descrita, en razón de que le fueron pagadas las cantidades detalladas en las referidas veintidós factura, por parte de la Tesorería Municipal.

5. ANÁLISIS RELATIVO A LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS HECHOS QUE LA LEY SEÑALE COMO FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE O FALTA DE PARTICULARES.

Previo al estudio de la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señale como falta administrativa grave o falta de particulares, conviene destacar lo sustentado por el Pleno



de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹³ en el sentido de que de un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados.

En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida.

En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos.

Así, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudir a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.

Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁴ ha explicado que para que resulten aplicables las técnicas garantistas del derecho penal, es requisito indispensable que la norma de que se trate esté inmersa en un procedimiento del derecho administrativo sancionador, el cual se califica a partir de la existencia de dos condiciones: a) que se trate de un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción (elemento formal); y, b) que el procedimiento se ejerza como una manifestación de la potestad punitiva del Estado (elemento material), de manera que se advierta que su sustanciación sea con la intención manifiesta de determinar si es procedente condenar o sancionar una conducta que se estima reprochable para el Estado por la comisión de un ilícito, en aras de salvaguardar el orden público y el interés general; es decir, ese procedimiento debe tener un fin represivo o retributivo derivado de una conducta que se considere administrativamente ilícita.

¹³ Tesis: P./J. 99/2006, Novena Época, Registro: 174488, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Página: 1565, de rubro: **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.**

¹⁴ Tesis: 2a./J. 124/2018 (10a.), Décima Época, Registro: 2018501, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Página: 897, de rubro: **NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.**

Sobre esas bases, no basta la posibilidad de que el ejercicio de una facultad administrativa pueda concluir con el establecimiento de una sanción o infracción, sino que se requiere de manera concurrente que su despliegue entrañe una manifestación de la facultad punitiva del Estado, esto es, que el procedimiento tenga un marcado carácter sancionador como sí ocurre, por ejemplo, con los procedimientos sancionadores por responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁵ ha sostenido que estaremos ante una manifestación del derecho administrativo sancionador cuando el procedimiento: 1) presuponga la existencia de un tipo administrativo que conlleve el reproche a una infracción -que entrañe la transgresión a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones públicos- y dé lugar al surgimiento de responsabilidad administrativa; 2) se siga en forma de juicio, en el cual se determine si la conducta -acción u omisión- de quien desempeñe el servicio público contraviene aquellas prohibiciones a las cuales se sujeta el ejercicio de su función; y, 3) tenga por finalidad procurar la correcta actuación de los servidores públicos, sancionar a los infractores y, en su caso, lograr la restitución de aquellos bienes jurídicos que fueron afectados con su irregular actuación.

Bajo esa tesitura, una vez asentado lo anterior, a continuación se procederá al análisis individual de cada una de las faltas administrativas imputadas, de acuerdo a los principios que rigen en materia penal, con sus matices en lo que sea compatible con el procedimiento administrativo sancionador.

5.1. Desvío de recursos.

Se encuentra acreditada en autos la falta administrativa grave **DESVÍO DE RECURSOS** prevista en el artículo 93, de la Ley Estatal de Responsabilidades, que establece:

"Artículo 93.- Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvíe de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieras, sin fundamento jurídica o en contraposición a las normas aplicables."

En ese sentido al realizar el análisis del indicado artículo y acudiendo en lo aplicable a los principios de materia penal, observamos que el Tipo administrativo en estudio se encuentra compuesto por los siguientes elementos:

a) Calidad específica del presunto responsable como servidor público.

¹⁵ Tesis: 1a. XXXV/2017 (10a.), Registro digital: 2013954, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Administrativa, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, página 441, Tipo: Aislada, de rubro: **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONCEPTO DE SANCIÓN QUE DA LUGAR A SU APLICACIÓN.**



b) Elemento objetivo (acción):

- Autorice
- Solicite
- Realice actos.

c) Elemento subjetivo específico:

- Para la asignación o desvío de recursos

d) Objeto material (persona o cosa en quien recae la conducta):

- Los recursos públicos (materiales, humanos, financieros)

e) Modalidad de la conducta (medio de ejecución):

- Sin fundamento jurídico; o
- En contraposición a las normas aplicables

f) Elemento normativo: concepto de *Servidor público*

Tipo administrativo que como se puede apreciar, contiene **diversas hipótesis**, siendo que en el IPRA la Autoridad Investigadora expresó que el presunto responsable en su carácter de servidor público, quien al momento de los hechos ostentaba el cargo de **Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales**, autorizó la asignación de recursos públicos financieros, para el pago a favor de la moral: [REDACTED] en contraposición del contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018** de prestación de servicios por honorarios profesionales, de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, celebrado entre el Ayuntamiento y la mencionada empresa; y sin fundamento jurídico.

Esto es así, ya que refiere la Autoridad Investigadora el referido presunto responsable en su carácter de Tesorero Municipal, durante el período del seis de julio al quince de septiembre de dos mil dieciocho, **autorizó veintidós pagos** a favor de la empresa [REDACTED] los cuales dan un total de **\$2,974,347.75** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con setenta y cinco centavos, moneda nacional); lo anterior, sin que el mencionado Tesorero Municipal hubiere turnado un listado de deudores de cuentas insolutas por impuesto predial, por el impuesto de traslación de dominio o de cualquier contribución que, a juicio de Tesorería Municipal, requiriera una cobranza especializada, de acuerdo a lo dispuesto en la **cláusula segunda** del mencionado contrato; y sin que hubiere realizado un análisis a la cantidad mensual acumulada que hubiere sido ingresada al Ayuntamiento por los servicios materia del citado contrato de prestación de servicios, de acuerdo a lo estipulado en las **cláusulas novena y décima primera** del referido contrato. Además, sin que la mencionada moral hubiere exhibido documento alguno que acreditara sus gestiones de cobro realizadas a los deudores de las cuentas insolutas por impuesto predial, por el impuesto de traslación de dominio o de cualquier contribución que, a juicio de Tesorería Municipal, requiriera una cobranza especializada, de conformidad con lo acordado en la **cláusula quinta** del mencionado contrato.

Bajo ese contexto, de acuerdo a los hechos expuestos por la Autoridad Investigadora y los medios probatorios aportados, este tribunal considera que el tipo normativo de la falta administrativa grave de **DESVÍO DE RECURSOS** descrita en el IPRA atribuida al presunto responsable, es en la hipótesis *“el servidor público que autorice actos para la asignación de recursos públicos financieros en contraposición a las normas aplicables”*; la cual se acredita y se compone los siguientes elementos:

- a) La calidad específica del presunto responsable como servidor público.
- b) La existencia del recurso público financiero.
- c) La acción del servidor público de autorizar la asignación del recurso público financiero.
- d) Que lo anterior lo realice en contraposición a las normas aplicables.

El **PRIMER ELEMENTO**, la calidad específica del presunto responsable como **servidor público**, éste se tiene colmado.

En principio, cabe destacar que el concepto de servidor público se obtiene de lo definido en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con el numeral 3, fracción XXVI, de la Ley Estatal de Responsabilidades, que en lo conducente establecen:

*“ARTÍCULO 143.- Se reputará como **servidor público** para los efectos de este título y será responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un **empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza**, en la administración pública estatal, directa o paraestatal, así como **municipal**, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como los servidores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, del Tribunal de Justicia Administrativa y quienes laboren en los organismos públicos con autonomía legal.”*

“Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

...

***XXVI.- Servidores Públicos:** Las personas que desempeñen un **empleo, cargo o comisión** en los entes públicos, en el ámbito estatal y municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora;...”*

(Lo resaltado no es de origen)

En esa tesitura, de acuerdo a lo estipulado en los numerales anteriormente transcritos, se obtiene que **servidor público** es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal, directa o paraestatal, así como municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como los servidores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección



de Datos Personales, del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, del Tribunal de Justicia Administrativa y quienes laboren en los organismos públicos con autonomía legal.

En el caso concreto, el presunto responsable es un **servidor público** con cargo en la administración pública municipal de Nogales, Sonora, específicamente, con el cargo de Tesorero Municipal, adscrito a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, la cual es una dependencia de la administración pública directa municipal del referido Ayuntamiento, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 121, fracción II y 148, fracción II, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Nogales, Sonora.

Calidad de servidor público del presunto responsable que se encuentra acreditado con copia certificada del **nombramiento**¹⁶ como Tesorero Municipal expedido a su favor el uno de marzo de dos mil dieciocho, por el arquitecto Cuauhtémoc Galindo Delgado, en su carácter de Presidente Municipal de Nogales, Sonora.

Nombramiento expedido por funcionario en el ejercicio de sus funciones, el cual es un documento público que se encuentra en los archivos del Ayuntamiento de Nogales, Sonora y fue debidamente certificado por el licenciado Jorge Jáuregui Lewis, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento, de acuerdo a las facultades establecidas para ello en los artículos 89, fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; por lo que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Por otro lado, en relación al **SEGUNDO ELEMENTO** de la falta administrativa atribuida, consistente en **la existencia del recurso público financiero**, éste se encuentra acreditado.

En principio, conviene subrayar que el artículo 1, de la Ley de Hacienda Municipal establece:

"ARTICULO 1o.- La Hacienda Pública de las municipalias del Estado de Sonora, se farmará de las rendimientas de las bienes públicas que les pertenezcan, así como de las cantribuciones y otros ingresas que establezcan las leyes fiscales, los convenios y demás disposiciones normativas aplicables."

Luego, el artículo 7, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, dice:

"ARTICULO 7o- EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, ADMINISTRARA LIBREMENTE SU HACIENDA, LA CUAL SE FORMARA DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LE PERTENEZCAN. ASI COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE, CONFORME LA FRACCION CUARTA DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS

¹⁶ Foja 746 del expediente de origen.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

	No. DE REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA	FECHA	CANTIDAD
1	I32320180761702420022774030	06/07/2018	\$116,000.00
2	I323201807131539060069183024	13/07/2018	\$116,000.00
3	I323201807191408190021427254	19/07/2018	\$116,000.00
4	I323201807191409530021427270	19/07/2018	\$116,000.00
5	I323201808061528480028208076	06/08/2018	\$116,000.00
6	I323201808211656000026732172	21/08/2018	\$97,000.00
7	I323201808221654540011022091	22/08/2018	\$193,000.00
8	I323201808241633420077836353	24/08/2018	\$200,000.00
9	I323201808311723160075185036	31/08/2018	\$173,520.00
10	I323201809041711570067538058	04/09/2018	\$145,000.00
11	I323201809061720370039389028	06/09/2018	\$145,000.00
12	I323201809121658480092466205	12/09/2018	\$53,360.00
13	I323201809121659520092466220	12/09/2018	\$145,000.00
14	I323201809121706270092466257	12/09/2018	\$145,000.00
15	I323201809121708110092466272	12/09/2018	\$145,000.00
16	I323201809121709250092466287	12/09/2018	\$16,111.10
17	I323201809141656040098248063	14/09/2018	\$174,000.00
18	I323201809141649570098248044	14/09/2018	\$104,400.00
19	I323201809141647370098248029	14/09/2018	\$156,600.00
20	I323201809151503310040448270	15/09/2018	\$183,993.78
21	I323201809151502090040448255	15/09/2018	\$152,772.99
22	I323201809151452340040448240	15/09/2018	\$164,589.93

TOTAL \$2,974,347.80

Informe de autoridad de referencia al que se adjuntaron documentos públicos, tales como las mencionadas cuentas auxiliares y pólizas, las cuales son documentos públicos expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, que se encuentran en los archivos del Ayuntamiento de Nogales, Sonora y fueron debidamente certificados por el licenciado Jorge Jáuregui Lewis, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento, de acuerdo a las facultades establecidas para ello en los artículos 89, fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; por lo que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Por otro lado, al referido informe fueron anexados documentos privados, como lo son las impresiones de internet de las transferencias electrónicas bancarias, las cuales si bien no constituyen documentos públicos, éstas no deben valorarse como una copia simple o un documento privado, toda vez que no pueden imputarse a una persona su elaboración, ante la falta de firma autógrafa para efectos de su reconocimiento, sino que constituyen la impresión de la información generada vía electrónica y, en consecuencia, tiene la

naturaleza de descubrimiento de la ciencia, cuyo valor probatorio queda al prudente arbitrio del juzgador, conforme al artículo 205 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Así, para valorar la fuerza probatoria de esa documental electrónica, este tribunal deberá atender, preponderantemente, a la fiabilidad del método en que fue generada la información, a fin de corroborar su contenido, lo que puede acreditarse por medio del código de captura, sello digital, o cualquiera otra que permita autenticar su contenido.

En ese orden de ideas, las mencionadas impresiones de internet de las transferencias electrónicas bancarias, forman convicción en este tribunal respecto a su autenticidad y contenido por haber sido remitidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones mediante informe, además de que éstos cuentan con el logotipo de la institución bancaria, la fecha de su emisión y la cadena al pie del documento con la que suscribe el banco que la emite, aunado a que dado que gracias a los avances tecnológicos éstos documentos pueden ser impresos mediante las aplicaciones bancarias autorizadas para ello, en las que se detallan las operaciones realizadas por los usuarios, de los que existe una presunción de buena fe e imparcialidad hacia los clientes que utilizan los servicios bancarios, por la estricta vigilancia a la que se encuentran sujetos, la cual genera certeza de la fecha y realización de los actos que consten en tales documentos.

Aunado a lo anterior, las anteriores impresiones de internet de las transferencias electrónicas bancarias se encuentran en los archivos del Ayuntamiento de Nogales, Sonora y fueron debidamente certificadas por el licenciado Jorge Jáuregui Lewis, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento, de acuerdo a las facultades establecidas para ello en los artículos 89, fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; por lo que tiene se les confiere valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173, 199 y 205, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Sirven de apoyo a lo anotado los criterios siguientes:

TRANSFERENCIA BANCARIA VÍA SPEI. SU VALOR PROBATORIO. *El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), fue desarrollado por el Banca de México, Banco Central de la Nación y la Banca Comercial, para permitir a los clientes de bancos enviar y recibir transferencias electrónicas de dinero. Sistema complejo del que destaca que para poder llevar a cabo este tipo de transacciones, los usuarios deben completar toda aquella información fidedigna que identifique ampliamente no sólo a la parte que abona y a la que recibe, sino que proporciona un número de referencia de hasta 7 dígitos, un identificador llamado clave de rastreo, de hasta 30 posiciones alfanuméricas que llevan como finalidad la rápida identificación del pago realizado, el monto del abono, así como la fecha y hora en que se realiza. Dicha seguridad se encuentra basada en mensajes firmados digitalmente para lo cual los participantes usan certificados digitales y las claves de las personas autorizadas, los que se obtienen de acuerdo con las normas de la Infraestructura Extendida de Seguridad (IES), del Banca de México. Luego, cada vez que dichas pagas contienen el mismo tipo de firma digital que se requiere para llevar a cabo el pago de impuestos, derechos y que han sido analizados por nuestro Máximo Tribunal y se les concede valor diverso a los documentos privados pues, incluso, con relación a la firma electrónica, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de las Nación, en la tesis 2a. XCVII/2007, publicada en la página seiscientos treinta y ocho del Tomo XXVI, del mes de agosto de dos mil siete, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. EL HECHO DE QUE EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ESTABLEZCA SU DEFINICIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD.", estableció que su finalidad es*



identificar al emisor de un mensaje como su autor legítimo, como si se tratara de una firma autógrafa, con lo que se garantiza la integridad del documento produciendo los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa y tienen el mismo valor probatorio.¹⁹

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. NO ES DOCUMENTO PRIVADO CUYO VALOR SEA EQUIPARABLE AL DE UNA COPIA SIMPLE. *La impresión de internet de una transferencia electrónica no puede ser valorada como una copia simple de un documento privada, toda vez que no puede imputársele a persona alguna su elaboración o materialización ante la falta de firma autógrafa para efectos de su reconocimiento, sino que en términos de los artículos 1237, 1238, 1242 y 1245 del Código de Comercio, así como del diverso 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletaria al de Comercio, goza de la naturaleza de descubrimiento de la ciencia, por lo que queda al prudente arbitrio del juzgador la valoración de la información recabada de medios electrónicos. Así, en aras de crear seguridad jurídica en las usuarios de los servicios electrónicos, el legislador estableció reglas específicas para la valoración de la documental electrónica, de tal suerte que no puede valorarse como si se tratara de una copia simple de documentos privados, sino que queda a la prudencia del juzgador, en la inteligencia de que debe otenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada la información contenida en los medios electrónicos, como son el código de captura, la cadena de caracteres generada con motivo de la transacción electrónica, sello digital o cualquiera que permita autenticar el contenido de ese documento digital y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos; si el documento no fue objetado de falsedad por la parte actora y la objeción fue en cuanto a su alcance y valor probatorio, sin que se argumentara que dicho pago correspondiera a bienes, servicios o cualquier otra diversa; mientras que si existió el reconocimiento tácito de la existencia de dicho pago, cantará con pleno valor probatorio.²⁰*

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. LA IMPRESIÓN DE INTERNET DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE ÉSTAS, AL TENER LA NATURALEZA DE DESCUBRIMIENTO DE LA CIENCIA, SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR. *Conforme al artículo 1238 del Código de Comercio, los documentos privados son aquellos que, por exclusión, no son reputados por las leyes como instrumentos públicos, pero para que puedan ser considerados como tales, deben contener como característica esencial que pueda imputársele a una persona su elaboración o la orden de realizarse, para efectos de su reconocimiento. Por tanto, la impresión de Internet de una transferencia electrónica bancaria no debe valorarse como una copia simple o un documento privado, toda vez que no puede imputarse a una persona su elaboración, ante la falta de firma autógrafa para efectos de su reconocimiento, sino que constituye la impresión de la información generada vía electrónica y, en consecuencia, tiene la naturaleza de descubrimiento de la ciencia, cuyo valor probatorio queda al prudente arbitrio del juzgador, conforme a los artículos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al código mercantil referido. Así, para valorar la fuerza probatoria de esa documental electrónica, el juzgador deberá atender, preponderantemente, a la fiabilidad del método en que fue generada la información, a fin de corroborar su contenido, lo que puede acreditarse por medio del código de captura, sello digital, o cualquiera otra que permita autenticar su contenido. Además, como esa información electrónica es expresada en un documento, ésta puede objetarse en*

¹⁹ Tesis: I.3o.C.162 C (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Registro digital: 2008633, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2546, Tipo: Aislada.

²⁰ Tesis: I.3o.C.220 C (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Registro digital: 2009165, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2400, Tipo: Aislada.

cuanto a su alcance y valor probatorio o impugnarse de falsa, para lo cual, deberán seguirse las reglas establecidas en el Código de Comercio.²¹

Aunado a lo anterior, se encuentra el oficio **271-E-feb-2019**²², de fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, por medio del cual informó, entre otras cosas, que la cuenta utilizada para efectuar pagos a [REDACTED] [REDACTED], en el periodo de julio a septiembre de dos mil dieciocho, es la cuenta 0105670721 de BBVA Bancomer, CLABE 0127788001056707210, a nombre del Municipio de Nogales, Sonora.

Informe que es un documento público expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por lo que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Medios probatorios que, concatenados entre sí ponen en evidencia la existencia del recurso público financiero consistente en **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), el cual pertenecía a la hacienda pública municipal; con lo que se tiene por colmado el segundo de los elementos de la falta administrativa grave en estudio.

En otro contexto, en lo que respecta al **TERCER ELEMENTO** de la falta administrativa en estudio, consistente en la acción del servidor público de *autorizar la asignación del recurso público financiero*, éste se encuentra acreditado.

Se afirma lo anterior, pues en el expediente se encuentra el informe de presuntas irregularidades detectadas en los procesos de entrega-recepción de la Tesorería Municipal, remitido mediante oficio **341CCMC-2018**²³ de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora.

Informe del cual, en el apartado de observaciones con posible daño patrimonial, en la número dos, se desprende lo siguiente:

"De la revisión del seguimiento presupuestal del gastos correspondiente a la dependencia de la Tesorería Municipal, en la general se observa buen compartamiento presupuestal del gasto, a excepción del gasto efectuada, en el capítulo de servicios generales en la partida 34201, por servicios de cobranza, investigación crediticia y similar, la cual releja un excedente presupuestal al 31 de agosto de 2018, por la cantidad de \$ 2,273,212.30, en el presupuesto

²¹ Tesis: I.12o.C.68 C (10a.) sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, Registro digital: 2017851, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2579, Tipo: Aislada.

²² Foja 287 del expediente de origen.

²³ Fojas 2 a 48 del expediente de origen.




de la unidad administrativa de la dirección de ingresos, misma que al analizar los registro analíticas del gasto, el importe excedido, se refleja en el pago a un prestador de servicios DE FORMA INUCUAL, denominación LEGAL [REDACTED] la anterior debido a que en el ejercicio fiscal se le efectuaran pagos, por la cantidad de \$3,491,118.16, resulta relevante que dichos pagos acumulados antes señalados, se aplicaron de la fecha 06 de julio al 15 de septiembre de 2018, un total de 23 pagas consecutivas de facturas, con un importe total \$3,075,649.38, lo que representa el 88% de los pagos totales efectuadas sobre su facturación total en las últimas meses. Así mismo no se encontró evidencia a soporte documental en original de sus servicios prestados, y que se relacionaran en específica, en la carpeta de entrega recepción, y al hacer una revisión exhaustiva en el clausulado del contrato, se observa que no se cumplieron en totalidad de las cláusulas del servicio, por lo que se presume un posible daño patrimonial sobre los servicios pactados y cobrados, pues resultan documentalmente sus servicios no acreditados y los procesos jurídicos mal practicados, así como incompatibilidad entre las fechas de pago de los contribuyentes, la facturación de servicios prestada y las fechas de paga efectuadas por la Tesorería Municipal.

Informe de autoridad del cual en lo conducente se desprende que entre el seis de julio y quince de septiembre de dos mil dieciocho, fueron asignados recursos públicos financieros de la hacienda pública del Municipio de Nogales, a favor de la empresa [REDACTED]

Informe que es un documento público expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por lo que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

De igual forma, se tiene el oficio 047-E-2019²⁴ de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Contador Público [REDACTED] en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, por medio del cual remitió los **Auxiliares de Cuentas** correspondientes al periodo del uno de julio al quince de septiembre de dos mil dieciocho, de las que se desprenden que fueron pagadas **veintidós pólizas** expedidas por el Municipio a través de la Tesorería Municipal, las cuales en conjunto arrojan una cantidad total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), a favor de la empresa [REDACTED] acuerdo a la relación siguiente:

²⁴ Fojas 54 a 259 del expediente de origen.

		MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 15/sep/2018		Fecha: 05/sep/2018	
UP: 01.01.01		Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)		Cuentas de Registro (campo "Beneficiario" Contiene: REYES LO)		Hoja de Impresión: 11 de 11	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			
Fecha	Beneficiario	No Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-0105				BANCOMER 8721			
C04350 06/07/2018	SOLUCIONES LEGALES	22774930		SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC (FACT. 00218218. PRESTACION DE	\$0.00	\$2,974,347.80	-\$3,491,119.15
C04820 13/07/2018	SOLUCIONES LEGALES	00142024		SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC (FACT. 70547892F. PRESTACION DE	\$0.00	\$116,000.00	-\$532,770.36
C04822 19/07/2018	SOLUCIONES LEGALES	21427254		SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC (FACT. 70547892F. PRESTACION DE	\$0.00	\$116,000.00	-\$745,770.36
C04823 19/07/2018	SOLUCIONES LEGALES	21427270		SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC (FACT. 70547892F. PRESTACION DE	\$0.00	\$116,000.00	-\$861,770.36
C04867 06/08/2018	SOLUCIONES LEGALES	28205076		SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC (FACT. 00218218. PRESTACION DE	\$0.00	\$116,000.00	-\$977,770.36
C05301 21/08/2018	SOLUCIONES LEGALES	20732172		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 563 (ABONO FACT.	\$0.00	\$97,000.00	-\$1,074,770.36
C06429 22/08/2018	SOLUCIONES LEGALES	11027351		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 562 (ABONO FACT.	\$0.00	\$193,000.00	-\$1,267,770.36
C05512 24/03/2018	SOLUCIONES LEGALES	71232133		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 599 (ABONO FAC	\$0.00	\$208,000.00	-\$1,475,770.36
C06528 31/05/2018	SOLUCIONES LEGALES	75185726		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 140 (ABONO FAC	\$0.00	\$172,530.00	-\$1,648,300.36
C06116 04/09/2018	SOLUCIONES LEGALES	67616154		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 652 (FACT. 2051FE	\$0.00	\$145,000.00	-\$1,793,300.36
C06174 06/09/2018	SOLUCIONES LEGALES	30394078		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 657 (FACT. 38B5SE	\$0.00	\$165,000.00	-\$1,958,300.36
C06285 12/09/2018	SOLUCIONES LEGALES	92464305		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 663 (SERVICIOS DI	\$0.00	\$63,360.00	-\$2,021,660.36
C06286 12/09/2018	SOLUCIONES LEGALES	92464320		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 664 (SERVICIOS DI	\$0.00	\$145,000.00	-\$2,166,660.36
C06287 12/09/2018	SOLUCIONES LEGALES	92464335		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 665 (SERVICIOS DI	\$0.00	\$145,000.00	-\$2,311,660.36
C06301 12/09/2018	SOLUCIONES LEGALES	92464350		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 666 (SERVICIOS DI	\$0.00	\$145,000.00	-\$2,456,660.36
C06302 12/09/2018	SOLUCIONES LEGALES	92464365		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 667 (SERVICIOS DI	\$0.00	\$16,111.10	-\$2,472,771.46
C06401 14/09/2018	SOLUCIONES LEGALES	98746067		SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC (SERVICIO DE COBRANZA DE PRE	\$0.00	\$174,000.00	-\$2,646,771.46
C06427 14/09/2018	SOLUCIONES LEGALES	85148344		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 702 (FACT. 08AC9	\$0.00	\$104,400.00	-\$2,751,171.46
C06428 14/09/2018	SOLUCIONES LEGALES	90248279		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 702 (FACT. 08AC9	\$0.00	\$156,800.00	-\$2,907,971.46
C06472 15/09/2018	SOLUCIONES LEGALES	40448270		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 708 (FACTS. 34C2	\$0.00	\$145,743.74	-\$3,053,715.20
C06473 15/09/2018	SOLUCIONES LEGALES	40448253		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 709 (FACT. 34C2	\$0.00	\$152,772.88	-\$3,206,488.08
C06474 15/09/2018	SOLUCIONES LEGALES	40448240		GP SOLUCIONES LEGALES REYES LOMELI SC. Foto Pago: 710 (FACTS. 34C2	\$0.00	\$164,589.93	-\$3,371,078.01
Total:					0.00	2,974,347.80	-3,491,119.15

(25)

Aunado a lo anterior, remitió copia certificada de las referidas veintidós pólizas contables de los pagos realizados a [REDACTED] por un total de \$2,974,347.80 (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), durante el periodo de julio a septiembre de dos mil dieciocho, con su respectivo soporte, entre el cual se encuentran veintidós órdenes de pago expedidas a favor de la mencionada moral, de las que se advierte que éstas fueron autorizadas por [REDACTED] en su carácter de Tesorero Municipal; veintidós impresiones de internet de las transferencias electrónicas bancarias correspondientes a cada una de las mencionadas pólizas, relativas a la cuenta de retiro número 0105670721, del banco BBVA Bancomer, en la que aparece como titular el Municipio de Nogales, Sonora y como cuenta de depósito número 195013828 a nombre de [REDACTED] así como las facturas y órdenes de compra relativas, de acuerdo al cuadro siguiente:

No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	No. DE REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA	FECHA	CANTIDAD	CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO	PERSONA QUE AUTORIZÓ LA ORDEN DE PAGO
1	C9216218. FACT. C9216218. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PEDIALES	132320180761702420022774030	06/07/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PEDIALES	[REDACTED]
2	C0462D. FACT. 7054792F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PEDIALES	1323201807131539060069183024	13/07/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PEDIALES	[REDACTED]
3	C04822. FACT. 2FA9CCD. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PEDIALES	1323201807191408190021427254	19/07/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PEDIALES	[REDACTED]

²⁵ Imagen escaneada del expediente de origen y que se encuentra en la foja 55.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

4	C04823	FACT. E9AF1F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	I323201807191409530021427270	19/07/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	
5	CD4997	FACT. ACE19EB5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	I323201808061528480028208076	06/08/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	
6	CD5391	ABONO FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP 	I323201808211656000026732172	21/08/2018	\$97,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL BUEN MAZAL DEL NORTE S.A. DE C.V.	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE
7	C05429	LIQ. FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP 	I323201808221654540011022091	22/08/2018	\$193,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL BUEN MAZAL DEL NORTE S.A. DE C.V.	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE
8	CD5510	ABONO FACTS. AD29B312; 6954B37E; B87E10D7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A. GP 	I323201808241633420077836353	24/08/2018	\$200,000.00	HONORARIOS POR COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL FACTURAS AD29B312; 6954B37E; B87E10D7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE
9	C06D29	LIQ. FACTS. AD29B312; 6954B37E; B87E10D7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A. GP 	I323201808311723160075185036	31/08/2018	\$173,520.00	HONORARIOS POR COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL FACTURAS AD29B312; 6954B37E; B87E10D7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE
10	C06119	FACT. 2D51FC1F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP 	I323201809041711570067538058	04/09/2018	\$145,000.00	SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIAL	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE

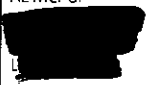

11	C06174	FACT. 3BBS5B96 PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	1323201809061720370039389028	06/09/2018	\$145,000.00	SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIAL	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
12	C06295	SERVICIOS DE COBRANZA DE UN FACTURA FDC3B967. GP [REDACTED]	1323201809121658480092466205	12/09/2018	\$53,360.00	SERVICIOS DE COBRANZA	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
13	C06298	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 6BA62C5B. GP [REDACTED]	1323201809121659520092466220	12/09/2018	\$145,000.00	NO	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
14	C06299	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 4D91CC7E. GP [REDACTED]	1323201809121706270092466257	12/09/2018	\$145,000.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 4D91CC7E	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
15	C06300	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 4D91CC7E. GP [REDACTED]	1323201809121708110092466272	12/09/2018	\$145,000.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 4D91CC7E	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
16	C06301	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 1D119A36. GP [REDACTED]	1323201809121709250092466287	12/09/2018	\$16,111.10	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 1D119A36	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]






TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020


17	C06401	SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES S/F 327C0EA7	I323201809141656040098248063	14/09/2018	\$174,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	ORDEN DE PAGO EN LA QUE SE OBSERVA EL NOMBRE DE [REDACTED] SU FIRMA ESTAMPADA EN EL APARTADO DEL NOMBRE DEL LICENCIADO [REDACTED]
18	C06427	FACT. 9BAC828A. SERVICIOS DE COBRANZA GP [REDACTED]	I323201809141649570098248044	14/09/2018	\$104,400.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
19	C06428	FACT. 0996740D. SERVICIOS DE COBRANZA GP [REDACTED]	I323201809141647370098248029	14/09/2018	\$156,600.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
20	C06472	FACTS. 34C78DE5; 0C8497C3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA GP [REDACTED]	I323201809151503310040448270	15/09/2018	\$183,993.78	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COBRD DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA 0C8497C3	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
21	CD6473	FACT. A9F1F97A. PRESTACIÓN DE SERVICIOS (COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO GP [REDACTED]	I323201809151502090040448255	15/09/2018	\$152,772.99	SERVICIOS DE COBRANZA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]

22	C06474	FACTS. 87A12ACD; FC6D0C87 . PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL ME. GP 	I323201809151452340040448240	15/09/2018	\$164,589.93	SERVICIOS DE CDBRANZA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE 
----	--------	--	------------------------------	------------	--------------	--	--

TOTAL \$2,974,347.80

Informe de autoridad de referencia al que se adjuntaron documentos públicos, tales como las mencionadas Auxiliares contables, pólizas y órdenes de pago, de los que se desprende que entre el seis de julio y el quince de septiembre de dos mil dieciocho, por medio de las referidas **veintidós órdenes** autorizadas por  sus consecuentes **veintidós pólizas**, se asignaron recursos públicos financieros de la hacienda pública del Municipio de Nogales, a favor de   por la cantidad total en conjunto de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional); recurso público financiero que fue otorgado a la mencionada empresa mediante las veintidós transferencia bancarias antes detalladas.

Documentos públicos expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, que se encuentran en los archivos del Ayuntamiento de Nogales, Sonora y fueron debidamente certificados por el licenciado Jorge Jáuregui Lewis, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento, de acuerdo a las facultades establecidas para ello en los artículos 89, fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; por lo que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Por otro lado, al referido informe fueron anexados documentos privados, como lo son las impresiones de internet de las transferencias **electrónicas bancarias**, así como las **facturas** expedidas por la empresa " las cuales si bien no constituyen documentos públicos, éstas tienen un valor indiciario de forma preponderante en el expediente.

Esto es así, pues por lo que hace a las impresiones de internet de las transferencias bancarias, éstas no deben valorarse como una copia simple o un documento privado, toda vez que no pueden imputarse a una persona su elaboración, ante la falta de firma autógrafa para efectos de su reconocimiento, sino que constituyen la impresión de la información generada vía electrónica y, en consecuencia, tiene la naturaleza de descubrimiento de la ciencia, cuyo valor probatorio queda al prudente arbitrio del juzgador, conforme al artículo 205 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

En tanto que, las facturas exhibidas constituyen documentos privados con valor indiciario, las cuales se encuentran relacionadas con las pólizas y transferencias de



referencia, así como de órdenes de compra agregadas al expediente; de las que se colige esas facturas fueron emitidas por [REDACTED] y presentadas para su cobro ante la Tesorería Municipal, y que si bien no son documentos públicos, éstas crean convicción en este tribunal en cuanto a su veracidad y contenido, pues tienen congruencia con el resto del material probatorio, máxime que no fueron objetadas, ni controvertidas por la parte que las emitió.

Al respecto, cabe señalar que la factura produce indicios importantes sobre la relación comercial y la entrega de las mercancías o prestación de los servicios, susceptible de alcanzar plena fuerza probatoria si es reconocida o aceptada por quien la emite, en forma expresa o tácita, o si se demuestra su vinculación al acto documentado por otros medios.

En efecto, las facturas son documentos sui géneris, porque no son simples textos elaborados libremente por cualquier persona, en cuanto a contenido y forma, sino documentos que sólo pueden provenir legalmente de comerciantes o prestadores de servicios registrados ante las autoridades hacendarias, mediante los formatos regulados jurídicamente sujetos a ciertos requisitos para su validez, y a los cuales se les sujeta a un estricto control, desde su elaboración impresa hasta su empleo, y cuya expedición puede acarrear serios perjuicios al suscriptor, requisitos que, en su conjunto, inclinan racionalmente hacia la autenticidad, como regla general, salvo prueba en contrario.

Por tanto, su contenido adquiere una fuerza indiciaria de mayor peso específico que la de otros documentos privados, simples, al compartir de algunas características con los documentos públicos.

Asimismo, la factura fue concebida originalmente con fines fiscales, para demostrar las relaciones comerciales por las cuales debían pagarse o deducirse impuestos, pero en el desarrollo de las relaciones mercantiles han adquirido otras funciones adicionales, como la de acreditar la propiedad de los vehículos automotores ante las autoridades de tránsito y otras, reconocidas inclusive en la normatividad de esa materia; respecto de otros bienes se ha venido incorporando en la conciencia de las personas como generadoras de indicios de la propiedad; entre algunos comerciantes se vienen empleando como instrumentos preparatorios o ejecutivos de una compraventa comercial o prestación de servicios, que se expiden en ocasión de la celebración del contrato respectivo, para hacer una oferta (preparatorio), o para que el cliente verifique si la mercancía entregada corresponde con la pedida, en calidad y cantidad, y haga el pago correspondiente, y en otros casos se presenta con una copia para recabar en ésta la firma de habersé recibido la mercancía o el servicio.

Por tanto, las facturas atribuidas a cierto comerciante se presumen provenientes de él, salvo prueba en contrario, como sería el caso de la falsificación o sustracción indebida del legajo respectivo.

Además, no se pierde de vista que las referidas facturas fueron anexados al citado informe rendido mediante el citado oficio **047-E-2019** de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, y éstas se hallaban en los archivos de la Tesorería Municipal y no se

encuentran contradichas con algún otro medio probatorio, sino por el contrario, se encuentran corroboradas con otras probanzas, y además no fueron objetadas por las partes, de conformidad con el artículo 206 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Por lo que, las anotadas facturas tienen un valor indiciario que se encuentra concatenado con otros medios probatorios y genera convicción en este tribunal para otorgarle eficacia probatoria para acreditar que éstas fueron emitidas por [REDACTED] [REDACTED] presentadas para su cobro ante la Tesorería Municipal, en las cantidades que detalla cada una de ellas; y que fue derivado de estas facturas que se emitieron las mencionadas veintidós pólizas, por parte de la Tesorería Municipal y por las que se asignaron los recursos en las cantidades precisadas de manera individual en el cuadro antes plasmado, que en conjunto dieron una cantidad total de \$2,974,347.80 (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional).

En adición, se encuentra el oficio 271-E-feb-2019²⁶, de fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, por medio del cual informó, entre otras cosas, que la cuenta utilizada para efectuar pagos a [REDACTED] [REDACTED], en el periodo de julio a septiembre de dos mil dieciocho, es la cuenta [REDACTED] de BBVA Bancomer, [REDACTED] nombre del Municipio de Nogales, Sonora.

Informe que es un documento público expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por lo que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Medios probatorios relatados que demuestran que entre el seis de julio y el quince de septiembre de dos mil dieciocho, el presunto responsable **autorizó la asignación de recursos públicos financieros** de la hacienda pública Municipal de Nogales, Sonora, por la cantidad total \$2,974,347.80 (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional) a favor de la empresa [REDACTED]; lo cual realizó mediante **veintidós órdenes de pago** y sus consecuentes **veintidós pólizas**; recurso público financiero que fue pagado a la mencionada empresa mediante las veintidós transferencias bancarias antes detalladas. Con lo que se tiene por acreditado el tercer elemento de la falta administrativa grave.

En otro rubro, en lo que respecta al **CUARTO ELEMENTO** de la falta administrativa grave en estudio, consistente en **que lo anterior lo realice en contraposición a las normas aplicables**, éste se encuentra requisitado con los medios de prueba allegados al

²⁶ Foja 287 del expediente de origen.



expediente y conforme a los argumentos que a continuación se expresan.

El diecisiete de enero de dos mil dieciocho, el Ayuntamiento y la empresa [REDACTED] (como prestador de servicios) celebraron el contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018**²⁷ de prestación de servicios por honorarios profesionales, cuyo **objeto**²⁸ era la prestación oportuna, directamente, por cuenta y bajo responsabilidad de la indicada moral, del servicio de **cobranza extrajudicial y judicial para la recuperación de créditos fiscales y asesoría jurídica**; por el **plazo**²⁹ del uno de enero a quince de septiembre de dos mil dieciocho.

Para ello, de acuerdo a la **cláusula segunda** del anotado contrato, el Ayuntamiento a través de **Tesorería coordinaría las actividades del prestador de servicios**, con el objeto de que éste, de manera directa e indirecta y con los elementos personales y materiales propios, realizara la práctica de diligencias de cobranza administrativa y procesal jurídica a deudores morosos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de índole municipal, diligencias que deberían realizarse con anterioridad a la substanciación de procedimientos económicos coactivos correspondientes.

Al efecto, en esa cláusula se especificó además que las cuentas fiscales susceptibles de turnar al prestador de servicios estaban las consideradas las insolutas por impuesto predial, por el impuesto de traslación de dominio o de cualquier contribución que el causante no cubra y a juicio de la Tesorería Municipal, requiriera una cobranza especializada. Las cuales **se turnarían al prestador de servicios, vía escrito por Tesorería Municipal, en la que se precisaría como mínimo nombre del contribuyente, clave, adeudo, tiempo de morosidad, etcétera.**

Por otro lado, conforme a la **cláusula quinta** del contrato, el **prestador de servicios** se obligaba a prestar al Ayuntamiento los servicios profesionales referidos en la cláusula primera del contrato, mismos que comprenderían entre otras **obligaciones**, las siguientes:

"1.- Entregar en forma mensual al H Ayuntamiento a través de Tesorería Municipal todos los informes que requiera este, con relación a todos aquellos aspectos que involucren el desarrollo de los efectos del presente instrumento.

2.- Asimismo, deberá cada mes presentar un infarme de la cobranza judicial o extrajudicial realizada, especificando los montos recaudados por mativo de su gestión.

(...)

4.- Asimismo, "El Prestador de Servicios" se obliga a llevar registro y control detallado de todos y cada uno de los asuntos que le fueren encomendados por virtud de este instrumento jurídico. Esta obligación deberá entenderse sin perjuicio de que esta entidad de gobierno, realice su cotejo y verificación, de ingresos efectivos por la gestión realizada, por conducto de Tesorería Municipal, y lleve su propio registro y control de los asuntos turnados al profesionista en cuestión.

(...)

²⁷ Fojas 262 a 272 del expediente de origen.

²⁸ Cláusula Primera del Contrato.

²⁹ Cláusula Séptima del Contrato.

7.- Proporcionar al "El Ayuntamiento" los datos obtenidos en función de sus servicios, ya sea a través de los medios magnéticos o bajo la forma que "El Ayuntamiento" y "El Prestador de Servicios" determinen de común acuerdo, asimismo, el envío de los documentos elaborados para la firma respectiva de los funcionarios de este H. Ayuntamiento para efecto de la tramitación de los procedimientos.

(...)

15.- Revisar bajo su mas estricta responsabilidad, los documentos y expedientes que le fueren proporcionados, determinando y recabando los faltantes para iniciar con su actuación profesional y darlas a conocer a el H. Ayuntamiento para iniciar en calabración can tesarería la cobranza extrajudicial y judicial para la recuperación de créditos fiscales y asesoría jurídica...

(Lo resaltado con subrayado no es de origen)

De igual forma, de acuerdo a la **cláusula novena** del contrato, el Ayuntamiento se comprometía a cubrir al prestador de servicios por concepto de honorarios el **25%** (veinticinco por ciento) sobre el monto de las cantidades que se recuperaran por Tesorería Municipal, ya sea en la vía judicial o extrajudicial, por los servicios materia del citado contrato, por concepto de rezago. **Porcentaje mencionado que se pagaría sobre la cantidad mensual acumulada** que hubiere ingresado al Ayuntamiento por los referidos servicios.

La referida contraprestación se cubriría en las oficinas de la Tesorería Municipal, previa exhibición por parte del prestador de servicios de los recibos que contengan los requisitos fiscales y administrativos correspondientes.

Por otra parte, conforme a la **cláusula décima primera**, las partes convinieron que el pago relativo se realizaría mediante presentación de recibos de honorarios y/o facturas con fecha de recibido a satisfacción del Ayuntamiento, cuyo importe sería liquidado en un plazo no mayor a veinte días naturales, a partir de la fecha del recibo, una vez que Tesorería Municipal realizara un análisis de los ingresos mensuales acumulados y que hubieren ingresado al Ayuntamiento por los servicios contratados.

En otro rubro, en la **cláusula décima octava** del contrato se estipuló que la información y documentación que generara el prestador de servicios con motivo del citado contrato, sería propiedad exclusiva del Ayuntamiento, en consecuencia, aquél se obligaba a **conservarla en óptimas condiciones, a no alterarla, así como a entregarla en su integridad al Ayuntamiento cuando este último lo requiriera.**

En otro contexto, cabe destacar que de acuerdo a las **declaraciones del Ayuntamiento** plasmadas el citado contrato, en la especificada en su inciso E), se advierte que **para realizar el pago de los honorarios y demás gastos que derivaran del mismo, sería con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal 2018, partida 34201 de Tesorería Municipal.**

Bajo esa tesitura, de acuerdo a las declaraciones y cláusulas estipuladas en el indicado



contrato, se desprende que el presunto responsable, en su carácter de Tesorero Municipal era el encargado de la coordinación, supervisión y pago, de los servicios profesionales de cobranza efectuados por la empresa [REDACTED] derivados del mencionado contrato.

Esto es así, pues como titular de la Tesorería era el encargado de **coordinar** las actividades de la indicada moral y de turnarle vía escrito la relación de los causantes morosos a los que debería realizar la cobranza correspondiente, en la que se precisaría como mínimo nombre del contribuyente, clave, adeudo y tiempo de morosidad; así como de proporcionarle los documentos necesarios.

Asimismo, como Tesorero Municipal tenía la obligación de **supervisión** de las actividades de la mencionada empresa, pues al efecto, la indicada moral debía entregarle en forma mensual todos los informes que le requiriera; asimismo, la empresa debía presentarle cada mes un informe de la cobranza judicial o extrajudicial realizada, especificando los montos recaudados por motivo de su gestión; además como Tesorero Municipal debía realizar el cotejo y verificación, de ingresos efectivos por la gestión realizada, y llevar su propio registro y control de los asuntos turnados a la moral en cuestión.

Aunado a lo anterior, el presunto responsable como Tesorero Municipal debía efectuar el **pago** a la empresa por los servicios prestados como honorarios del 25% (veinticinco por ciento) sobre el monto de las cantidades que se recuperaran por Tesorería Municipal, ya sea en la vía judicial o extrajudicial, por los servicios materia del citado contrato, por concepto de rezago. Porcentaje mencionado que debía pagarse sobre la cantidad mensual acumulada que hubiere ingresado al Ayuntamiento por los referidos servicios; por lo que, como Tesorero Municipal, el presunto responsable debía ejecutar el análisis correspondiente para verificar que efectivamente los recursos recuperados fueron ingresados a la hacienda pública municipal; igualmente, debía cotejar con soporte documental que los servicios sí hubieren sido efectivamente realizados, para entonces autorizar la asignación del recurso público financiero correspondiente. Asimismo, el pago correspondiente debía hacerlo ajustándose al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho de esa Tesorería Municipal.

En otro orden de ideas, conforme a los artículos 91, fracciones VII, VIII, IX, XVI y XVII y 92, fracciones II y IV, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, el presunto responsable en su carácter de Tesorero Municipal, en lo conducente tenía las siguientes obligaciones y facultades:

"ARTÍCULO 91.- Son obligaciones del Tesarera Municipal:

(...)

VII. Documentar toda ministración de fondas públicas;

VIII. Llevar la contabilidad general y el control del ejercicia presupuestal;

IX. Hacer los pagos con estricta apega al Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento;

(...)

XVI. Formar y llevar un expediente para cada empresa en la que participe el Ayuntamiento; y

XVII. Las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, bandos de policía y disposiciones de observancia general."

"ARTÍCULO 92.- Son facultades del Tesorero Municipal:

(...)

II. Ejercer el Presupuesto de Egresos y efectuar las pagas de acuerdo a los programas y presupuestos aprobados; y

(...)

IV.- Las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, bandos de policía y disposiciones de observancia general."

Asimismo, conforme al Presupuesto de Egresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, aprobado mediante el Acta No. 62 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 18 (Dieciocho) de Diciembre del año dos mil diecisiete, del Ayuntamiento Municipal de Nogales, Sonora, el presunto responsable como Tesorero Municipal, tenía las siguientes obligaciones:

"Artículo 4°.- El ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer las abjetivos a las que estén destinados, tal como la establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente:

(...)

VIII. La Tesorería Municipal efectuará las pagas con cargo al presupuesto de egresos del municipio, cuidando en todas las cosas que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.

(...)

X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado."

"Artículo 25°.- En el ejercicio del presupuesto, los titulares de las dependencias, las comisarias, delegadas y directores generales, serán responsables de cumplir estrictamente las disposiciones de las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuestal previamente aprobadas. La inobservancia de estas disposiciones motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley en la Materia."

Artículo 26°.- La Tesorería Municipal vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del Gasto Público Estatal, sin perjuicio de las facultades expresamente conferidas a el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental."



Ahora bien, del expediente de origen se advierten probanzas que ponen en evidencia que el presunto responsable, en su carácter de Tesorero Municipal, **autorizó la asignación recursos públicos financieros** a la empresa "[REDACTED] **contraposición a las normas aplicables**, en el caso, en contraposición a los artículos 91, fracciones VII, VIII, IX, XVI y 92, fracción II, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal; y los numerales 4, fracciones VIII y X, 25 y 26, del Presupuesto de Egresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho.

Se afirma lo anterior, pues de los medios probatorios portados se advierte que el presunto responsable, en su carácter de Tesorero Municipal, **autorizó la asignación de recursos públicos financieros** de la hacienda pública Municipal de Nogales, Sonora, por la cantidad total **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional) a favor de la empresa "[REDACTED] **cual realizó mediante veintidós órdenes de pago y sus consecuentes veintidós pólizas**; recurso público financiero que fue pagado a la mencionada empresa mediante las veintidós transferencias bancarias antes detalladas.

Lo cual realizó, **sin que en el caso exista soporte probatorio** que acredite que el presunto responsable, en su carácter de Tesorero Municipal **hubiere coordinado** las actividades de la indicada moral, pues en autos no se encuentra documento en que conste que aquél le hubiere turnado vía escrito a la mencionada empresa, la relación de los causantes morosos a los que debía realizar la cobranza correspondiente, en la que se precisaría como mínimo nombre del contribuyente, clave, adeudo y tiempo de morosidad; así como de proporcionarle los documentos necesarios.

Asimismo, no se encuentra prueba que ponga en evidencia que el presunto responsable en su carácter de Tesorero Municipal, **hubiere cumplido con su obligación de supervisión** de las actividades de la mencionada empresa, pues al efecto, no se encuentran allegados los informes que la indicada moral debía entregarle en forma mensual, respecto de la cobranza judicial o extrajudicial realizada, especificando los montos recaudados por motivo de su gestión; como tampoco que el presunto responsable como Tesorero Municipal hubiere realizado el cotejo y verificación, de los ingresos efectivos por la gestión realizada, y llevar su propio registro y control de los asuntos turnados a la moral en cuestión.

Aunado a lo anterior, el presunto responsable como Tesorero Municipal debía realizar el **pago** a la empresa por los servicios prestados como honorarios del 25% (veinticinco por ciento) sobre el monto de las cantidades que se recuperaran por Tesorería Municipal, ya sea en la vía judicial o extrajudicial, por los servicios materia del citado contrato, por concepto de rezago. Porcentaje mencionado que debía pagarse sobre la cantidad mensual acumulada que hubiere ingresado al Ayuntamiento por los referidos servicios; sin embargo, en el expediente no se desprenden medios de prueba que acrediten que el presunto responsable hubiere realizado el análisis correspondiente y que hubiere

verificado que efectivamente los recursos recuperados fueron ingresados a la hacienda pública municipal; igualmente, no se observa en autos que hubiere cotejado con soporte documental que los servicios sí hubieren sido efectivamente realizados, para entonces autorizar la asignación del recurso público financiero correspondiente. De igual forma, no se desprende en autos que el pago correspondiente se hubiere ajustado al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho de esa Tesorería Municipal.

De lo que se observa que, el presunto responsable en su carácter de Tesorero Municipal no cumplió con sus obligaciones estipuladas en las **cláusulas primera, segunda, quinta, novena, décima y décima octava**, del contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018** de prestación de servicios por honorarios profesionales, celebrado entre el Ayuntamiento y la moral [REDACTED] para la prestación del servicio de **cobranza extrajudicial y judicial para la recuperación de créditos fiscales y asesoría jurídica**, por el plazo del uno de enero a quince de septiembre de dos mil dieciocho.

Esto es así, tal como se advierte del oficio **341CCMC-2018³⁰** de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Contador Público [REDACTED] en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora.

Informe del cual, en el apartado de observaciones con posible daño patrimonial, en la número dos, se desprende lo siguiente:

"De la revisión del seguimiento presupuestal del gastos correspondiente a la dependencia de la Tesorería Municipal, en lo general se observa buen campartamiento presupuestal del gasta, a excepción del gasta efectuado, en el capítulo de servicios generales en la partida 34201, por servicios de cobranza, investigación crediticia y similar, la cual releja un excedente presupuestal al 31 de agosto de 2018, por la cantidad de \$ 2,273,212.30, en el presupuesto de la unidad administrativa de la dirección de ingresos, mismo que al analizar las registra analíticas del gasta, el imparte excedida, se refleja en el pago a un prestador de servicios DE FORMA INUCUAL, denominación LEGAL SOLUCIONES [REDACTED] la anterior debido a que en el ejercicio fiscal se le efectuaran pagas, por la cantidad de \$3,491,118.16, resulta relevante que dichas pagas acumuladas antes señaladas, se aplicaran de la fecha 06 de julio al 15 de septiembre de 2018, un total de 23 pagas consecutivos de facturas, con un imparte total \$3,075,649.38, lo que representa el 88% de las pagas totales efectuados sobre su facturación total en los últimos meses. Así misma no se encontró evidencia a saparte documental en original de sus servicios prestadas, y que se relacionaran en específica, en la carpeta de entrega recepción, y al hacer una revisión exhaustiva en el clausulada del cantrato, se observa que no se cumplieron en totalidad de las cláusulas del servicio, par la que se presume un posible doña patrimonial sobre las servicios pactados y cabradas, pues resulton documentalmente sus servicios no acreditados y las pracesas jurídicos mal practicadas, así como incompatibilidad entre las fechas de paga de las contribuyentes, lo facturación de servicios prestada y las fechas de pago efectuados por la Tesorería Municipal.

(Lo resaltado no es de origen)

Informe de autoridad del cual en lo conducente se desprende que entre el seis de julio y quince de septiembre de dos mil dieciocho, fueron asignados recursos públicos financieros de la hacienda pública del Municipio de Nogales, a favor de la empresa [REDACTED] que no se encontró evidencia o soporte

³⁰ Fojas 2 a 48 del expediente de origen.



documental en original de sus servicios prestados, y que se relacionaran en específico, en la carpeta de entrega recepción, y al hacer una revisión exhaustiva en el clausulado del contrato, se observó que no se cumplieron en totalidad de las cláusulas del servicio, por lo que se presume un posible daño patrimonial sobre los servicios pactados y cobrados, pues resultan documentalmente sus servicios no acreditados y los procesos jurídicos mal practicados, así como incompatibilidad entre las fechas de pago de los contribuyentes, la facturación de servicios prestada y las fechas de pago efectuadas por la Tesorería Municipal.

Informe que es un documento público expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por lo que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

De igual forma, se tiene el oficio **047-E-2019³¹** de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, por medio del cual remitió los **Auxiliares de Cuentas** correspondientes al periodo del uno de julio al quince de septiembre de dos mil dieciocho, de las que se desprenden que fueron pagadas **veintidós pólizas** expedidas por el Municipio a través de la Tesorería Municipal, las cuales en conjunto arrojan una cantidad total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), a favor de la empresa [REDACTED]

Aunado a lo anterior, remitió copia certificada de las referidas **veintidós pólizas** contables de los pagos realizados a [REDACTED] por un total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), durante el periodo de julio a septiembre de dos mil dieciocho, con su respectivo soporte, entre el cual se encuentran **veintidós órdenes de pago** expedidas a favor de la mencionada moral, de las que se advierte que éstas fueron autorizadas por [REDACTED] su carácter de Tesorero Municipal; **veintidós impresiones de internet de las transferencias electrónicas bancarias** correspondientes a cada una de las mencionadas pólizas, relativas a la cuenta de retiro número 0105670721, del banco BBVA Bancomer, en la que aparece como titular el Municipio de Nogales, Sonora y como cuenta de depósito número 195013828 a nombre de "S [REDACTED]" í como las facturas y órdenes de compra relativas.

Informe, del cual se desprende que las mencionadas órdenes y pólizas fueron emitidas, sin soporte documental que evidenciara el servicio prestado por la empresa, pues no se encuentran los oficios o escritos por los cuales el presunto responsable, en su carácter de Tesorero Municipal, hubiere turnado a la mencionada empresa, de la relación de los

³¹ Fojas 54 a 259 del expediente de origen.

causantes morosos a los que debía realizar la cobranza correspondiente, en la que se precisaría como mínimo nombre del contribuyente, clave, adeudo y tiempo de morosidad.

Tampoco se encuentra prueba que ponga en evidencia de los informes que la indicada moral debía entregarle en forma mensual a la Tesorería Municipal, respecto de la cobranza judicial o extrajudicial realizada, especificando los montos recaudados por motivo de su gestión; ni los documentos correspondientes para realizar el cotejo y verificación, de los ingresos efectivos por la gestión realizada; ni del registro y control por parte del presunto responsable como Tesorero Municipal, de los asuntos turnados a la moral en cuestión.

Aunado a lo anterior, el presunto responsable como Tesorero Municipal debía realizar el pago a la empresa por los servicios prestados como honorarios del 25% (veinticinco por ciento) sobre el monto de las cantidades que se recuperaran por Tesorería Municipal, ya sea en la vía judicial o extrajudicial, por los servicios materia del citado contrato, por concepto de rezago. Porcentaje mencionado que debía pagarse sobre la cantidad mensual acumulada que hubiere ingresado al Ayuntamiento por los referidos servicios; sin embargo, en el expediente no se desprenden medios de prueba que acrediten que el presunto responsable hubiere realizado el análisis correspondiente y que hubiere verificado que efectivamente los recursos recuperados fueron ingresados a la hacienda pública municipal; igualmente, no se observa en autos que hubiere cotejado con soporte documental que los servicios sí hubieren sido efectivamente realizados, para entonces autorizar la asignación del recurso público financiero correspondiente. De igual forma, no se desprende en autos que el pago correspondiente se hubiere ajustado al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho de esa Tesorería Municipal.

Se afirma así, ya que del mismo informe remitido se advierte que tal soporte documental no se encuentra en los archivos de la Tesorería Municipal, sin que al efecto el presunto responsable hubiere refutado tal circunstancia, o hubiere ofrecido medios probatorios que acreditaran que sí realizó las obligaciones anteriormente señaladas.

Al respecto, del mencionado informe se pueden observar los documentos anexos a cada una de las veintidós pólizas y veintidós órdenes de pago autorizadas por el presunto responsable en su carácter de Tesorero Municipal, los cuales constan de las veintidós transferencias realizadas por el municipio a la mencionada empresa, las facturas emitidas por ésta última y que presentó ante Tesorería Municipal para su pago, órdenes de compra expedidas por Tesorería Municipal, impresiones de estados de comprobantes fiscales, recibos de pago que no cuentan con datos de identificación del causante y el concepto es de *“diversión y espectáculos”*, escritos de listados que contienen algunos rubros como clave catastral, fecha de pago, pago y número de documento, pero que no tienen nombres, logotipo, ni membrete, como tampoco el nombre o firma de la persona que lo emitió; y solamente a dos de las pólizas se acompañaron notificaciones. Lo anterior, como se plasma en el siguiente cuadro de manera individual por cada póliza y orden de pago, así como de los documentos que se anexaron a cada una:





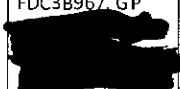
No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	CANTIDAD	CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO	FACTURA CON FOLIO FISCAL No.	DOCUMENTOS DE SOPORTE
---------------	-----------------------	----------	------------------------------	------------------------------	-----------------------



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

1	C9216218	FACT. C9216218. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	C9216218-1305-4F87-826F-00C6C27F67A1	NOTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL FOLIO: REQ/002/AGO/IMP-002 DE FECHA 17/AGO/2017, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. OMAR DAVID CASTILLO ÁVILA, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE DEL CONTRIBUYENTE [REDACTED]
2	C04620	FACT. 7D54792F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	7D54792F-FC92-4F23-BFD6-E003A96A0E27	IMPRESIÓN DE UN LISTADO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TESORERÍA POR CONCEPTO DE DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS
3	C04822	FACT. 2FA9CCD. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	2F7A9CCD-1828-4B82-BD7C-689A9BEAC8D	NO
4	C04823	FACT. E9AF1F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	E9A9AF1F-5AE1-47FA-9163-2D9B17021638	NO
5	C04997	FACT. ACE19EB5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	ACE19EB5-B9FF-44D9-AA82-24F91841C797	NO
6	C05391	ABONO FACT. 30A34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	\$97,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL BUEN [REDACTED]	30A34E75-FED8-46C4-80A3-7808792726CD	ORDEN DE COMPRA DE FECHA 06/08/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DE REPORTE DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE [REDACTED] V. A FAVOR DEL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE \$1,000,000.00; ORDEN DE COMPRA NÚMERO 821, DE FECHA 06/AGO/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DEL ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL;
7	C05429	LIQ. FACT. 30A34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	\$193,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL [REDACTED]	30A34E75-FED8-46C4-80A3-7808792726CD	IMPRESIÓN DE REPORTE DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE [REDACTED] A FAVOR DEL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE \$1,000,000.00; ORDEN DE COMPRA NÚMERO 821, DE FECHA 06/AGO/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00;



						IMPRESIÓN DEL ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL;
8	COSS10	ABDNO FACTS. AD29B312; 69S4B37E; B87E1DD7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A. GP 	\$200,000.00	HONORARIOS POR COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL FACTURAS AD29B312; 69S4B37E; B87E1DD7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A	AD29B312-B0FB-4051-B96E-181DFE377395 69S4B37E-1041-4D98-9FA4-2E664EE8404 B87E1DD7-AA0A-4071-B2B8-17CBA2C29B3B 30E3232-D553-47B0-915A-B6485A9D1546 97654FA7-737C-40AF-8FBF-56309CD34047 8E9DA28A-1C89-4097-A492-B954A49B889C A1D4788A-133B-4908-A2DB-9C9A24CCE8D	ORDEN DE COMPRA 681 DE FECHA 16/08/2018 POR LA CANTIDAD DE \$373,520.00; ÓRDENES DE COMPRAS NÚMEROS 879, 880, 881, 882, 883, 884 Y 885, TODAS DE FECHA 16/AGO/2018 Y TODAS POR LA CANTIDAD DE \$53,360; SIETE IMPRESIONES DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL
9	C06029	LIQ. FACTS. AD29B312; 69S4B37E; B87E1DD7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A. GP 	\$173,520.00	HONORARIOS POR COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL FACTURAS AD29B312; 69S4B37E; B87E1DD7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A	AD29B312-B0FB-4051-B96E-181DFE377395 69S4B37E-1041-4D98-9FA4-2E664EE8404 B87E1DD7-AA0A-4071-B2B8-17CBA2C29B3B 30E3232-D553-47B0-915A-B6485A9D1546 97654FA7-737C-40AF-8FBF-56309CD34047 8E9DA28A-1C89-4097-A492-B954A49B889C A1D4788A-133B-4908-A2DB-9C9A24CCE8D	ORDEN DE COMPRA 681 DE FECHA 16/08/2018 POR LA CANTIDAD DE \$373,520.00; ÓRDENES DE COMPRAS NÚMEROS 879, 880, 881, 882, 883, 884 Y 885, TODAS DE FECHA 16/AGO/2018 Y TODAS POR LA CANTIDAD DE \$53,360; SIETE IMPRESIONES DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL
10	C06119	FACT. 2D51FC1F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP 	\$145,000.00	SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIAL	2D51FC1F-D16F-4653-B6F7-SC0108283EE2	ORDENES DE COMPRAS NÚMEROS 734 Y 929, AMBOS DE FECHA 24/08/2018, Y POR LA CANTIDAD CADA UNO DE \$145,000.00; UNA IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL
11	C06174	FACT. 3BB55B96 PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP 	\$145,000.00	SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIAL	3BB55B96-7F73-45F9-96EA-BDDCCD72A921	ORDEN DE COMPRA 930 DE FECHA 24/AGO/2018, POR LA CANTIDAD DE \$145,000.00; UNA IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL
12	C06295	SERVICIOS DE COBRANZA DE UN FACTURA FDC3B967. GP 	\$53,360.00	SERVICIOS DE COBRANZA	FDC3B967-D777-44A0-AD42-D035BE122DB5	RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$184,000.00 EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE NOGALES, POR CONCEPTO DE DIVERSION Y ESPECTÁCULOS; UNA IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

13	C06298	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 6BA62C58. GP [REDACTED]	\$145,000.00	NO	6BA62C58-6E29-467B-94A6-CBECFBAE7D44	ORDENES DE COMPRAS 732 Y 928, AMBAS DE FECHA 24/AGD/2018, Y CADA UNA POR LA CANTIDAD DE \$145,000.00; UNA IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL
14	C06299	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 4D91CC7E. GP [REDACTED]	\$145,000.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 4D91CC7E	C7A88287-CBD2-4695-9D37-9B013C8F92D6	ORDENES DE COMPRAS 754 Y 963, AMBAS DE FECHA 28/AGO/2018, Y CADA UNA POR LA CANTIDAD DE \$145,000.00; UNA IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL; RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$500,000.00 EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE NOGALES, POR CONCEPTO DE DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS
15	C06300	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 4D91CC7E. GP [REDACTED]	\$145,000.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 4D91CC7E	4D91CC7E-6004-4611-85FC-88E094145031	ORDENES DE COMPRAS 753 Y 962, AMBAS DE FECHA 29/AGO/2018, Y CADA UNA POR LA CANTIDAD DE \$145,000.00; UNA IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL; RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$500,000.00 EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE NOGALES, POR CONCEPTO DE DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS.
16	C06301	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 1D119A36. GP [REDACTED]	\$16,111.10	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 1D119A36	1D119A36-6150-4CCF-97F0-E9AE5943ABC9	ORDENES DE COMPRAS 751 Y 960, AMBAS DE FECHA 29/AGO/2018, Y CADA UNA POR LA CANTIDAD DE \$116,111.10; RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$55,555.55 EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE NOGALES, POR CONCEPTO DE DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS.

17	C06401	SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES S/F 327C0EA7	\$174,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	327C0EA7-88D1-4DBD-BF43-AB8EEDEC69F2	NDTIFICACIONES, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL CON FOLIOS: REQ/005/MAY/IMP-005 Y REQ/001/MAY/IMP-001, AMBOS DE FECHA 14 DE MAYO DE 2018 Y SIGNADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. LUIS GERARDO OLIVAS DÍAZ, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE "ENTRETENIMIENTO PALERMO S.A. DE C.V."; NDTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL FOLIO: REQ/002/AGO/IMP-002 DE FECHA 14/AGO/2017, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. OMAR DAVID CASTILLO ÁVILA, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE DEL CONTRIBUYENTE "GRUPO OCÉANO S.A. DE C.V."; IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL
18	C06427	FACT. 9BAC828A. SERVICIOS DE COBRANZA GP 	\$104,400.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA	9BAC828A-E66B-4B8E-A4CD-CCF3A0DBDDAS	ORDENES DE COMPRAS 828 Y 1039, AMBAS DE FECHA 12/SEP/2018, Y CADA UNA POR LA CANTIDAD DE \$104,400.00; RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$184,000.00 EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE NOGALES, POR CONCEPTO DE DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS; IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL
19	C06428	FACT. 09967400. SERVICIOS DE COBRANZA GP 	\$156,600.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA	9967400-D166-40B3-9502-936E94ABAB56	ORDENES DE COMPRAS 824 Y 1038, AMBAS DE FECHA 12/SEP/2018, Y CADA UNA POR LA CANTIDAD DE \$156,600.00; RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$540,000.00 EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE NOGALES, POR CONCEPTO DE DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS; IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

20	C06472	FACTS. 34C78DE5; 0C8497C3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA GP [REDACTED]	\$183,993.78	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENT E AL MES DE JULIO DE 2018 Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA 0C8497C3	34C78DE5-A3D6-405B- 8C55-B70D766F256D 0C8497C3-21D7-48F1- 9873-74C5B782433D	ORDENES DE COMPRAS 849, 1068 Y 1067, TODAS DE FECHA 12/SEP/2018, POR LAS CANTIDADES DE \$183,993.78, \$145,000.00 Y \$38,993.78, RESPECTIVAMENTE; IMPRESIÓN CONSTANTE DE DDS HOJAS, SIN TÍTULO, NOMBRE O LOGOTIPO, CDRRESPON DIENTE A UN LISTADO QUE CONTIENE LOS RUBROS DE CLAVE CATASTRAL, FECHA DE PAGO, PAGO Y NÚMERO DE DOCUMENTO; UNA IMPRESIÓN DE COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA PDR ESPEI, DE LA BANCA AFIRME, POR LA CANTIDAD DE \$500,000.00 EN LA QUE APARECE COMO BENEFICIARIO EL MUNICIPIO DE NOGALES, POR EL CONCEPTO "PAGO 9 PARCIAL MUNICIPIO NOGALES GOH".
21	C06473	FACT. A9F1F97A. PRESTACIÓN DE SERVICIOS (COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENT E AL MES DE AGOSTO GP [REDACTED]	\$152,772.99	SERVICIOS DE COBRANZA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENT E AL MES DE AGOSTO 2018	A9F1F97A-2115-4BF9- BD79-D5CC07C961A6	ORDENES DE COMPRAS, 848 Y 1066, AMBAS DE FECHA 14/SEP/2018, CADA UNA POR LA CANTIDAD DE \$152,772.99; IMPRESIÓN CONSTANTE DE DOS HOJAS, SIN TÍTULO, NOMBRE O LOGOTIPO, CORRESPON DIENTE A UN LISTADO QUE CONTIENE LOS RUBROS DE CLAVE CATASTRAL, FECHA DE PAGO, PAGO Y NÚMERO DE DOCUMENTO.
22	C06474	FACTS. 87A12ACD; FC6DDC87 . PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENT E AL ME. GP [REDACTED]	\$164,589.93	SERVICIOS DE COBRANZA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENT E AL MES DE JUNIO 2018	87A12ACD-FB98-4FB1- A957-5620FCAE7B6C FC6DOC87-8FB2-44B9- BD9C-D0AEF07A28B2	ORDENES DE COMPRAS, 847, 1064 Y 1065, TODAS DE FECHA 14/SEP/2018, Y POR LAS CANTIDADES DE \$164,589.93, \$64,213.82 Y \$100,376.11, RESPECTIVAMENTE; IMPRESIÓN CONSTANTE DE TRES HOJAS, SIN TÍTULO, NOMBRE D LOGOTIPO, CORRESPON DIENTE A UN LISTADO QUE CONTIENE LOS RUBROS DE CLAVE CATASTRAL, FECHA DE PAGO, PAGO Y NÚMERO DE DOCUMENTO.
			\$2,974,347.80			

Relación de la cual se desprende que, tal como se resalta en el cuadro que en lo

subsecuente se ilustra, únicamente en el caso de cuatro pólizas y cuatro órdenes de pago, se adjuntaron documentales relativas a requerimientos y que en caso fueron supuestamente requeridas las empresas "[REDACTED]"
[REDACTED] sin que hubiere más datos que pongan en evidencia las gestiones de cobranza relativas a las restantes pólizas, órdenes de pago y facturas; y sin que estén corroborados los mencionados requerimientos a las anotadas empresas, con los informes mensuales que debía realizar la particular presunta responsable a la Tesorería Municipal, ni en los controles que en su caso debió haber realizado el Tesorero Municipal; aunado a que, como se verá más adelante, sólo uno de los referidos requerimiento fue reconocido por la empresa "[REDACTED]"
[REDACTED]

	No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	CANTIDAD	CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO	FACTURA CON FOLIO FISCAL N°.	DOCUMENTOS DE SOPORTE
1	C9216218	FACT. C9216218. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CDBRANZA DE PEDIALES	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PEDIALES	C9216218-1305-4F87-826F-00C6C27F67A1	NOTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL FOLIO: REQ/002/AGO/IMP-002 DE FECHA 17/AGO/2017, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. OMAR DAVID CASTILLO ÁVILA, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE DEL CONTRIBUYENTE "[REDACTED]"
6	C05391	ABONO FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	\$97,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL BUEN [REDACTED]	3DA34E75-FED8-46C4-80A3-7808792726CD	ORDEN DE COMPRA DE FECHA 06/08/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DE REPORTE DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANDRTE POR PARTE DE [REDACTED] FAVOR DEL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE \$1,000,000.00; ORDEN DE COMPRA NÚMERO 821, DE FECHA 06/AGD/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DEL ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL;



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

7	C05429	LIQ. FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	\$193,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL BUEN [REDACTED]	3DA34E75-FED8-46C4- 80A3-7808792726CD	IMPRESIÓN DE REPORTE DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANDRTE POR PARTE DE "BUEN [REDACTED] VOR DEL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE \$1,000;000.00; ORDEN DE COMPRA NÚMERO 821, DE FECHA 06/AGO/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DEL ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL;
17	C06401	SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES S/F 327C0EA7	\$174,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	327C0EA7-88D1-4DBD- BF43-AB8EEDEC69F2	NOTIFICACIONES, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL CON FOLIOS: REQ/005/MAY/IMP-005 [REDACTED] 14 DE MAYO DE 2018 Y SIGNADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. LUIS GERARDO OLIVAS DÍAZ, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE [REDACTED] NOTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL FOLIO: REQ/002/AGO/IMP-002 DE FECHA 14/AGO/2017, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. OMAR DAVID CASTILLO ÁVILA, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE [REDACTED] PRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL

Informe de autoridad de referencia al que se adjuntaron documentos públicos, tales como las mencionadas Auxiliares contables, pólizas y órdenes de pago, de los que se desprende que entre el seis de julio y el quince de septiembre de dos mil dieciocho, por medio de las referidas **veintidós órdenes** autorizadas por [REDACTED] sus consecuentes **veintidós pólizas**, se asignaron recursos públicos financieros de la hacienda pública del Municipio de Nogales, a favor de [REDACTED] por la cantidad total en conjunto de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional); recurso público financiero que fue otorgado a la

mencionada empresa mediante las veintidós transferencias bancarias antes detalladas.

Documentos públicos expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, que se encuentran en los archivos del Ayuntamiento de Nogales, Sonora y fueron debidamente certificados por el licenciado Jorge Jáuregui Lewis, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento, de acuerdo a las facultades establecidas para ello en los artículos 89, fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; por lo que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Por otro lado, al referido informe fueron anexados documentos privados, como lo son las impresiones de internet de las **transferencias electrónicas bancarias**, así como las facturas expedidas por la empresa [REDACTED] las cuales si bien no constituyen documentos públicos, éstas tienen un valor indiciario de forma preponderante en el expediente.

Esto es así, pues por lo que hace a las impresiones de internet de las transferencias bancarias, éstas no deben valorarse como una copia simple o un documento privado, toda vez que no pueden imputarse a una persona su elaboración, ante la falta de firma autógrafa para efectos de su reconocimiento, sino que constituyen la impresión de la información generada vía electrónica y, en consecuencia, tiene la naturaleza de descubrimiento de la ciencia, cuyo valor probatorio queda al prudente arbitrio del juzgador, conforme al artículo 205 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

En tanto que, las facturas exhibidas constituyen documentos privados con valor indiciario, las cuales se encuentran relacionadas con las pólizas y transferencias de referencia, así como de órdenes de compra agregadas al expediente; de las que se colige esas facturas fueron emitidas por [REDACTED] presentadas para su cobro ante la Tesorería Municipal, y que si bien no son documentos públicos, éstas crean convicción en este tribunal en cuanto a su veracidad y contenido, pues tienen congruencia con el resto del material probatorio, máxime que no fueron objetadas, ni controvertidas por la parte que las emitió.

Al respecto, cabe señalar que la factura produce indicios importantes sobre la relación comercial y la entrega de las mercancías o prestación de los servicios, susceptible de alcanzar plena fuerza probatoria si es reconocida o aceptada por quien la emite, en forma expresa o tácita, o si se demuestra su vinculación al acto documentado por otros medios.

En efecto, las facturas son documentos sui géneris, porque no son simples textos elaborados libremente por cualquier persona, en cuanto a contenido y forma, sino documentos que sólo pueden provenir legalmente de comerciantes o prestadores de servicios registrados ante las autoridades hacendarias, mediante los formatos regulados jurídicamente sujetos a ciertos requisitos para su validez, y a los cuales se les sujeta a un estricto control, desde su elaboración impresa hasta su empleo, y cuya expedición puede



acarrear serios perjuicios al suscriptor, requisitos que, en su conjunto, inclinan racionalmente hacia la autenticidad, como regla general, salvo prueba en contrario.

Por tanto, su contenido adquiere una fuerza indiciaria de mayor peso específico que la de otros documentos privados, simples, al compartir de algunas características con los documentos públicos.

Asimismo, la factura fue concebida originalmente con fines fiscales, para demostrar las relaciones comerciales por las cuales debían pagarse o deducirse impuestos, pero en el desarrollo de las relaciones mercantiles han adquirido otras funciones adicionales, como la de acreditar la propiedad de los vehículos automotores ante las autoridades de tránsito y otras, reconocidas inclusive en la normatividad de esa materia; respecto de otros bienes se ha venido incorporando en la conciencia de las personas como generadoras de indicios de la propiedad; entre algunos comerciantes se vienen empleando como instrumentos preparatorios o ejecutivos de una compraventa comercial o prestación de servicios, que se expiden en ocasión de la celebración del contrato respectivo, para hacer una oferta (preparatorio), o para que el cliente verifique si la mercancía entregada corresponde con la pedida, en calidad y cantidad, y haga el pago correspondiente, y en otros casos se presenta con una copia para recabar en ésta la firma de haberse recibido la mercancía o el servicio.

Por tanto, las facturas atribuidas a cierto comerciante se presumen provenientes de él, salvo prueba en contrario, como sería el caso de la falsificación o sustracción indebida del legajo respectivo.

Además, no se pierde de vista que las referidas facturas fueron anexados al citado informe rendido mediante el citado oficio **047-E-2019** de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, y éstas se hallaban en los archivos de la Tesorería Municipal y no se encuentran contradichas con algún otro medio probatorio, sino por el contrario, se encuentran corroboradas con otras probanzas, y además no fueron objetadas por las partes, de conformidad con el artículo 206 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Por lo que, las anotadas facturas tienen un valor indiciario que se encuentra concatenado con otros medios probatorios y genera convicción en este tribunal para otorgarle eficacia probatoria para acreditar que éstas fueron emitidas por [REDACTED] y presentadas para su cobro ante la Tesorería Municipal, en las cantidades que detalla cada una de ellas; y que fue derivado de estas facturas que se emitieron las mencionadas veintidós pólizas, por parte de la Tesorería Municipal y por las que se asignaron los recursos en las cantidades precisadas de manera individual en el cuadro antes plasmado, que en conjunto dieron una cantidad total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional).

Aunado a lo anterior, se tiene el oficio **018-I-Ene-2019**³², de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Contador Público [REDACTED]

³² Foja 275 del expediente de origen.

en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, mediante el cual informó que en los controles y archivos de esa Tesorería Municipal, no se encontraron archivos el físico o expedientes de los casos de los cuales requería el prestador de servicios [REDACTED]

Informe que es un documento público expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por lo que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

De igual forma, se cuenta con la comparecencia de [REDACTED] en su carácter de representante legal de la empresa "[REDACTED] S. DE CV." (que constituye una de las empresas supuestamente requeridas con gestiones de cobranza por la aquí particular presunta responsable), quien de manera general, a preguntas que le fueron formuladas por la Autoridad Investigadora, aquélla manifestó que esa empresa a la que representa no había sido visitada y/o requerida por la denominación "[REDACTED]" que en el mes de junio recibió un requerimiento de pago de impuestos, pero desconocen quien los entregó; y que [REDACTED] en su carácter de encargada de recursos humanos de la empresa a la que representa, acudió al municipio de Nogales, Sonora, a realizar un convenio de pagos de los adeudos.³³

De igual forma, se encuentra el escrito de Marcos Alberto Imanvergata, representante legal de [REDACTED] que constituye una de las empresas supuestamente requeridas con gestiones de cobranza por la aquí particular presunta responsable), quien en lo conducente hizo del conocimiento que no conoce o tiene trato alguno con la diversa moral "[REDACTED]" lo tanto nunca ha sido objeto de cobranza ni ha sido requerida en forma alguna por ningún adeudo.³⁴

Entrevista y escrito de los cuales se advierte la negativa por parte de las empresas [REDACTED] de haber sido requeridas de manera judicial o extrajudicial por parte de la moral [REDACTED] las cuales tienen valor de indicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 315 y 316 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Por lo que no se tiene constancia de que la particular presunta responsable hubiere realizado las gestiones de cobranza relativas a sus facturas presentadas ante Tesorería Municipal, pues en lo conducente, por una parte, el soporte documental de algunas de

³³ Fojas 443 y 444 del expediente de origen.

³⁴ Fojas 468 y 469 del expediente de origen.



las facturas cobradas por la particular, corresponden a órdenes de compra, estados de comprobante fiscal y transferencias interbancarias, los cuales no resultan idóneos para evidenciar la gestión de cobranza; y por otra parte, en otras, no adjuntó nada.

Siendo que en el caso de los supuestos requerimientos a las empresas [REDACTED] éstos corresponden a las cuatro pólizas que tienen documentos relativos a requerimientos:

	No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	CANTIDAD	CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO	FACTURA CON FOLIO FISCAL No.	DOCUMENTOS DE SOPORTE
1	C9216218	FACT. C9216218. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PEDIALES	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PEDIALES	C9216218-1305-4F87-826F-00C6C27F67A1	NOTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL FOLIO: REQ/002/AGO/IMP-002 DE FECHA 17/AGD/2017, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. OMAR DAVID CASTILLO ÁVILA, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE DEL CONTRIBUYENTE [REDACTED]
6	C05391	ABONO FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED] ES	\$97,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL BUEN [REDACTED]	3DA34E75-FED8-46C4-80A3-7808792726CD	ORDEN DE COMPRA DE FECHA 06/08/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DE REPORTE DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANDRTE POR PARTE [REDACTED] FAVOR DEL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE \$1,000,000.00; ORDEN DE COMPRA NÚMERO 821, DE FECHA 06/AGO/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DEL ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL;
7	C05429	LIQ. FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	\$193,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL [REDACTED]	3DA34E75-FED8-46C4-80A3-7808792726CD	IMPRESIÓN DE REPORTE DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE POR PARTE [REDACTED] DEL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE \$1,000,000.00; ORDEN DE COMPRA NÚMERO 821, DE FECHA 06/AGO/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DEL ESTADO

						DE COMPROBANTE FISCAL;
17	C06401	SERVICIOS DE COBRANZA DE PEDIALES S/F 327C0EA7	\$174,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PEDIALES	327C0EA7-88D1-4DBD-BF43-AB8EEDEC69F2	NOTIFICACIONES, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL CON FOLIOS: REQ/D05/MAY/IMP-005 Y REQ/001/MAY/IMP- [REDACTED] DE FECHA 14 DE MAYO DE 2018 Y SIGNADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. LUIS GERARDO OLIVAS OÍAZ, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE [REDACTED] NOTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL FOLIO: REQ/0D2/AGO/IMP-002 DE FECHA 14/AGO/2017, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. OMAR DAVID CASTILLO ÁVILA, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE [REDACTED] COMISION DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL

Pero como se advirtió los mencionados requerimientos no fueron reconocidos por la empresas [REDACTED]
[REDACTED]n auto no existen medios probatorios como informes o controles que acrediten que la particular hubiere realizado las gestiones de cobranza a las mencionadas morales.

Al respecto, aunado a la negativa de las mencionadas empresas, se destaca la circunstancia de que la notificación, determinación, calificación y liquidación de crédito fiscal folio: REQ/002/AGO/IMP-002 de fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por el tesorero municipal, licenciado Omar David Castillo Ávila, dirigido al contribuyente [REDACTED] esta es de fecha anterior a la del contrato número O.M.-C.P.S.H.-002/2018 de prestación de servicios por honorarios profesionales, celebrado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, el Ayuntamiento y la empresa “[REDACTED]”



Por otro lado, no pasa desapercibido que se tienen los informes emitidos por [REDACTED] en su carácter de Apoderado General para pleitos y Cobranzas y Actos de Administración de la empresa [REDACTED] mediante los cuales, en lo que interesa, remitió copia del oficio de notificación, requerimiento, calificación y liquidación de crédito fiscal identificado con el folio **REQ/001/MAYO/IMP-001**³⁵ de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitido por [REDACTED] entonces Tesorero Municipal; asimismo, remitió copia simple de diversas transferencias interbancarias a favor del Municipio de Nogales, Sonora.³⁶

Empero, no pasa desapercibido que dicho requerimiento se encuentra relacionado con la siguiente póliza y factura:

	No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	CANTIDAD	CONCEPTO DE LA OROEN DE PAGO	FACTURA CON FOLIO FISCAL No.	DOCUMENTOS DE SOPORTE
17	C06401	SERVICIOS DE COBRANZA DE PREOIALES S/F 327C0EA7	\$174,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	327C0EA7-88D1-4DBD-BF43-AB8EEDEC69F2	NOTIFICACIONES, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL CDN FOLIOS: REQ/005/MAY/IMP-005 Y REQ/001/MAY/IMP-001, AMBOS DE FECHA 14 DE MAYO DE 2018 Y SIGNADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. LUIS GERARDO OLIVAS DÍAZ, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE [REDACTED]; NOTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL FOLIO: REQ/002/AGO/IMP-002 DE FECHA 14/AGO/2017, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. OMAR DAVID CASTILLO ÁVILA, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE [REDACTED] RESION DE ESTADO DE COMPRDBANTE FISCAL

Sin embargo, cabe aclarar que de acuerdo a los archivos remitidos por la Tesorería Municipal, entre el soporte documental atinente a la referida empresa y la factura con folio fiscal **327C0EA7-88D1-4DBD-BF43-AB8EEDEC69F2**, entre otros, se acompañaron las notificaciones, determinación, calificación y liquidación de crédito fiscal con folios: **REQ/005/MAY/IMP-005** y **REQ/001/MAY/IMP-001**, ambos de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, signados por el tesorero municipal, licenciado LUIS GERARDO OLIVAS DÍAZ, dirigido al contribuyente [REDACTED]

³⁵ Fojas 570 a 573 del expediente de origen.
³⁶ Fojas 552 a 568 y 569 a 586 del expediente de origen.

Siendo que en el caso, [REDACTED] en su carácter de Apoderado General para pleitos y Cobranzas y Actos de Administración de la empresa [REDACTED], únicamente informó del requerimiento, calificación y liquidación de crédito fiscal identificado con el folio REQ/OO1/MAYO/IMP-001³⁷ de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitido por [REDACTED], entonces Tesorero Municipal; sin reconocer el diverso REQ/005/MAY/IMP-005 y tampoco se tiene constancia de ello en autos.

En esa tesitura, de los anteriores medios probatorios señalados se colige que, el presunto responsable en su carácter de Tesorero Municipal **autorizó actos para la asignación recursos públicos financieros** a la empresa "[REDACTED]" **en contraposición a las normas aplicables**, en el caso, en contraposición a los artículos 91, fracciones VII, VIII, IX, XVI y 92, fracción II, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal; y los numerales 4, fracciones VIII y X, 25, y 26, del Presupuesto de Egresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho.

Esto es así, ya que el presunto responsable en su calidad de Tesorero Municipal, no documentó debidamente toda ministración de fondos públicos; no llevó debidamente la contabilidad general y el control del ejercicio presupuestal; no hizo los pagos con estricto apego al Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento; no formó y llevó un expediente de la empresa contratada por el Ayuntamiento; no ejerció el Presupuesto de Egresos, ni efectuó los pagos de acuerdo al presupuesto aprobado.

De igual forma, no administró con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estaban destinados los recursos públicos financieros de la hacienda pública municipal, tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se ajustó a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social; pues no efectuó los pagos con cargo al presupuesto de egresos del municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados; asimismo, distrajo recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado; y no vigiló la exacta observancia de las normas contenidas en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.

En ese orden de ideas, con los medios probatorios aportados se tiene la certeza de que entre el seis de julio y el quince de dos mil dieciocho, el presunto responsable en su carácter de Tesorero Municipal, **autorizó actos para la asignación recursos públicos financieros** por la cantidad total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), a favor de la empresa "[REDACTED]" o anterior, **en contraposición a las normas aplicables**, en el caso, en contraposición a los artículos 91, fracciones VII, VIII, IX, XVI y 92, fracción II, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal; y los numerales 4, fracciones VIII y X, 25, y 26, del Presupuesto de Egresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. Con lo que se tiene por acreditado el último de los elementos de la falta administrativa grave analizada.

³⁷ Fojas 570 a 573 del expediente de origen.



En ese contexto, se llega a la conclusión de que se encuentra acreditada la existencia de la falta administrativa grave **DESVÍO DE RECURSOS** prevista en el artículo 93 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en la hipótesis *“el servidor público que autorice actos para la asignación de recursos públicos financieros en contraposición a las normas aplicables”*.

5.2. Utilización de Información Falsa.

Se encuentra acreditada en autos la falta de particular **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA** prevista en el artículo 109, de la Ley Estatal de Responsabilidades, que establece:

“Artículo 109.- Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna...”

En ese sentido al realizar el análisis del indicado artículo y acudiendo en lo aplicable a los principios de materia penal, observamos que el Tipo administrativo en estudio se encuentra compuesto por los siguientes elementos:

- a) **Calidad específica del presunto responsable como particular.**
- b) **Elemento objetivo (acción):**
 - Lograr una autorización
 - Lograr un beneficio
 - Lograr una ventaja
 - Perjudicar a persona alguna.
- c) **Elemento subjetivo específico:**
 - Con el propósito de.
- d) **Objeto material (persona o cosa en quien recae la conducta):**
 - La documentación o información falsa o alterada.
 - Los requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos.
- e) **Modalidad de la conducta (medio de ejecución):**
 - Presente
 - Simule el cumplimiento.

Tipo administrativo que como se puede apreciar, contiene **diversas hipótesis**, siendo que en el IPRA la Autoridad Investigadora expresó que la particular el presunta responsable, en su carácter de prestadora de servicios del Ayuntamiento, simuló los requisitos del procedimiento administrativo establecido en el contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018**³⁸ de prestación de servicios por honorarios profesionales, celebrado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, entre el Ayuntamiento y la empresa "[REDACTED]", cuyo **objeto**³⁹ era la prestación oportuna, directamente, por cuenta y bajo responsabilidad de la indicada moral, del servicio de **cobranza extrajudicial y judicial para la recuperación de créditos fiscales y asesoría jurídica**; por el **plazo**⁴⁰ del uno de enero a quince de septiembre de dos mil dieciocho. Lo anterior, con el propósito de obtener un beneficio económico por la cantidad de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional).

Al respecto, de manera general, aduce la Autoridad Investigadora que la particular presunta responsable, simuló haber dado cumplimiento a lo estipulado en la cláusula quinta, puntos uno, dos y siete, del referido contrato de prestación de servicios, pues presentó facturas para su cobro ante la Tesorería Municipal, por lo servicios de cobranza supuestamente realizados derivados del indicado contrato, sin embargo, no presentó soporte documental que acreditara los trabajos aparentemente realizados; asimismo, no rindió ante Tesorería Municipal los informes mensuales los informes que requiriera esa autoridad, con relación a todos aquéllos aspectos que involucraban el desarrollo de los efectos del referido contrato; tampoco exhibió ante Tesorería Municipal los informes mensuales de la cobranza judicial o extrajudicial realizada, especificando montos recaudados por motivo de su gestión; ni proporcionó los datos obtenidos en función de sus servicios, ya sea a través de los medios magnéticos.

Bajo ese contexto, de acuerdo a los hechos expuestos por la Autoridad Investigadora y los medios probatorios aportados, este tribunal considera que el tipo normativo de la falta de particular **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA** descrita en el IPRA atribuida al presunto responsable, es en la hipótesis **"el particular que simule el cumplimiento de requisitos establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr un beneficio"**; la cual se acredita y se compone los siguientes elementos:

- a) La calidad específica del sujeto activo como particular
- b) Simule el cumplimiento de requisitos establecidos en los procedimientos administrativos.
- c) con el propósito de lograr un beneficio.

En relación al **PRIMER ELEMENTO** consistente en que el **presunto responsable sea un particular**, cabe señalar a fin de ilustrar el concepto de **"particular"** es conveniente traer a cuenta la definición de **"Servidor Público"** a que hace referencia el artículo 143 de la

³⁸ Fojas 262 a 272 del expediente de origen.

³⁹ Cláusula Primera del Contrato.

⁴⁰ Cláusula Séptima del Contrato.



Constitución Política del Estado de Sonora, y el numeral 3, fracción XXVI, de la Ley Estatal de Responsabilidades, que establecen:

"ARTÍCULO 143.- Se reputará como servidor público por los efectos de este título y será responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal, directa o paraestatal, así como municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como los servidores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, del Tribunal de Justicia Administrativa y quienes laboren en los organismos públicos con autonomía legal..."

"Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

...

XXVI.- Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito estatal y municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora;..."

En esa tesitura, aplicado en sentido contrario lo definido por los referidos artículos Constitucional y legal, se obtiene que **"particular"** es toda aquella persona que no desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal, directa o paraestatal, así como municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como que tampoco sea servidor del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Consejero Distrital Electoral, Consejero Municipal Electoral, del Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, del Tribunal de Justicia Administrativa y quien tampoco labore en los organismos públicos con autonomía legal.

En ese orden de ideas, en el caso la presunta responsable es una persona moral y no se encuentra contemplada en alguno de los supuestos estipulados en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con el numeral 3, fracción XXVI, de la Ley Estatal de Responsabilidades; pues en autos no existe medio probatorio que demuestre tal circunstancia; y por tanto tiene el carácter de **particular**, por lo que el primero de los elementos de la falta administrativa en estudio se encuentra acreditado.

Por otro lado, el **SEGUNDO ELEMENTO**, consistente en que **simule el cumplimiento de requisitos establecidos en los procedimientos administrativos**, éste se encuentra acreditado de acuerdo a las siguientes argumentaciones.

El diecisiete de enero de dos mil dieciocho, el Ayuntamiento y la empresa [REDACTED] (como prestador de servicios) celebraron el contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018⁴¹** de prestación de servicios por honorarios

⁴¹ Fojas 262 a 272 del expediente de origen.

profesionales, cuyo **objeto**⁴² era la prestación oportuna, directamente, por cuenta y bajo responsabilidad de la indicada moral, del servicio de **cobranza extrajudicial y judicial para la recuperación de créditos fiscales y asesoría jurídica**; por el **plazo**⁴³ del uno de enero a quince de septiembre de dos mil dieciocho.

Para ello, de acuerdo a la **cláusula segunda** del anotado contrato, el Ayuntamiento a través de Tesorería coordinaría las actividades del prestador de servicios, con el objeto de que éste, de manera directa e indirecta y con los elementos personales y materiales propios, realizara la práctica de diligencias de cobranza administrativa y procesal jurídica a deudores morosos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de índole municipal, diligencias que deberían realizarse con anterioridad a la substanciación de procedimientos económicos coactivos correspondientes.

Al efecto, en esa cláusula se especificó además que las cuentas fiscales susceptibles de turnar al prestador de servicios estaban las consideradas las insolutas por impuesto predial, por el impuesto de traslación de dominio o de cualquier contribución que el causante no cubra y a juicio de la Tesorería Municipal, requiriera una cobranza especializada. Las cuales se turnarían al prestador de servicios, vía escrito por Tesorería Municipal, en la que se precisaría como mínimo nombre del contribuyente, clave, adeudo, tiempo de morosidad, etcétera.

Por otro lado, conforme a la **cláusula quinta** del contrato, el **prestador de servicios** se obligaba a prestar al Ayuntamiento los servicios profesionales referidos en la cláusula primera del contrato, mismos que comprenderían entre otras **obligaciones**, las siguientes:

“1.- Entregar en forma mensual al H Ayuntamiento a través de Tesorería Municipal todos los infames que requiera este, con relación a todas aquellas aspectos que invalúen el desarrollo de los efectos del presente instrumento.

2.- Asimismo, deberá cada mes presentar un informe de la cobranza judicial o extrajudicial realizada, especificando las montos recaudados por motivo de su gestión.

(...)

7.- Proporcionar al “El Ayuntamiento” los datos obtenidos en función de sus servicios, ya sea a través de las medias magnéticas o bajo la firma que “El Ayuntamiento” y “El Prestador de Servicios” determinen de común acuerdo, asimismo, el envío de las documentas elaborados para la firma respectiva de los funcionarios de este H. Ayuntamiento para efecto de la tramitación de los procedimientos.

(...)

(Lo resaltado con subrayado no es de origen)

De igual forma, de acuerdo a la **cláusula novena** del contrato, el Ayuntamiento se comprometía a cubrir al prestador de servicios por concepto de honorarios el 25% (veinticinco por ciento) sobre el monto de las cantidades que se recuperaran por Tesorería Municipal, ya sea en la vía judicial o extrajudicial, por los servicios materia del citado contrato, por concepto de rezago. Porcentaje mencionado que se pagaría sobre

⁴² Cláusula Primera del Contrato.

⁴³ Cláusula Séptima del Contrato.



la cantidad mensual acumulada que hubiere ingresado al Ayuntamiento por los referidos servicios.

La referida contraprestación se cubriría en las oficinas de la Tesorería Municipal, previa exhibición por parte del prestador de servicios de los recibos que contengan los requisitos fiscales y administrativos correspondientes.

Por otra parte, conforme a la **cláusula décima primera**, las partes convinieron que el pago relativo se realizaría mediante presentación de recibos de honorarios y/o facturas con fecha de recibido a satisfacción del Ayuntamiento, cuyo importe sería liquidado en un plazo no mayor a veinte días naturales, a partir de la fecha del recibo, una vez que Tesorería Municipal realizara un análisis de los ingresos mensuales acumulados y que hubieren ingresado al Ayuntamiento por los servicios contratados.

En otro rubro, en la **cláusula décima octava** del contrato se estipuló que la información y documentación que generara el prestador de servicios con motivo del citado contrato, sería propiedad exclusiva del Ayuntamiento, en consecuencia, aquél se obligaba a conservarla en óptimas condiciones, a no alterarla, así como a entregarla en su integridad al Ayuntamiento cuando este último lo requiriera.

En otro contexto, cabe destacar que de acuerdo a las declaraciones del Ayuntamiento plasmadas el citado contrato, en la especificada en su inciso E), se advierte que para realizar el pago de los honorarios y demás gastos que derivaran del mismo, sería con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal 2018, partida 34201 de Tesorería Municipal.

Bajo esa tesitura, de acuerdo a lo anterior, la particular aquí presunta responsable, en su carácter de prestador de servicios del Ayuntamiento, debía cumplir con los requisitos del procedimiento administrativo estipulados, entre otros, en la **cláusula quinta, puntos uno, dos y siete**, consistentes en:

- **Entregar en forma mensual al H Ayuntamiento a través de Tesorería Municipal todos los informes que requiera** esté, con relación a todos aquellos aspectos que involucren el desarrollo de los efectos del presente instrumento.
- **Presentar cada mes un informe de la cobranza judicial o extrajudicial** realizada, especificando los montos recaudados por motivo de su gestión.
- **Proporcionar al Ayuntamiento los datos obtenidos en función de sus servicios**, ya sea a través de los medios magnéticos o bajo la forma que el Ayuntamiento y la particular como **Prestador de Servicios** determinaren de común acuerdo, asimismo, el envío de los documentos elaborados para la firma respectiva de los funcionarios del Ayuntamiento para efecto de la tramitación de los

procedimientos.

Ahora bien, del expediente de origen se advierten probanzas que ponen en evidencia que la particular presunta responsable **simuló el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo estipulado en la cláusula quinta, puntos uno, dos y siete.**

Se afirma lo anterior, pues de los medios probatorios portados se advierte que la particular presunta responsable presentó ante la Tesorería Municipal facturas para su cobro por concepto de los supuestos trabajos de cobranza realizados derivados del referido contrato, simulando haber cumplido con los requisitos ya mencionados, pero sin anexar soporte probatorio del cumplimiento efectivo de los anotados trabajos de cobranza.

Pues en autos no se encuentra documento en que conste que Tesorería le hubiere turnado vía escrito a la particular como prestadora de servicios, la relación de los causantes morosos a los que debía realizar la cobranza correspondiente, en la que se precisaría como mínimo nombre del contribuyente, clave, adeudo y tiempo de morosidad; así como de proporcionarle los documentos necesarios.

Asimismo, no se encuentran allegados los informes que la indicada moral debía entregarle en forma mensual a la Tesorería Municipal, respecto de la cobranza judicial o extrajudicial realizada, especificando los montos recaudados por motivo de su gestión; como tampoco documentos con los que se pudiera cotejar o verificar, los ingresos efectivos por la gestión realizada.

De igual forma, no se encuentra documento, medio magnético o de algún otro tipo, respecto de los datos obtenidos por la particular en función de sus servicios, que hayan sido proporcionados al Ayuntamiento como prestador de servicios; como tampoco de documentos elaborados para la firma respectiva de los funcionarios del Ayuntamiento para efecto de la tramitación de los procedimientos.

Esto es así, tal como se advierte del oficio **341CCMC-2018⁴⁴** de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Contador Público [REDACTED] en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en el apartado de observaciones con posible daño patrimonial, en la número dos, se desprende lo siguiente:

"De la revisión del seguimiento presupuestal del gastos correspondiente a la dependencia de la Tesorería Municipal, en lo general se observa buen comportamiento presupuestal del gasto, a excepción del gasto efectuada, en el capítulo de servicios generales en la partida 34201, por servicios de cobranza, investigación crediticia y similar, la cual releja un excedente presupuestal al 31 de agosto de 2018, por la cantidad de \$ 2,273,212.30, en el presupuesto de la unidad administrativa de la dirección de ingresos, misma que al analizar las registro analíticas del gasto, el imparte excedido, se refleja en el pago a un prestador de servicios DE FORMA INUCUAL, denominación LEGAL [REDACTED] lo anterior debido a que en el ejercicio fiscal se le efectuaron pagas, por la cantidad de \$3,491,118.16, resulta relevante que dichos pagas acumuladas antes señalados, se aplicaron de la fecha 06 de julio al 15 de septiembre de 2018, un total de 23 pagas consecutivas de

⁴⁴ Fojas 2 a 48 del expediente de origen.



facturas, con un importe total \$3,075,649.38, lo que representa el 88% de los pagos totales efectuados sobre su facturación total en los últimos meses. Así mismo no se encontró evidencia o soporte documental en original de sus servicios prestados, y que se relacionaran en específico, en la carpeta de entrega recepción, y al hacer una revisión exhaustiva en el clausulado del contrato, se observa que no se cumplieron en totalidad de las cláusulas del servicio, por lo que se presume un posible daño patrimonial sobre los servicios pactados y cobrados, pues resultan documentalmente sus servicios no acreditados y los procesos jurídicos mal practicados, así como incompatibilidad entre las fechas de pago de los contribuyentes, la facturación de servicios prestada y las fechas de pago efectuadas por la Tesorería Municipal.

(Lo resaltado no es de origen)

Informe de autoridad del cual en lo conducente se desprende que entre el seis de julio y quince de septiembre de dos mil dieciocho, fueron asignados recursos públicos financieros de la hacienda pública del Municipio de Nogales, a favor de la empresa [REDACTED], que no se encontró evidencia o soporte documental en original de sus servicios prestados, y que se relacionaran en específico, en la carpeta de entrega recepción, y al hacer una revisión exhaustiva en el clausulado del contrato, se observó que no se cumplieron en totalidad de las cláusulas del servicio, por lo que se presume un posible daño patrimonial sobre los servicios pactados y cobrados, pues resultan documentalmente sus servicios no acreditados y los procesos jurídicos mal practicados, así como incompatibilidad entre las fechas de pago de los contribuyentes, la facturación de servicios prestada y las fechas de pago efectuadas por la Tesorería Municipal.

Informe que es un documento público expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por lo que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

De igual forma, se tiene el oficio 047-E-2019⁴⁵ de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Contador Público [REDACTED] en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, por medio del cual remitió los **Auxiliares de Cuentas** correspondientes al periodo del uno de julio al quince de septiembre de dos mil dieciocho, de las que se desprenden que fueron pagadas **veintidós pólizas** expedidas por el Municipio a través de la Tesorería Municipal, las cuales en conjunto arrojan una cantidad total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), a favor de la empresa [REDACTED]

Aunado a lo anterior, remitió copia certificada de las referidas **veintidós pólizas** contables de los pagos realizados a [REDACTED] por un total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos

⁴⁵ Fojas 54 a 259 del expediente de origen.

cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), durante el periodo de julio a septiembre de dos mil dieciocho, con su respectivo soporte, entre el cual se encuentran **veintidós órdenes de pago** expedidas a favor de la mencionada moral, de las que se advierte que éstas fueron autorizadas por [REDACTED] en su carácter de Tesorero Municipal; **veintidós impresiones de internet de las transferencias electrónicas bancarias** correspondientes a cada una de las mencionadas pólizas, relativas a la cuenta de retiro número 0105670721, del banco BBVA Bancomer, en la que aparece como titular el Municipio de Nogales, Sonora y como cuenta de depósito número 195013828 a nombre de [REDACTED], así como las facturas exhibidas por la indicada moral ante Tesorería Municipal y órdenes de compra relativas.

Informe, del cual se desprende que las mencionadas órdenes y pólizas fueron emitidas, sin soporte documental que evidenciara el servicio prestado por la empresa, pues no se encuentran los oficios o escritos por los cuales la Tesorería Municipal hubiere turnado a la mencionada empresa, de la relación de los causantes morosos a los que debía realizar la cobranza correspondiente, en la que se precisaría como mínimo nombre del contribuyente, clave, adeudo y tiempo de morosidad.

Tampoco se encuentra prueba que ponga en evidencia de los informes que la indicada moral debía entregarle en forma mensual a la Tesorería Municipal, respecto de la cobranza judicial o extrajudicial realizada, especificando los montos recaudados por motivo de su gestión; ni los documentos correspondientes para realizar el cotejo y verificación, de los ingresos efectivos por la gestión realizada.

Se afirma así, ya que del mismo informe remitido se advierte que tal soporte documental no se encuentra en los archivos de la Tesorería Municipal, sin que al efecto la particular presunta responsable hubiere refutado tal circunstancia, o hubiere ofrecido medios probatorios que acreditaran que sí realizó las obligaciones anteriormente señaladas.

Al respecto, del mencionado informe se pueden observar los documentos anexos a cada una de las veintidós pólizas y veintidós órdenes de pago autorizadas por el Tesorero Municipal, los cuales constan de las veintidós transferencias realizadas por el municipio a la mencionada empresa, las facturas emitidas por ésta última y que presentó ante Tesorería Municipal para su pago, órdenes de compra expedidas por Tesorería Municipal, impresiones de estados de comprobantes fiscales, recibos de pago que no cuentan con datos de identificación del causante y el concepto es de "diversión y espectáculos", escritos de listados que contienen algunos rubros como clave catastral, fecha de pago, pago y número de documento, pero que no tienen nombres, logotipo, ni membrete, como tampoco el nombre o firma de la persona que lo emitió; y solamente a dos de las pólizas se acompañaron notificaciones. Lo anterior, como se plasma en el siguiente cuadro de manera individual por cada póliza y orden de pago, así como de los documentos que se anexaron a cada una:






No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	CANTIDAD	CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO	FACTURA CON FOLIO FISCAL No.	DOCUMENTOS DE SOPORTE
---------------	-----------------------	----------	------------------------------	------------------------------	-----------------------



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

1	C9216218	FACT. C9216218. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	C9216218-1305-4F87-826F-00C6C27F67A1	NOTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL FDLIO: REQ/002/AGO/IMP-002 DE FECHA 17/AGO/2017, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. OMAR DAVID CASTILLO ÁVILA, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE DEL CONTRIBUYENTE [REDACTED]
2	C04620	FACT. 7D54792F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	7D54792F-FC92-4F23-BFD6-E003A96A0E27	IMPRESIÓN DE UN LISTADO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TESORERÍA POR CONCEPTO DE DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS
3	C04822	FACT. 2FA9CCD. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	2F7A9CCD-182B-4B82-BD7C-689A9BEAC8D	NO
4	C04823	FACT. E9AF1F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	E9A9AF1F-5AE1-47FA-9163-2D9B17021638	NO
5	C04997	FACT. ACE19EB5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	ACE19EB5-B9FF-44D9-AA82-24F91841C797	NO
6	C05391	ABONO FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	\$97,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL BUEN [REDACTED]	3DA34E75-FED8-46C4-80A3-7808792726CD	ORDEN DE COMPRA DE FECHA 06/08/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DE REPORTE DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE [REDACTED] FAVOR DEL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE \$1,000;000.00; ORDDEN DE COMPRA NÚMERO 821, DE FECHA 06/AGO/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DEL ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL;
7	C05429	LIQ. FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	\$193,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL BUEN [REDACTED]	3DA34E75-FED8-46C4-80A3-7808792726CD	IMPRESIÓN DE REPORTE DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE [REDACTED] FAVOR DEL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE \$1,000;000.00; ORDDEN DE COMPRA NÚMERO 821, DE FECHA 06/AGO/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00;

						IMPRESIÓN DEL ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL;
8	C05510	ABONO FACTS. AD29B312; 6954B37E; B87E10D7; 30E34232; 97654FA7; 8E90A28A; A1D4788A. GP 	\$200,000.00	HONORARIDS POR COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL FACTURAS AD29B312; 6954B37E; B87E10D7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A	AD29B312-B0FB-4051-B96E-181DFE377395 6954B37E-1041-4D98-9FA4-2E664EE8404 B87E10D7-AA0A-4071-B2B8-17CBA2C29B3B 30E3232-D553-47B0-915A-B6485A9D1546 97654FA7-737C-40AF-8F8F-56309CD34047 8E9DA28A-1C89-4097-A492-B954A498B89C A1D4788A-133B-4908-A2DB-9C9A24CCE8D	ORDEN DE COMPRA 681 DE FECHA 16/08/2018 POR LA CANTIDAD DE \$373,520.00; ÓRDENES DE COMPRAS NÚMEROS 879, 880, 881, 882, 883, 884 Y 885, TODAS DE DE FECHA 16/AGO/2018 Y TODAS POR LA CANTIDAD DE \$53,360; SIETE IMPRESIONES DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL
9	C06029	LIQ. FACTS. AD29B312; 6954B37E; B87E10D7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A. GP 	\$173,520.00	HONORARIOS POR COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL FACTURAS AD29B312; 6954B37E; B87E10D7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A	AD29B312-B0FB-4051-B96E-181DFE377395 6954B37E-1041-4D98-9FA4-2E664EE8404 B87E10D7-AA0A-4071-B2B8-17CBA2C29B3B 30E3232-D553-47B0-915A-B6485A9D1546 97654FA7-737C-40AF-8F8F-56309CD34047 8E9DA28A-1C89-4097-A492-B954A498B89C A1D4788A-133B-4908-A2DB-9C9A24CCE8D	ORDEN DE COMPRA 681 DE FECHA 16/08/2018 POR LA CANTIDAD DE \$373,520.00; ÓRDENES DE COMPRAS NÚMEROS 879, 880, 881, 882, 883, 884 Y 885, TODAS DE DE FECHA 16/AGO/2018 Y TODAS POR LA CANTIDAD DE \$53,360; SIETE IMPRESIONES DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL
10	C06119	FACT. 2D51FC1F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP 	\$145,000.00	SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIAL	2D51FC1F-D16F-4653-B6F7-5C0108283EE2	ORDENES DE COMPRAS NÚMEROS 734 Y 929, AMBOS DE DE FECHA 24/08/2018, Y POR LA CANTIDAD CADA UNO DE \$145,000.00; UNA IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL
11	C06174	FACT. 3B855B96 PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP 	\$145,000.00	SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIAL	3B855B96-7F73-45F9-96EA-BDDCCD72A921	ORDEN DE COMPRA 930 DE FECHA 24/AGO/2018, POR LA CANTIDAD DE \$145,000.00; UNA IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL
12	C06295	SERVICIOS DE COBRANZA DE UN FACTURA FDC3B967. GP 	\$53,360.00	SERVICIOS DE COBRANZA	FDC3B967-D777-44A0-AD42-D035BE122DB5	RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$184,000.00 EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE NOGALES, POR CONCEPTO DE DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS; UNA IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

13	C06298	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 6BA62C58. GP [REDACTED]	\$145,000.00	NO	6BA62C58-6E29-467B-94A6-CBECFBAE7D44	ORDENES DE COMPRAS 732 Y 928, AMBAS DE FECHA 24/AGO/2018, Y CADA UNA POR LA CANTIDAD DE \$145,000.00; UNA IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL
14	C06299	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 4D91CC7E. GP [REDACTED]	\$145,000.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 4D91CC7E	C7A88287-CBD2-4695-9D37-9B013C8F92D6	ORDENES DE COMPRAS 754 Y 963, AMBAS DE FECHA 28/AGO/2018, Y CADA UNA POR LA CANTIDAD DE \$145,000.00; UNA IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL; RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$500,000.00 EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE NOGALES, POR CONCEPTO DE DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS
15	C06300	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 4D91CC7E. GP [REDACTED] S	\$145,000.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 4D91CC7E	4D91CC7E-6D04-4611-8SFC-88E094145031	ORDENES DE COMPRAS 753 Y 962, AMBAS DE FECHA 29/AGO/2018, Y CADA UNA POR LA CANTIDAD DE \$145,000.00; UNA IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL; RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$500,000.00 EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE NOGALES, POR CONCEPTO DE DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS.
16	C063D1	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 1D119A36. GP [REDACTED]	\$16,111.10	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 1D119A36	1D119A36-6150-4CCF-97F0-E9AES943ABC9	ORDENES DE COMPRAS 751 Y 960, AMBAS DE FECHA 29/AGO/2018, Y CADA UNA POR LA CANTIDAD DE \$116,111.10; RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$55,555.55 EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE NOGALES, POR CONCEPTO DE DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS.

17	C06401	SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES S/F 327C0EA7	\$174,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	327C0EA7-88D1-4DBD-BF43-AB8EEDEC69F2	NOTIFICACIONES, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL CON FOLIOS: REQ/005/MAY/IMP-005 Y REQ/001/MAY/IMP-001, AMBOS DE FECHA 14 DE MAYO DE 2018 Y SIGNADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. [REDACTED], DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE "E [REDACTED]"; NOTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL FOLIO: REQ/D02/AGO/IMP-002 DE FECHA 14/AGO/2017, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. OMAR DAVID CASTILLO ÁVILA, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE [REDACTED] RESION DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL.
18	C06427	FACT. 9BAC828A. SERVICIOS DE COBRANZA GP [REDACTED]	\$104,400.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA	9BAC828A-E66B-4B8E-A4CD-CCF3A0DBDDA5	ORDENES DE COMPRAS 828 Y 1039, AMBAS DE FECHA 12/SEP/2018, Y CADA UNA POR LA CANTIDAD DE \$104,400.00; RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$184,000.00 EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE NOGALES, POR CONCEPTO DE DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS; IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL.
19	C06428	FACT. 09967400. SERVICIOS DE COBRANZA GP [REDACTED] ES	\$156,600.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA	99674D0-D166-4083-9502-936E94ABAB56	ORDENES DE COMPRAS 824 Y 1038, AMBAS DE FECHA 12/SEP/2018, Y CADA UNA POR LA CANTIDAD DE \$156,600.00; RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$540,000.00 EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE NOGALES, POR CONCEPTO DE DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS; IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

20	C06472	FACTS. 34C78DE5; OC8497C3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA GP [REDACTED]	\$183,993.78	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENT E AL MES DE JULIO DE 2018 Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA OC8497C3	34C78DE5-A3D6-405B- 8C55-B70D766F256D	ORDENES DE COMPRAS 849, 1068 Y 1067, TODAS DE FECHA 12/SEP/2018, PDR LAS CANTIDADES DE \$183,993.78, \$145,000.00 Y \$38,993.78, RESPECTIVAMENTE; IMPRESIÓN CONSTANTE DE DOS HOJAS, SIN TÍTULO, NOMBRE O LOGOTIPO,CORRESPON DIENTE A UN LISTADO QUE CONTIENE LOS RUBROS DE CLAVE CATASTRAL, FECHA DE PAGO, PAGO Y NÚMERO DE DOCUMENTO; UNA IMPRESIÓN DE COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR ESPEI, DE LA BANCA AFIRME, POR LA CANTIDAD DE \$500,000.00 EN LA QUE APARECE COMO BENEFICIARIO EL MUNICIPIO DE NOGALES, POR EL CONCEPTO "PAGO 9 PARCIAL MUNICIPIO NOGALES GOH".
					OC8497C3-21D7-48F1- 9873-74C5B782433D	
21	C06473	FACT. A9F1F97A. PRESTACIÓN DE SERVICIOS (COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENT E AL MES DE AGOSTO GP [REDACTED]	\$152,772.99	SERVICIOS DE COBRANZA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENT E AL MES DE AGOSTO 2018	A9F1F97A-2115-4BF9- BD79-D5CC07C961A6	ORDENES DE COMPRAS, 848 Y 1066, AMBAS DE FECHA 14/SEP/2018, CADA UNA POR LA CANTIDAD DE \$152,772.99; IMPRESIÓN CONSTANTE DE DOS HOJAS, SIN TÍTULO, NOMBRE O LOGOTIPO,CORRESPON DIENTE A UN LISTADO QUE CONTIENE LOS RUBROS DE CLAVE CATASTRAL, FECHA DE PAGO, PAGO Y NÚMERO DE DOCUMENTO.
22	C06474	FACTS. 87A12ACD; FC6D0C87. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENT E AL ME. GP [REDACTED]	\$164,589.93	SERVICIOS DE COBRANZA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENT E AL MES DE JUNIO 2018	87A12ACD-FB98-4FB1- A957-5620FCAE7B6C	ORDENES DE COMPRAS, 847, 1064 Y 1065, TODAS DE FECHA 14/SEP/2018, Y POR LAS CANTIDADES DE \$164,589.93, \$64,213.82 Y \$100,376.11, RESPECTIVAMENTE; IMPRESIÓN CONSTANTE DE TRES HOJAS, SIN TÍTULO, NOMBRE O LOGOTIPO,CORRESPON DIENTE A UN LISTADO QUE CONTIENE LOS RUBROS DE CLAVE CATASTRAL, FECHA DE PAGO, PAGO Y NÚMERO DE DOCUMENTO.
					FC6D0C87-8FB2-44B9- BD9C-00AEF07A28B2	
\$2,974,347.80						

Relación de la cual se desprende que, tal como se resalta en el cuadro que en lo

subsecuente se ilustra, únicamente en el caso de cuatro pólizas y cuatro órdenes de pago, se adjuntaron documentales relativas a requerimientos y que en caso fueron supuestamente requeridas las empresas "

in que hubiere más datos que pongan en evidencia las gestiones de cobranza relativas a las restantes pólizas, órdenes de pago y facturas; y sin que estén corroborados los mencionados requerimientos a las anotadas empresas, con los informes mensuales que debía realizar la particular presunta responsable a la Tesorería Municipal, ni en los controles que en su caso debió haber realizado el Tesorero Municipal; aunado a que, como se verá más adelante, sólo uno de los referidos requerimiento fue reconocido por la empresa "

No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	CANTIDAD	CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO	FACTURA CON FOLIO FISCAL No.	DOCUMENTOS DE SOPORTE
1	C9216218. FACT. C9216218. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PEDIALES	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PEDIALES	C9216218-1305-4F87-826F-00C6C27F67A1	NOTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL FOLIO: REQ/002/AGO/IMP-002 DE FECHA 17/AGO/2017, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. OMAR DAVID CASTILLO ÁVILA, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE DEL CONTRIBUYENTE
6	C05391. ABONO FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP	\$97,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL	3DA34E75-FED8-46C4-80A3-7808792726CD	ORDEN DE COMPRA DE FECHA 06/08/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DE REPORTE DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE A FAVOR DEL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE \$1,000,000.00; ORDEN DE COMPRA NÚMERO 821, DE FECHA 06/AGO/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DEL ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL;



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

7	C05429	LIQ. FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	\$193,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL [REDACTED]	3DA34E75-FED8-46C4- 80A3-7808792726CD	IMPRESIÓN DE REPORTE DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE [REDACTED] [REDACTED] A FAVOR DEL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00; ORDEN DE COMPRA NÚMERO 821, DE FECHA 06/AGO/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DEL ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL;
17	CD6401	SERVICIOS DE COBRANZA DE PEDIALES S/F 327C0EA7	\$174,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PEDIALES	327C0EA7-88D1-4DBD- BF43-AB8EEDEC69F2	NOTIFICACIONES, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL CON FOLIOS: REQ/005/MAY/IMP-D05 Y REQ/001/MAY/IMP- 001, AMBOS DE FECHA 14 DE MAYO DE 2018 Y SIGNADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. LUIS GERARDO OLIVAS DÍAZ, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE [REDACTED]; NOTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL FOLIO: REQ/D02/AGO/IMP-0D2 DE FECHA 14/AGO/2017, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. OMAR DAVID CASTILLO ÁVILA, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE [REDACTED] IMPRESIÓN DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL

Informe de autoridad de referencia al que se adjuntaron documentos públicos, tales como las mencionadas Auxiliares contables, pólizas y órdenes de pago, de los que se desprende que entre el seis de julio y el quince de septiembre de dos mil dieciocho, por medio de las referidas **veintidós órdenes** autorizadas por [REDACTED] sus consecuentes **veintidós pólizas**, se asignaron recursos públicos financieros de la hacienda pública del Municipio de Nogales, a favor de [REDACTED] por la cantidad total en conjunto de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional); recurso público financiero que fue otorgado a la mencionada empresa mediante las veintidós transferencia bancarias antes detalladas.

Documentos públicos expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, que se encuentran en los archivos del Ayuntamiento de Nogales, Sonora y fueron debidamente certificados por el licenciado Jorge Jáuregui Lewis, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento, de acuerdo a las facultades establecidas para ello en los artículos 89, fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; por lo que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Por otro lado, al referido informe fueron anexados documentos privados, como lo son las impresiones de internet de las **transferencias electrónicas bancarias**, así como las **facturas** expedidas por la empresa [REDACTED], las cuales si bien no constituyen documentos públicos, éstas tienen un valor indiciario de forma preponderante en el expediente.

Esto es así, pues por lo que hace a las impresiones de internet de las transferencias bancarias, éstas no deben valorarse como una copia simple o un documento privado, toda vez que no pueden imputarse a una persona su elaboración, ante la falta de firma autógrafa para efectos de su reconocimiento, sino que constituyen la impresión de la información generada vía electrónica y, en consecuencia, tiene la naturaleza de descubrimiento de la ciencia, cuyo valor probatorio queda al prudente arbitrio del juzgador, conforme al artículo 205 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

En tanto que, las facturas exhibidas constituyen documentos privados con valor indiciario, las cuales se encuentran relacionadas con las pólizas y transferencias de referencia, así como de órdenes de compra agregadas al expediente; de las que se colige esas facturas fueron emitidas por [REDACTED] presentadas para su cobro ante la Tesorería Municipal, y que si bien no son documentos públicos, éstas crean convicción en este tribunal en cuanto a su veracidad y contenido, pues tienen congruencia con el resto del material probatorio, máxime que no fueron objetadas, ni controvertidas por la parte que las emitió.

Al respecto, cabe señalar que la factura produce indicios importantes sobre la relación comercial y la entrega de las mercancías o prestación de los servicios, susceptible de alcanzar plena fuerza probatoria si es reconocida o aceptada por quien la emite, en forma expresa o tácita, o si se demuestra su vinculación al acto documentado por otros medios.

En efecto, las facturas son documentos sui géneris, porque no son simples textos elaborados libremente por cualquier persona, en cuanto a contenido y forma, sino documentos que sólo pueden provenir legalmente de comerciantes o prestadores de servicios registrados ante las autoridades hacendarias, mediante los formatos regulados jurídicamente sujetos a ciertos requisitos para su validez, y a los cuales se les sujeta a un estricto control, desde su elaboración impresa hasta su empleo, y cuya expedición puede acarrear serios perjuicios al suscriptor, requisitos que, en su conjunto, inclinan racionalmente hacia la autenticidad, como regla general, salvo prueba en contrario.



Por tanto, su contenido adquiere una fuerza indiciaria de mayor peso específico que la de otros documentos privados, simples, al compartir de algunas características con los documentos públicos.

Asimismo, la factura fue concebida originalmente con fines fiscales, para demostrar las relaciones comerciales por las cuales debían pagarse o deducirse impuestos, pero en el desarrollo de las relaciones mercantiles han adquirido otras funciones adicionales, como la de acreditar la propiedad de los vehículos automotores ante las autoridades de tránsito y otras, reconocidas inclusive en la normatividad de esa materia; respecto de otros bienes se ha venido incorporando en la conciencia de las personas como generadoras de indicios de la propiedad; entre algunos comerciantes se vienen empleando como instrumentos preparatorios o ejecutivos de una compraventa comercial o prestación de servicios, que se expiden en ocasión de la celebración del contrato respectivo, para hacer una oferta (preparatorio), o para que el cliente verifique si la mercancía entregada corresponde con la pedida, en calidad y cantidad, y haga el pago correspondiente, y en otros casos se presenta con una copia para recabar en ésta la firma de haberse recibido la mercancía o el servicio.

Por tanto, las facturas atribuidas a cierto comerciante se presumen provenientes de él, salvo prueba en contrario, como sería el caso de la falsificación o sustracción indebida del legajo respectivo.

Además, no se pierde de vista que las referidas facturas fueron anexados al citado informe rendido mediante el citado oficio **047-E-2019** de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, y éstas se hallaban en los archivos de la Tesorería Municipal y no se encuentran contradichas con algún otro medio probatorio, sino por el contrario, se encuentran corroboradas con otras probanzas, y además no fueron objetadas por las partes, de conformidad con el artículo 206 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Por lo que, las anotadas facturas tienen un valor indiciario que se encuentra concatenado con otros medios probatorios y genera convicción en este tribunal para otorgarle eficacia probatoria para acreditar que éstas fueron emitidas por [REDACTED] presentadas para su cobro ante la Tesorería Municipal, en las cantidades que detalla cada una de ellas; y que fue derivado de estas facturas que se emitieron las mencionadas veintidós pólizas, por parte de la Tesorería Municipal y por las que se asignaron los recursos en las cantidades precisadas de manera individual en el cuadro antes plasmado, que en conjunto dieron una cantidad total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional).

Aunado a lo anterior, se tiene el oficio **018-I-Ene-2019⁴⁶**, de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Contador Público [REDACTED] en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, mediante el cual informó que en los controles y archivos de esa Tesorería Municipal, no se

⁴⁶ Foja 275 del expediente de origen.

encontraron archivos el físico o expedientes de los casos de los cuales requería el prestador de servicios [REDACTED]

Informe que es un documento público expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por lo que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

De igual forma, se cuenta con la comparecencia de [REDACTED] en su carácter de representante legal de la empresa [REDACTED] V." (que constituye una de las empresas supuestamente requeridas con gestiones de cobranza por la aquí empresa particular), quien de manera general, a preguntas que le fueron formuladas por la Autoridad Investigadora, aquélla manifestó que esa empresa a la que representa no había sido visitada y/o requerida por la denominación [REDACTED] en el mes de junio recibió un requerimiento de pago de impuestos, pero desconocen quien los entregó ; y que Alexis Desiré Valdez Zazueta, en su carácter de encargada de recursos humanos de la empresa a la que representa, acudió al municipio de Nogales, Sonora, a realizar un convenio de pagos de los adeudos.⁴⁷

De igual forma, se encuentra el escrito de [REDACTED] representante legal de [REDACTED] e constituye una de las empresas supuestamente requeridas con gestiones de cobranza por la aquí particular presunta responsable), quien en lo conducente hizo del conocimiento que no conoce o tiene trato alguno con la diversa moral [REDACTED] por lo tanto nunca ha sido objeto de cobranza ni ha sido requerida en forma alguna por ningún adeudo.⁴⁸

Entrevista y escrito de los cuales se advierte la negativa por parte de las empresas [REDACTED] haber sido requeridas de manera judicial o extrajudicial por parte de la moral "SOLUCIONES [REDACTED] las cuales tienen valor de indicio de conformidad con lo dispuesto en los artículo 315 y 316 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Por lo que no se tiene constancia de que la particular presunta responsable hubiere realizado las gestiones de cobranza relativas a sus facturas presentadas ante Tesorería Municipal, pues en lo conducente, por una parte, el soporte documental de algunas de las facturas cobradas por la particular, corresponden a órdenes de compra, estados de comprobante fiscal y transferencias interbancarias, los cuales no resultan idóneos para evidenciar la gestión de cobranza; y por otra parte, en otras, no adjuntó nada.

⁴⁷ Fojas 443 y 444 del expediente de origen.

⁴⁸ Fojas 468 y 469 del expediente de origen.



Siendo que en el caso de los supuestos requerimientos a las empresas: [REDACTED], éstos corresponden a las cuatro pólizas que tienen documentos relativos a requerimientos:

	No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	CANTIDAD	CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO	FACTURA CON FOLIO FISCAL No.	DOCUMENTOS DE SOPORTE
1	C9216218	FACT. C9216218. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	C9216218-1305-4F87-826F-00C6C27F67A1	NOTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL FOLIO: REQ/002/AGO/IMP-002 DE FECHA 17/AGO/2017, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. OMAR DAVID CASTILLO ÁVILA, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE DEL CONTRIBUYENTE [REDACTED]
6	C05391	ABONO FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	\$97,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL [REDACTED]	3DA34E75-FED8-46C4-80A3-7808792726CD	ORDEN DE COMPRA DE FECHA 06/08/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DE REPORTE DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE [REDACTED] S.A. DE CVR FAVOR DEL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE \$1,000,000.00; ORDEN DE COMPRA NÚMERO 821, DE FECHA 06/AGO/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DEL ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL;
7	C05429	LIQ. FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	\$193,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL [REDACTED]	3DA34E75-FED8-46C4-80A3-7808792726CD	IMPRESIÓN DE REPORTE DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE [REDACTED] FAVOR DEL MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE \$1,000,000.00; ORDEN DE COMPRA NÚMERO 821, DE FECHA 06/AGO/2018, POR LA CANTIDAD DE \$290,000.00; IMPRESIÓN DEL ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL;

17	C06401	SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES S/F 327C0EA7	\$174,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	327C0EA7-88D1-4DBD-BF43-AB8EEDEC69F2	NOTIFICACIONES, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL CON FOLIOS: REQ/005/MAY/IMP-005 Y REQ/001/MAY/IMP-001, AMBOS DE FECHA 14 DE MAYO DE 2018 Y SIGNADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. LUIS GERARDO OLIVAS DÍAZ, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE [REDACTED] NOTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL FOLIO: REQ/002/AGO/IMP-002 DE FECHA 14/AGO/2017, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. OMAR DAVID CASTILLO ÁVILA, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE "GRUPO EMPRESARIAL [REDACTED]" PRESION DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL
----	--------	---	--------------	---	--------------------------------------	--

Pero como se advirtió los mencionados requerimientos no fueron reconocidos por la empresas [REDACTED]

[REDACTED] en auto no existen medios probatorios como informes o controles que acrediten que la particular hubiere realizado las gestiones de cobranza a las mencionadas morales.

Al respecto, aunado a la negativa de las mencionadas empresas, se destaca la circunstancia de que la notificación, determinación, calificación y liquidación de crédito fiscal folio: **REQ/002/AGO/IMP-002** de fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por el tesorero municipal, licenciado Omar David Castillo Ávila, dirigido al contribuyente [REDACTED] ésta es de fecha anterior a la del contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018** de prestación de servicios por honorarios profesionales, celebrado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, el Ayuntamiento y la empresa "[REDACTED]"

Por otro lado, no pasa desapercibido que se tienen los informes emitidos por [REDACTED] en su carácter de Apoderado General para pleitos y Cobranzas y Actos de Administración de la empresa [REDACTED] mediante los cuales, en lo que interesa, remitió copia del oficio de notificación, requerimiento, calificación y liquidación de crédito fiscal identificado con el folio **REQ/001/MAYO/IMP-001**⁴⁹ de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitido por [REDACTED] entonces Tesorero Municipal; asimismo, remitió copia simple de diversas

⁴⁹ Fojas 570 a 573 del expediente de origen.



transferencias interbancarias a favor del Municipio de Nogales, Sonora.⁵⁰

Empero, no pasa desapercibido que dicho requerimiento se encuentra relacionado con la siguiente póliza y factura:

	No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	CANTIDAD	CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO	FACTURA CON FOLIO FISCAL No.	DOCUMENTOS DE SOPORTE
17	C06401	SERVICIOS DE COBRANZA DE PEDIALES S/F 327C0EA7	\$174,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PEDIALES	327C0EA7-88D1-4DBD-BF43-AB8EEDEC69F2	NDTIFICACIONES, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL CON FOLIOS: REQ/005/MAY/IMP-005 Y REQ/001/MAY/IMP-001, AMBOS DE FECHA 14 DE MAYO DE 2018 Y SIGNADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. LUIS GERARDO OLIVAS DÍAZ, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE [REDACTED]; NOTIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO FISCAL FOLIO: REQ/002/AGO/IMP-002 DE FECHA 14/AGO/2017, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. OMAR DAVID CASTILLO ÁVILA, DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE [REDACTED] [REDACTED] PRESION DE ESTADO DE COMPROBANTE FISCAL

Sin embargo, cabe aclarar que de acuerdo a los archivos remitidos por la Tesorería Municipal, entre el soporte documental atinente a la referida empresa y la factura con folio fiscal **327C0EA7-88D1-4DBD-BF43-AB8EEDEC69F2**, entre otros, se acompañaron las notificaciones, determinación, calificación y liquidación de crédito fiscal con folios: **REQ/005/MAY/IMP-005** y **REQ/001/MAY/IMP-001**, ambos de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, signados por el tesorero municipal, licenciado LUIS GERARDO OLIVAS DÍAZ, dirigido al contribuyente [REDACTED]

Siendo que en el caso [REDACTED] en su carácter de Apoderado General para pleitos y Cobranzas y Actos de Administración de la empresa "[REDACTED]" [REDACTED] únicamente informó del requerimiento, calificación y liquidación de crédito fiscal identificado con el folio **REQ/001/MAYO/IMP-001**⁵¹ de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitido por [REDACTED] entonces Tesorero Municipal; sin reconocer el diverso **REQ/005/MAY/IMP-005** y tampoco se tiene constancia de ello en autos.

⁵⁰ Fojas 552 a 568 y 569 a 586 del expediente de origen.

⁵¹ Fojas 570 a 573 del expediente de origen.

En esa tesitura, de los anteriores medios probatorios señalados se colige que, la particular aquí presunta responsable, en su carácter de prestador de servicios del Ayuntamiento, **simuló el cumplimiento de los requisitos del procedimiento administrativo estipulado en la cláusula quinta, puntos uno, dos y siete**, del contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018**⁵² de prestación de servicios por honorarios profesionales, celebrado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, entre el Ayuntamiento y la empresa [REDACTED]

En otro rubro, el **TERCER ELEMENTO** de la falta administrativa, atinente a que lo anterior lo realice *con el propósito de lograr un beneficio*, éste también se encuentra evidenciado.

Esto es así, pues con los medios probatorios aportados quedó acreditado que con la simulación de cumplimiento de requisitos que efectuó la particular presunta responsable, esto fue con el propósito de obtener el beneficio económico de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional).

Esto es así, pues en autos quedó evidenciado que los recursos públicos financieros por la cantidad total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), que conformaban parte de la hacienda pública municipal de Nogales, Sonora, fueron asignados y transferidos a la particular, con motivos de los supuestos trabajos de cobranza realizados por la presunta responsable, en su carácter de prestador de servicio, derivado del citado contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018** de prestación de servicios celebrado con el Ayuntamiento.

Tal como se advierte del oficio **341CCMC-2018**⁵³ de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Contador Público [REDACTED] en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en el que en el apartado de observaciones con posible daño patrimonial, en la número dos, se desprende lo siguiente:

"De la revisión del seguimiento presupuestal del gastos correspondiente a la dependencia de la Tesorería Municipal, en lo general se observó buen comportamiento presupuestal del gasto, a excepción del gasto efectuado, en el capítulo de servicios generales en la partida 34201, por servicios de cobranza, investigación crediticia y similar, la cual refleja un excedente presupuestal al 31 de agosto de 2018, por la cantidad de \$ 2,273,212.30, en el presupuesto de la unidad administrativa de la dirección de ingresos, mismo que al analizar los registros analíticos del gasto, el importe excedido, se refleja en el pago a un prestador de servicios DE FORMA INUCUAL, denominación LEGAL SOLUCIONES [REDACTED] lo anterior debido a que en el ejercicio fiscal se le efectuaron pagos, por la cantidad de \$3,491,118.16, resulta relevante que dichos pagos acumulados antes señalados, se aplicaron de la fecha 06 de julio al 15 de septiembre de 2018, un total de 23 pagos consecutivos de facturas, con un importe total \$3,075,649.38, lo que representa el 88% de los pagos totales efectuados sobre su facturación total en los últimos meses. Así mismo no

⁵² Fojas 262 a 272 del expediente de origen.

⁵³ Fojas 2 a 48 del expediente de origen.

Aunado a lo anterior, se encuentran las copias certificadas de cada una de las **pólizas** que se describen en el indicado informe, expedidas por el Municipio a través de la Tesorería Municipal a favor de [REDACTED] sí como de las **impresiones de internet de las transferencias electrónicas bancarias** correspondientes a cada una de las mencionadas pólizas, relativas a la cuenta de retiro número 0105670721, del banco BBVA Bancomer, en la que aparece como titular el Municipio de Nogales, Sonora y como cuenta de depósito número 195013828 a nombre de [REDACTED] las cuales son de números, fechas y cantidades siguientes:⁵⁵

	No. DE REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA	FECHA	CANTIDAD
1	I32320180761702420022774030	06/07/2018	\$116,000.00
2	I323201807131539060069183024	13/07/2018	\$116,000.00
3	I323201807191408190021427254	19/07/2018	\$116,000.00
4	I323201807191409530021427270	19/07/2018	\$116,000.00
5	I323201808061528480028208076	06/08/2018	\$116,000.00
6	I323201808211656000026732172	21/08/2018	\$97,000.00
7	I323201808221654540011022091	22/08/2018	\$193,000.00
8	I323201808241633420077836353	24/08/2018	\$200,000.00
9	I323201808311723160075185036	31/08/2018	\$173,520.00
10	I323201809041711570067538058	04/09/2018	\$145,000.00
11	I323201809061720370039389028	06/09/2018	\$145,000.00
12	I323201809121658480092466205	12/09/2018	\$53,360.00
13	I323201809121659520092466220	12/09/2018	\$145,000.00
14	I323201809121706270092466257	12/09/2018	\$145,000.00
15	I323201809121708110092466272	12/09/2018	\$145,000.00
16	I323201809121709250092466287	12/09/2018	\$16,111.10
17	I323201809141656040098248063	14/09/2018	\$174,000.00
18	I323201809141649570098248044	14/09/2018	\$104,400.00
19	I323201809141647370098248029	14/09/2018	\$156,600.00
20	I323201809151503310040448270	15/09/2018	\$183,993.78
21	I323201809151502090040448255	15/09/2018	\$152,772.99
22	I323201809151452340040448240	15/09/2018	\$164,589.93

TOTAL \$2,974,347.80

Informe de autoridad de referencia al que se adjuntaron documentos públicos, tales como las mencionadas cuentas auxiliares y pólizas, las cuales son documentos públicos expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, que se encuentran en los archivos del Ayuntamiento de Nogales, Sonora y fueron debidamente certificados por el licenciado Jorge Jáuregui Lewis, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento, de acuerdo a las facultades establecidas para ello en los artículos 89, fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; por lo que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del

⁵⁵ Fojas 56 a 259 del expediente de origen.



Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Por otro lado, al referido informe fueron anexados documentos privados, como lo son las impresiones de internet de las transferencias electrónicas bancarias, las cuales si bien no constituyen documentos públicos, éstas no deben valorarse como una copia simple o un documento privado, toda vez que no pueden imputarse a una persona su elaboración, ante la falta de firma autógrafa para efectos de su reconocimiento, sino que constituyen la impresión de la información generada vía electrónica y, en consecuencia, tiene la naturaleza de descubrimiento de la ciencia, cuyo valor probatorio queda al prudente arbitrio del juzgador, conforme al artículo 205 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Así, para valorar la fuerza probatoria de esa documental electrónica, este tribunal deberá atender, preponderantemente, a la fiabilidad del método en que fue generada la información, a fin de corroborar su contenido, lo que puede acreditarse por medio del código de captura, sello digital, o cualquiera otra que permita autenticar su contenido.

En ese orden de ideas, las mencionadas impresiones de internet de las transferencias electrónicas bancarias, forman convicción en este tribunal respecto a su autenticidad y contenido por haber sido remitidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones mediante informe, además de que éstos cuentan con el logotipo de la institución bancaria, la fecha de su emisión y la cadena al pie del documento con la que suscribe el banco que la emite, aunado a que dado que gracias a los avances tecnológicos éstos documentos pueden ser impresos mediante las aplicaciones bancarias autorizadas para ello, en las que se detallan las operaciones realizadas por los usuarios, de los que existe una presunción de buena fe e imparcialidad hacia los clientes que utilizan los servicios bancarios, por la estricta vigilancia a la que se encuentran sujetos, la cual genera certeza de la fecha y realización de los actos que consten en tales documentos.

Aunado a lo anterior, las anteriores impresiones de internet de las transferencias electrónicas bancarias se encuentran en los archivos del Ayuntamiento de Nogales, Sonora y fueron debidamente certificadas por el licenciado Jorge Jáuregui Lewis, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento, de acuerdo a las facultades establecidas para ello en los artículos 89, fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; por lo que tiene se les confiere valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173, 199 y 205, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Sirven de apoyo a lo anotado los criterios siguientes:

TRANSFERENCIA BANCARIA VÍA SPEI, SU VALOR PROBATORIO. El Sistema de Pagas Electrónicas Interbancarios (SPEI), fue desarrollado por el Banca de México, Banca Central de la Nación y la Banca Comercial, para permitir a los clientes de bancos enviar y recibir transferencias electrónicas de dinero. Sistema complejo del que destaca que para poder llevar a cabo este tipo de transacciones, los usuarios deben completar toda aquella información fidedigna que identifique ampliamente no sólo a la parte que abona y a la que recibe, sino que proporciona un número de referencia de hasta 7 dígitos, un identificador

llamado clave de rastreo, de hasta 30 posiciones alfanuméricas que llevan como finalidad la rápida identificación del pago realizada, el monto del abono, así como la fecha y hora en que se realiza. Dicha seguridad se encuentra basada en mensajes firmados digitalmente para lo cual los participantes usan certificados digitales y las claves de las personas autorizadas, los que se obtienen de acuerdo con las normas de la Infraestructura Extendida de Seguridad (IES), del Banco de México. Luego, toda vez que dichos pagos contienen el mismo tipo de firma digital que se requiere para llevar a cabo el pago de impuestos, derechos y que han sido analizados por nuestro Máximo Tribunal y se les concede valor diverso a los documentos privados pues, incluso, con relación a la firma electrónica, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de las Naciones, en la tesis 2a. XCVII/2007, publicada en la página seiscientos treinta y ocho del Tomo XXVI, del mes de agosto de dos mil siete, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. EL HECHO DE QUE EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ESTABLEZCA SU DEFINICIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD.", estableció que su finalidad es identificar al emisor de un mensaje como su autor legítimo, como si se tratara de una firma autógrafa, con lo que se garantiza la integridad del documento produciendo los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa y tienen el mismo valor probatorio.⁵⁶

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. NO ES DOCUMENTO PRIVADO CUYO VALOR SEA EQUIPARABLE AL DE UNA COPIA SIMPLE. La impresión de internet de una transferencia electrónica no puede ser valorada como una copia simple de un documento privado, toda vez que no puede imputársele a persona alguna su elaboración o materialización ante la falta de firma autógrafa para efectos de su reconocimiento, sino que en términos de los artículos 1237, 1238, 1242 y 1245 del Código de Comercio, así como del diverso 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de Comercio, goza de la naturaleza de descubrimiento de la ciencia, por lo que queda al prudente arbitrio del juzgador la valoración de la información recabada de medios electrónicos. Así, en aras de crear seguridad jurídica en los usuarios de los servicios electrónicos, el legislador estableció reglas específicas para la valoración de la documental electrónica, de tal suerte que no puede valorarse como si se tratara de una copia simple de documentos privados, sino que queda a la prudencia del juzgador, en la inteligencia de que debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada la información contenida en los medios electrónicos, como son el código de captura, la cadena de caracteres generada con motivo de la transacción electrónica, sello digital o cualquiera que permita autenticar el contenido de ese documento digital y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos; si el documento no fue objetado de falsedad por la parte actora y la objeción fue en cuanto a su alcance y valor probatorio, sin que se argumentara que dicho pago correspondiera a bienes, servicios o cualquier otra diversa; mientras que si existió el reconocimiento tácito de la existencia de dicho pago, contará con pleno valor probatorio.⁵⁷

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. LA IMPRESIÓN DE INTERNET DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE ÉSTAS, AL TENER LA NATURALEZA DE DESCUBRIMIENTO DE LA CIENCIA, SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR. Conforme al artículo 1238 del Código de Comercio, los documentos privados son aquellos que, por exclusión, no son reputados por las leyes como instrumentos públicos, pero para que puedan ser considerados como tales, deben contener como característica esencial que pueda imputársele a una persona su elaboración o la orden de realizarse, para efectos de su

⁵⁶ Tesis: I.3o.C.162 C (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Registro digital: 2008633, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2546, Tipo: Aislada.

⁵⁷ Tesis: I.3o.C.220 C (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Registro digital: 2009165, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2400, Tipo: Aislada.



reconocimiento. Por tanto, la impresión de Internet de una transferencia electrónica bancaria no debe valarse como una copia simple a un documento privada, toda vez que no puede imputarse a una persona su elaboración, ante la falta de firma autógrafa para efectos de su reconocimiento, sino que constituye la impresión de la información generada vía electrónica y, en consecuencia, tiene la naturaleza de descubrimiento de la ciencia, cuya valor probatorio queda al prudente arbitrio del juzgador, conforme a los artículos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al código mercantil referido. Así, para valorar la fuerza probatoria de esa documental electrónica, el juzgador deberá atender, preponderantemente, a la fiabilidad del método en que fue generada la información, o fin de corroborar su contenido, lo que puede acreditarse por medio del código de captura, sello digital, o cualquiera otra que permita autenticar su contenido. Además, como esa información electrónica es expresada en un documento, ésta puede objetarse en cuanto a su alcance y valor probatorio a impugnarse de falso, para lo cual, deberán seguirse las reglas establecidas en el Código de Comercio.⁵⁸

Aunado a lo anterior, se encuentra el oficio **271-E-feb-2019**⁵⁹, de fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, por medio del cual informó, entre otras cosas, que la cuenta utilizada para efectuar pagos a [REDACTED] en el periodo de julio a septiembre de dos mil dieciocho, es la cuenta [REDACTED] de BBVA Bancomer, CLABE [REDACTED] nombre del Municipio de Nogales, Sonora.

Informe que es un documento público expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por lo que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 173 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en concordancia con los numerales 82, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y 283, fracciones I y V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, estos dos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Medios probatorios que, concatenados entre sí ponen en evidencia que la presunta responsable simuló el cumplimiento de requisitos establecidos en los procedimientos administrativos **con el propósito de obtener el beneficio económico por la cantidad de \$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), el cual pertenecía a la hacienda pública municipal y que le fue transferido con motivo de las reseñadas facturas exhibidas por la presunta responsable, para su cobro por concepto de supuestas gestiones de cobranza, relativas al contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018** de prestación de servicios por honorarios profesionales, celebrado por la particular con el Ayuntamiento. Con lo que se tiene por acreditado el último de los elementos de la falta administrativa de particular analizada.

⁵⁸ Tesis: I.12o.C.68 C (10a.) sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, Registro digital: 2017851, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2579, Tipo: Aislada.

⁵⁹ Foja 287 del expediente de origen.

En esa tesitura, con los medios probatorios aportados se tiene la certeza de que entre el seis de julio y el quince de dos mil dieciocho, la particular presunta responsable en su carácter de prestador de servicios del Ayuntamiento, **simuló el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo estipulado en la cláusula quinta, puntos uno, dos y siete**, del contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018** de prestación de servicios por honorarios profesionales, celebrado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, entre el Ayuntamiento y la empresa [REDACTED] lo anterior, **con el propósito de obtener el beneficio económico por la cantidad de \$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional).

En ese contexto, se llega a la conclusión de que se encuentra acreditada la existencia de la falta administrativa de particular **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA** prevista en el artículo 109 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en la hipótesis ***“el particular que simule el cumplimiento de requisitos establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr un beneficio”***.

6. ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

6.1. Análisis de la responsabilidad administrativa de [REDACTED]

Se encuentra acreditada en autos la responsabilidad administrativa del entonces servidor público [REDACTED] a la comisión de la falta administrativa grave **DESVÍO DE RECURSOS** prevista en el artículo 93 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en la hipótesis ***“el servidor público que autorice actos para la asignación de recursos públicos financieros en contraposición a las normas aplicables”***.

Falta administrativa cometida por el mencionado servidor público en la época de los hechos por sí mismo y de manera dolosa, en razón de que los medios de prueba analizados y valorados en el apartado que antecede, se aprecia que el infractor de la Ley Estatal de Responsabilidades conocía los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho, y aún así quiso su resultado.

Es decir, entre el seis de julio y el quince de dos mil dieciocho, [REDACTED] su carácter de Tesorero Municipal, **autorizó actos para la asignación de recursos públicos financieros** por la cantidad total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), a favor de la empresa “[REDACTED]” anterior, **en contraposición a las normas aplicables**, en el caso, en contraposición a los artículos 91, fracciones VII, VIII, IX, XVI y 92, fracción II, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal; y los numerales 4, fracciones VIII y X, 25, y 26, del Presupuesto de Egresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho.

Con lo cual se puso en peligro el bien jurídico tutelado que es la debida administración



pública y el patrimonio del Municipio de Nogales, Sonora.

Falta administrativa que se acredita en forma dolosa.

Para concluir en la forma que antecede, debe tomarse en consideración fundamentalmente el contenido y alcance probatorio del informe de presuntas irregularidades detectadas en los procesos de entrega-recepción de la Tesorería Municipal, remitido mediante oficio **341CCMC-2018**⁶⁰ de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, firmado por el Contador Público [REDACTED], en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora.

Informe del cual, en el apartado de observaciones con posible daño patrimonial, en la número dos, se desprende lo siguiente:

"De la revisión del seguimiento presupuestal del gastos correspondiente a la dependencia de la Tesorería Municipal, en lo general se observo buen comportamiento presupuestal del gasta, a excepción del gasto efectuado, en el capítulo de servicios generales en la partida 34201, por servicios de cabranza, investigación crediticia y similar, la cual releja un excedente presupuestal al 31 de agosto de 2018, por la cantidad de \$ 2,273,212.30, en el presupuesto de la unidad administrativa de la dirección de ingresos, mismo que al analizar los registro analíticos del gasto, el importe excedido, se refleja en el pago a un prestador de servicios DE FORMA INUCUAL, denominación [REDACTED] o anterior debido a que en el ejercicio fiscal se le efectuaron pagos, por la cantidad de \$3,491,118.16, resulta relevante que dichos pagos acumulados antes señalados, se aplicaron de la fecha 06 de julio al 15 de septiembre de 2018, un total de 23 pagos consecutivos de facturas, con un importe total \$3,075,649.38, lo que representa el 88% de los pagos totales efectuados sobre su facturación total en los últimos meses. Así mismo no se encontró evidencia o soporte documental en original de sus servicios prestados, y que se relacionaran en específico, en la carpeta de entrega recepción, y al hacer una revisión exhaustiva en el clausulado del contrato, se observa que no se cumplieron en totalidad de las cláusulas del servicio, por lo que se presume un posible daño patrimonial sobre los servicios pactados y cabrados, pues resultan documentalmente sus servicios no acreditados y los procesos jurídicos mal practicados, así como incompatibilidad entre las fechas de pago de los contribuyentes, la facturación de servicios prestada y las fechas de pago efectuadas por la Tesorería Municipal.

De igual forma, se tiene el oficio **047-E-2019**⁶¹ de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Contador Público [REDACTED] en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, por medio del cual remitió los **Auxiliares de Cuentas** correspondientes al periodo del uno de julio al quince de septiembre de dos mil dieciocho, de las que se desprenden que fueron pagadas **veintidós pólizas** expedidas por el Municipio a través de la Tesorería Municipal, las cuales en conjunto arrojan una cantidad total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), a favor de la empresa [REDACTED]

Aunado a lo anterior, remitió copia certificada de las referidas **veintidós pólizas** contables de los pagos realizados a [REDACTED] por un total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), durante el periodo de

⁶⁰ Fojas 2 a 48 del expediente de origen.

⁶¹ Fojas 54 a 259 del expediente de origen.

julio a septiembre de dos mil dieciocho, con su respectivo soporte, entre el cual se encuentran **veintidós órdenes de pago** expedidas a favor de la mencionada moral, de las que se advierte que éstas fueron autorizadas por [REDACTED] en su carácter de Tesorero Municipal; **veintidós impresiones de internet de las transferencias electrónicas bancarias** correspondientes a cada una de las mencionadas pólizas, relativas a la cuenta de retiro número 0105670721, del banco BBVA Bancomer, en la que aparece como titular el Municipio de Nogales, Sonora y como cuenta de depósito número 195013828 a nombre de [REDACTED] así como las facturas y órdenes de compra relativas, de acuerdo al cuadro siguiente:

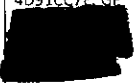





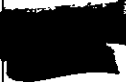

No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	No. DE REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA	FECHA	CANTIDAD	CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO	PERSONA QUE AUTORIZÓ LA ORDEN DE PAGO
1	C9216218. FACT. C9216218. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	I32320180761702420022774030	06/07/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	[REDACTED]
2	C04620. FACT. 7D54792F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	I323201807131539060069183024	13/07/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	[REDACTED]
3	C04822. FACT. 2FA9CCD. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	I323201807191408190021427254	19/07/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	[REDACTED]
4	C04823. FACT. E9AF1F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	I323201807191409530021427270	19/07/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	[REDACTED]
5	C04997. FACT. ACE19E85. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES	I3232018080615284800282D8076	06/08/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	LUIS GERARDO OLIVAS DÍAZ
6	C05391. ABONO FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	I3232018082116560D0026732172	21/08/2018	\$97,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL [REDACTED]	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE LUIS GERARDO OLIVAS DÍAZ
7	C05429. LIQ. FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	I323201808221654540D11022091	22/08/2018	\$193,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL BUEN [REDACTED]	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
8	C05510. ABONO FACTS. AD29B312; 6954837E; B87E10D7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A104788A. GP [REDACTED]	I323201808241633420077836353	24/08/2018	\$200,000.00	HONORARIOS POR COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL FACTURAS AD29B312; 6954837E; B87E10D7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A104788A	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

9	CD6D29	LIQ. FACTS. AD29B312; 6954B37E; B87E10D7; 3DE34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A GP [REDACTED]	I3232018D8311723160075185036	31/08/2018	\$173,520.00	HONORARIOS POR COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL FACTURAS AD29B312; 6954B37E; B87E10D7; 3DE34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
10	C06119	FACT. 2D51FC1F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	I323201809041711570067538058	04/09/2018	\$145,000.00	SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIAL	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
11	CD6174	FACT. 3BB55B96 PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	I323201809061720370039389028	06/09/2018	\$145,000.00	SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIAL	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
12	C06295	SERVICIOS DE COBRANZA DE UN FACTURA EDC3B967. GP [REDACTED]	I32320180912165848D092466205	12/09/2018	\$53,360.00	SERVICIOS DE COBRANZA	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
13	C06298	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 6BA62C58 GP [REDACTED]	I3232018D9121659520092466220	12/09/2018	\$145,000.00	NO	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
14	C06299	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 4D91CC7E GP [REDACTED]	I32320180912170627D092466257	12/09/2018	\$145,000.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 4D91CC7E	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]

15	C0630D	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 4D91CC7E GP 	I3232D180912170811D092466272	12/09/2018	\$145,000.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 4D91CC7E	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE 
16	C06301	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 1D119A36 GP 	I3232D18D9121709250092466287	12/09/2018	\$16,111.10	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 1D119A36	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE 
17	C06401	SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES S/F 327C0EA7	I3232D1809141656040098248D63	14/09/2018	\$174,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	ORDEN DE PAGO EN LA QUE SE OBSERVA EL NOMBRE DE  SU FIRMA ESTAMPADA EN EL APARTADO DEL NOMBRE DEL LICENCIADO 
18	C06427	FACT. 9BAC828A. SERVICIOS DE COBRANZA GP 	I3232D1809141649570098248044	14/09/2018	\$104,400.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE 



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

19	C06428	FACT. 09967400. SERVICIOS DE COBRANZA GP [REDACTED]	I323201809141647370098248029	14/09/2018	\$156,600.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
20	C06472	FACTS. 34C78DE5; 0C8497C3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA GP [REDACTED]	I323201809151503310040448270	15/09/2018	\$183,993.78	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA 0C8497C3	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
21	C06473	FACT. A9F1F97A. PRESTACIÓN DE SERVICIOS (COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO [REDACTED]	I323201809151502090040448255	15/09/2018	\$152,772.99	SERVICIOS DE COBRANZA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
22	C06474	FACTS. 87A12ACD; FC6DDC87 . PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL ME. GP [REDACTED]	I323201809151452340040448240	15/09/2018	\$164,589.93	SERVICIOS DE COBRANZA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]

TOTAL \$2,974,347.80

En adición, se encuentra el oficio **271-E-feb-2019** ⁶², de fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, por medio del cual informó, entre otras cosas, que la cuenta utilizada para efectuar pagos a [REDACTED] en el periodo de julio a septiembre de dos mil dieciocho, es la cuenta [REDACTED] BBVA Bancomer, CLABE [REDACTED] nombre del Municipio de Nogales, Sonora.

⁶² Foja 287 del expediente de origen.

Además, se cuenta con copia certificada del contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018**⁶³ de prestación de servicios por honorarios profesionales, celebrado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, entre el Ayuntamiento y la empresa "[REDACTED]"

[REDACTED] (como prestador de servicios) cuyo **objeto** era la prestación oportuna, directamente, por cuenta y bajo responsabilidad de la indicada moral, del servicio de **cobranza extrajudicial y judicial para la recuperación de créditos fiscales y asesoría jurídica**; por el plazo del uno de enero a quince de septiembre de dos mil dieciocho.

Contrato de prestación de servicios del cual se advierte que de acuerdo a las declaraciones y cláusulas estipuladas en el indicado contrato, se desprende que [REDACTED]

[REDACTED] su **carácter de Tesorero Municipal** era el encargado de la **coordinación, supervisión y pago**, de los servicios profesionales de cobranza efectuados por la empresa "[REDACTED]" derivados del mencionado contrato.

Esto es así, pues como titular de la Tesorería era el encargado de **coordinar** las actividades de la indicada moral y de turnarle vía escrito la relación de los causantes morosos a los que debería realizar la cobranza correspondiente, en la que se precisaría como mínimo nombre del contribuyente, clave, adeudo y tiempo de morosidad; así como de proporcionarle los documentos necesarios.

Asimismo, como Tesorero Municipal tenía la obligación de **supervisión** de las actividades de la mencionada empresa, pues al efecto, la indicada moral debía entregarle en forma mensual todos los informes que le requiriera; asimismo, la empresa debía presentarle cada mes un informe de la cobranza judicial o extrajudicial realizada, especificando los montos recaudados por motivo de su gestión; además como Tesorero Municipal debía realizar el cotejo y verificación, de ingresos efectivos por la gestión realizada, y llevar su propio registro y control de los asuntos turnados a la moral en cuestión.

Aunado a lo anterior, [REDACTED] como Tesorero Municipal debía efectuar el **pago** a la empresa por los servicios prestados como honorarios del 25% (veinticinco por ciento) sobre el monto de las cantidades que se recuperaran por Tesorería Municipal, ya sea en la vía judicial o extrajudicial, por los servicios materia del citado contrato, por concepto de rezago. Porcentaje mencionado que debía pagarse sobre la cantidad mensual acumulada que hubiere ingresado al Ayuntamiento por los referidos servicios; por lo que, como Tesorero Municipal, debía ejecutar el análisis correspondiente para **verificar que efectivamente los recursos recuperados fueron ingresados a la hacienda pública municipal**; igualmente, debía **cotejar con soporte documental que los servicios sí hubieren sido efectivamente realizados**, para entonces autorizar la asignación del recurso público financiero correspondiente. Asimismo, el pago correspondiente debía hacerlo **ajustándose al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho de esa Tesorería Municipal**.

Aunado a lo anterior, se tiene el oficio **018-I-Ene-2019**⁶⁴, de fecha veintinueve de enero de dos mil **diecinueve**, suscrito por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, mediante el

⁶³ Fojas 262 a 272 del expediente de origen.

⁶⁴ Foja 275 del expediente de origen.



cual informó que en los controles y archivos de esa Tesorería Municipal, no se encontraron archivos el físico o expedientes de los casos de los cuales requería el prestador de servicios "[REDACTED]"

Por otro lado, se cuenta con la comparecencia de "[REDACTED]" en su carácter de representante legal de la empresa "[REDACTED]" (que constituye una de las empresas supuestamente requeridas con gestiones de cobranza por la aquí particular presunta responsable), quien de manera general, a preguntas que le fueron formuladas por la Autoridad Investigadora, aquélla manifestó que esa empresa a la que representa no había sido visitada y/o requerida por la denominación "[REDACTED]" en el mes de junio recibió un requerimiento de pago de impuestos, pero desconocen quien los entregó; y que Alexis Desiré Valdez Zazueta, en su carácter de encargada de recursos humanos de la empresa a la que representa, acudió al municipio de Nogales, Sonora, a realizar un convenio de pagos de los adeudos.⁶⁵

De igual forma, se encuentra el escrito de "[REDACTED]" representante legal de "[REDACTED]" que constituye una de las empresas supuestamente requeridas con gestiones de cobranza por la aquí particular presunta responsable), quien en lo conducente hizo del conocimiento que no conoce o tiene trato alguno con la diversa moral "[REDACTED]" por lo tanto nunca ha sido objeto de cobranza ni ha sido requerida en forma alguna por ningún adeudo.⁶⁶

Asimismo, se tienen los informes emitidos por "[REDACTED]" en su carácter de Apoderado General para pleitos y Cobranzas y Actos de Administración de la empresa "[REDACTED]" mediante los cuales, en lo que interesa, únicamente reconoce el oficio de notificación, requerimiento, calificación y liquidación de crédito fiscal identificado con el folio REQ/OO1/MAYO/IMP-001⁶⁷ de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitido por "[REDACTED]" entonces Tesorero Municipal.

Los anteriores medios de prueba fueron valorados en el apartado 5.1. de esta resolución, por lo que nos remitimos a los razonamientos de valoración plasmados, a fin de no caer en repeticiones innecesarias, por lo que se reproducen como si a la letra se insertaran.

De ahí que las anteriores probanzas, apreciadas en su conjunto, resultan idóneas para acreditar la intervención del servidor público "[REDACTED]" de manera directa en la conducta reprochada, pues éste en su carácter de Tesorero Municipal autorizó la asignación recursos públicos financieros a la empresa "[REDACTED]" en contraposición a las normas aplicables, en el caso, en

⁶⁵ Fojas 443 y 444 del expediente de origen.

⁶⁶ Fojas 468 y 469 del expediente de origen.

⁶⁷ Fojas 570 a 573 del expediente de origen.

contraposición a los artículos 91, fracciones VII, VIII, IX, XVI y 92, fracción II, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal; y los numerales 4, fracciones VIII y X, 25, y 26, del Presupuesto de Egresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho.

Esto es así, ya que [REDACTED] su calidad de Tesorero Municipal, no documentó debidamente toda ministración de fondos públicos; no llevó debidamente la contabilidad general y el control del ejercicio presupuestal; no hizo los pagos con estricto apego al Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento; no formó y llevó un expediente de la empresa contratada por el Ayuntamiento; no ejerció el Presupuesto de Egresos, ni efectuó los pagos de acuerdo al presupuesto aprobado.

De igual forma, no administró con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estaban destinados los recursos públicos financieros de la hacienda pública municipal, tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se ajustó a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social; pues no efectuó los pagos con cargo al presupuesto de egresos del municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados; asimismo, distrajo recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado; y no vigiló la exacta observancia de las normas contenidas en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.

Sin que en el caso se acreditara alguna causa de exclusión de la falta administrativa a favor del entonces servidor público, ni se probó en su beneficio alguna causa de justificación como son la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho, por lo que la referida conducta fue efectuada en contraposición a las normas aplicables al no existir constancia de que el servidor público se encontraba amparado en alguna de las mencionadas causas de justificación.

Tampoco se probó que al consumarse aquel comportamiento, el ex servidor público no tenía la capacidad de comprender el carácter infractor de esos hechos, ni de conducirse de acuerdo a esa comprensión, menos aún se justificó la existencia de algún error de prohibición que le hiciera creer que su conducta era conforme a las normas aplicables.

Máxime que actuó dentro de un amplio margen de libertad, al no mediar coacción física o moral en su contra, exigiéndole por tanto un comportamiento diverso al realizado, es decir, ajustado a derecho, pues además el servidor público es mayor de dieciocho años y al momento de cometer la falta administrativa de referencia no se encontraba bajo los efectos de algún trastorno mental transitorio o padeciera desarrollo intelectual retardado; por ello, su comportamiento le es reprochable a título administrativo y se estima acreditada su responsabilidad.

En tales condiciones, quedó demostrado en autos la existencia de la falta administrativa



grave **DESVÍO DE RECURSOS** prevista en el artículo 93 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en la hipótesis *“el servidor público que autorice actos para la asignación de recursos públicos financieros en contraposición a las normas aplicables”*; así como la responsabilidad administrativa del servidor público [REDACTED] en su comisión.

Esto es así, sin que sea óbice a lo anterior lo manifestado por [REDACTED] en su escrito presentado ante la Autoridad Substanciadora, en su comparecencia a la celebración de la Audiencia Inicial desahogada el trece de octubre de dos mil veinte, el cual se encuentra agregado al expediente de origen⁶⁸, de los cuales resulta innecesaria su transcripción, partiendo del principio de economía procesal y en especial, porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto del presente fallo, sin que ello constituya una transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad por parte de esta Sala Especializada, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman el litigio.

Resulta orientadora al respecto por analogía, las razones contenidas en el criterio de rubro y tenor literal siguiente: **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.**⁶⁹

Al efecto, [REDACTED] el proemio de su escrito, así como en el último de sus agravios al que denominó “DÉCIMO PRIMERO”, expresó que en el caso solicita el sobreseimiento por actualizarse la causal de improcedencia respecto de las imputaciones realizadas por la Autoridad Investigadora, con apego en los artículos 236, Fracción IV y 237 fracciones I y III, último párrafo, de la Ley Estatal de Responsabilidades.

En ese sentido, el mencionado responsable realiza una serie de manifestaciones en las que de manera general, dice que la Autoridad Investigadora debió agotar la indagatoria en todos sus ámbitos y con apego a los artículos 130 y 151 de la Ley Estatal de Responsabilidades; lo cual a su decir no aconteció, pues en autos a fojas 275 y 276 se desprende la supuesta existencia de un anexo consistente en un disco compacto que contiene información de relación de los nombres de las compañías deudoras de predial que fueron requeridos por ellos y los montos pagados a ellos por dichos trámites de cobro. (Al efecto en el escrito de agravios se plasma la imagen del oficio **0018-I-Ene-2019**, de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, signado por el Contador Público [REDACTED] su carácter de Tesorero Municipal).

Asimismo, se desprende la existencia de un segundo disco compacto, el cual contiene un

⁶⁸ Fojas 799 a 822 del expediente de origen.

⁶⁹ Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, con número de registro 164618.

listado con la información de la cuentas requeridas y cobradas por dicho prestador de servicios, mismo que se menciona en las fojas 279, 280, 281, 282 y 283, por lo que resulta indispensable exponer el contenido de la foja 283. (Al efecto en el escrito de agravios se plasma la imagen del acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictado por la Autoridad Investigadora).

Igualmente, el responsable alude como hecho notorio lo resuelto dentro del expediente RR-08/2019, del índice de este tribunal, sin especificar que parte o relación de la resolución.

Agravios de [REDACTED] cuales resultan infundados.

Lo infundado de los agravios expresados por el responsable recaen en el sentido de que si bien refirió la causal de improcedencia y de sobreseimiento que supuestamente en el caso se actualizan, en el caso dijo los artículos 236, Fracción IV y 237 fracciones I y III, último párrafo, de la Ley Estatal de Responsabilidades que estipulan:

"Artículo 236.- Son causas de improcedencia del procedimiento de responsabilidad administrativa, las siguientes:

(...)

IV.- Cuando de los hechos que se refieran en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, no se advierta la comisión de Faltos administrativas; y..."

"Artículo 237.- Procederá el sobreseimiento en las causas siguientes:

I.- Cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las causas de improcedencia previstas en esta Ley;

(...)

Quando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a la Autoridad substanciadora o resolutora, según corresponda, y de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten."

Empero, el responsable únicamente hizo alusión a la existencia de los discos compactos que supuestamente contienen listados con la información de la cuentas requeridas y cobradas por la empresa [REDACTED] cuales no resultan idóneos ni eficaces para destruir el cúmulo probatorio aportado por la Autoridad Investigadora, y que pongan en evidencia que en el caso del Informe de Presunta Responsabilidad no se advierte la comisión de la falta administrativa grave imputada.

Esto es así, ya que los discos compactos que dice el responsable contienen "información de relación de los nombres de las compañías deudoras de predial que fueron requeridos por ellos y los montos pagados o ellos por dichos trámites de cobro" y "un listado con la información de la cuentas requeridas y cobradas por dicho prestador de servicios"; cabe señalar que éstos no se encuentran corroborados con archivos físicos ni expedientes que acrediten que se realizaron efectivamente las gestiones de cobranza por parte de la mencionada empresa, por lo que éstos no resultan eficaces para destruir el cúmulo probatorio existente en su contra.



Lo anterior, tal como se advierte del oficio **0018-I-Ene-2019**, de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, signado por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal, en el que el indicado Tesorero Municipal informó que *“...realizando una minuciosa revisión en los controles y archivos de esta tesorería municipal dentro del departamento de ejecución fiscal **no se encontraron archivos en físico o expedientes de los casos de los cuales ellos requerían...**”*; de lo que se colige que de existir el referido listado en el disco compacto que el mismo oficio advierte y que se menciona en el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, éstos no se encuentran debidamente corroborados con archivos físicos ni expedientes, por lo que éstos no resultan eficaces para destruir el cúmulo probatorio existente en su contra.

De igual forma, como se advierte del oficio **341CCMC-2018**⁷⁰ de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en el que, en el apartado de observaciones con posible daño patrimonial, en la número dos, se desprende lo siguiente:

*“De la revisión del seguimiento presupuestal del gastos correspondiente a la dependencia de la Tesorería Municipal, en lo general se observa buen comportamiento presupuestal del gasto, a excepción del gasto efectuado, en el capítulo de servicios generales en la partida 34201, por servicios de cobranza, investigación crediticia y similar, lo cual releja un excedente presupuestal al 31 de agosto de 2018, por la cantidad de \$ 2,273,212.30, en el presupuesto de la unidad administrativa de la dirección de ingresos, mismo que al analizar los registros analíticos del gasto, el importe excedido, se refleja en el pago a un prestador de servicios DE FORMA INUCUAL, denominación [REDACTED], lo anterior debido a que en el ejercicio fiscal se le efectuaron pagos, por la cantidad de \$3,491,118.16, resulta relevante que dichos pagos acumulados antes señalados, se aplicaron de la fecha 06 de julio al 15 de septiembre de 2018, un total de 23 pagos consecutivos de facturas, con un importe total \$3,075,649.38, lo que representa el 88% de los pagos totales efectuados sobre su facturación total en los últimos meses. Así mismo **no se encontró evidencia o soporte documental en original de sus servicios prestados, y que se relacionaran en específico, en la carpeta de entrega recepción, y al hacer una revisión exhaustiva en el clausulado del contrato, se observa que no se cumplieron en totalidad de las cláusulas del servicio, por lo que se presume un posible daño patrimonial sobre los servicios pactados y cobrados, pues resultan documentalmente sus servicios no acreditados y los procesos jurídicos mal practicados, así como incompatibilidad entre las fechas de pago de los contribuyentes, la facturación de servicios prestada y las fechas de pago efectuadas por la Tesorería Municipal.**”*

Aunado al contenido del oficio **047-E-2019**⁷¹ de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, por medio del cual remitió los **Auxiliares de Cuentas** correspondientes al periodo del uno de julio al quince de septiembre de dos mil dieciocho, de las que se desprenden que fueron pagadas **veintidós pólizas** expedidas por el Municipio a través de la Tesorería Municipal, las cuales en conjunto arrojan una cantidad total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos

⁷⁰ Fojas 2 a 48 del expediente de origen.

⁷¹ Fojas 54 a 259 del expediente de origen.

setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), a favor de la empresa [REDACTED] sin que del mismo se advierta soporte documental de las gestiones de cobro de la mencionada empresa, como tampoco los informes mensuales que en su caso debió ésta exhibir ante ese responsable como Tesorero Municipal; ni los registros de control por parte del responsable como Tesorero Municipal.

Por lo que en el caso, el contenido de los mencionados discos compactos que menciona el responsable, no tienen la idoneidad ni la eficacia probatoria para contradecir los medios probatorios aportados por la Autoridad Investigadora, los cuales ponen en evidencia la existencia de la falta administrativa grave de **DESVÍO DE RECURSOS** así como la responsabilidad administrativa de [REDACTED] su comisión.

Y en ese sentido, en el caso no se actualizan las causales de improcedencia y de sobreseimiento expresadas por el mencionado agraviado, ni ninguna otra, de ahí lo infundado de lo manifestado por el ex servidor público aquí responsable.

Por otro lado, cabe advertir que el resto de las agravios vertidos por [REDACTED] en su escrito presentado ante la Autoridad Substanciadora, en su comparecencia a la celebración de la Audiencia Inicial desahogada el trece de octubre de dos mil veinte, consistentes en "**CONTESTACIÓN DE IMPUTACIONES**" éstos por una parte devienen inoperantes, por otra infundados y por otro lado fundados pero insuficientes para revertir el sentido del presente fallo.

En esa tesitura resultan **inoperantes** los agravios **PRIMERO, TERCERO, SÉPTIMO, NOVENO** expresados por el responsable.

En relación al agravio **PRIMERO** el responsable hace mención del oficio **OCEGN1-G2387/18⁷²** de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por el licenciado Luis Óscar Ruiz Benítez, por medio del cual se turnó el diverso oficio **341-CCMC-2018**, de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, asimismo, se anexan diversas documentales.

Al efecto, el responsable alude que las documentales anexas al citado oficio son pruebas inexactas e ilegales, en razón de que de las mismas constan de cuarenta y seis fojas y en certificación contenida en la foja 49 del expediente, indica que el documento consta de cuarenta y cinco fojas útiles.

Asimismo, expresa que el mencionado oficio **OCEGN1-G2387/18** fue elaborado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se hace referencia al diverso oficio firmado por el Tesorero Municipal y anexos consistentes en cuarenta y seis fojas certificadas, pero en la foja 50 del expediente se encuentra diversa certificación que habla de cuarenta y seis fojas, pero ésta fue elaborada el once de abril de dos mil diecinueve, quedando en evidencia la manipulación del expediente.

⁷² Foja 1 del expediente de origen.



Por otro lado, el responsable en su agravio **TERCERO** alude que el oficio **OCEGN27-G13/19** fue dirigido a dos autoridades distintas, a saber al Tesorero Municipal y al Oficial Mayor.

En otro rubro, el responsable en su agravio **SÉPTIMO** dice que es prueba ilícita el oficio **OM/071/2019** signado por el Oficial Mayor, en virtud de que el mencionado oficio tiene fecha de elaboración de trece de marzo de dos mil diecinueve y el sello de recibido por parte del Órgano de Control es de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve.

En otro contexto, en su agravio **NOVENO** realiza manifestaciones en relación a las declaraciones a cargo de las empresas [REDACTED] [REDACTED] así como escrito signado por Manuel Rosas López, de BBVA Bancomer; en las que de manera general dice que dichas declaraciones y escrito no son suficientes para determinar algún tipo de falta administrativa, sin explicar por qué lo considera así, ni aportar medio probatorio que las contradiga o destruya.

Lo **inoperante** de los citados agravios radica en que el responsable únicamente hace manifestaciones en relación a las fojas y certificaciones de las documentales que fueron allegadas a la Autoridad Investigadora, mediante el citado oficio **OCEGN1-G2387/18** de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por el licenciado Luis Óscar Ruiz Benítez, destacando formalismos que no invalidan el contenido del referido oficio y las documentales que se anexan al mismo; pues suponiendo sin conceder que el conteo de las documentales fuere erróneo, ello no les resta valor probatorio al contenido de las probanzas.

Por otro lado, en relación al oficio **OCEGN27-G13/19** a éste no le resta valor que ese número hubiere sido plasmado en dos oficios distintos, dirigidos a dos autoridades distintas, pues tales aspectos que son meramente formales y de carácter administrativo para el control de los oficios y promociones del organismo; sin que tal circunstancia invalide su contenido.

En otro rubro, en relación a las manifestaciones relativas al oficio **OM/071/2019**, cabe destacar que la fecha de recepción de los oficios correspondientes atienden a la fecha que constan en el sello de recibido por parte de la autoridad que los recibe, no así a la fecha que se plasma en el oficio que se recibe, pues en ocasiones los oficios son elaborados previamente para su debida presentación, por lo que pueden ocurrir errores en las fechas que se detallan en el contenido del libelo. Sin que ello demerite su contenido o su eficacia.

Y en relación a las manifestaciones a cargo de las empresas [REDACTED] [REDACTED] así como escrito signado por [REDACTED] [REDACTED] de BBVA Bancomer; es preciso señalar que el responsable refiere de manera general que dichas declaraciones y escrito no son suficientes para determinar algún tipo de falta administrativa, pero no expresa un razonamiento lógico jurídico por el cual lo considera así, ni aportar medio probatorio que las contradiga o destruya.

En ese sentido, el responsable esgrime argumentos orientados a combatir aspectos de formalidades susceptibles de subsanar sin que ello afecte en la eficacia o idoneidad de las pruebas, y no hace manifestaciones tendentes a desvirtuar el alcance y valor probatorio del contenido de los medios probatorios en comento.

En las relatadas condiciones, de los agravios expresados no se advierten argumentos que pongan de manifiesto la ilegalidad de las pruebas reseñadas y únicamente se desprenden aseveraciones sin sustento jurídico ni probatorio; y algunos ni siquiera son tendentes a combatir los medios probatorios aportados en su contra.

En esa tesitura, es importante destacar que los agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados con los hechos y medios probatorios existentes en el expediente, debiéndose en los mismos exponer, razonadamente, por qué se estima que esos medios probatorios le causan agravio o por qué éstos no se encuentran debidamente fundados y motivados u otras razones por las cuales considera que éstos carecen de legalidad o validez, ya que de no ser así sus pretensiones resultarían inatendibles, es decir, en el asunto que en la especie nos ocupa, el agraviado actor tiene la carga de lograr construir y proponer a esta Sala Especializada su causa de pedir.

Al respecto el Poder Judicial de la Federación ha establecido que trasladado al campo judicial, en específico, a los agravios un verdadero razonamiento, se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta de derecho, a través de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable, y la propuesta de solución o conclusión de la situación.⁷³

Por lo tanto, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el agraviado realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que la resolución que recurre resulta ilegal.

Pues, como se advierte claramente, el responsable elude referirse a las razones y el porqué de su reclamación, ya que se debe de entender que en esta instancia jurisdiccional los argumentos que se expresen en su escrito de agravios, invariablemente, deben estar dirigidos a evidenciar y descalificar el valor o la ilegalidad de los hechos y los medios probatorios aportados por la Autoridad Investigadora, lo que en la especie no ocurre, ya que el responsable como ha quedado establecido se limita a realizar afirmaciones generales e imprecisas, eludiendo su obligación de combatir las consideraciones específicas en que se sustenta su agravio.

En ese sentido, el responsable realiza afirmaciones sin sustento, relativas a meros formalismos, es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado. De ahí lo inoperante de sus agravios.

⁷³ Época: Décima Época, Registro: 2008903, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: (V Región)2o.1 K (10a.), Página: 1699.



Como apoyo a lo antes descrito, se encuentra la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese lo causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, a bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en las supuestas legules de suplencia de la queja) exponer rozonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no otacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.⁷⁴

Así como la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, cuyo criterio se comparte, de título y contenido subsecuente:

CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con lo conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésto se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, rozonadamente, por qué estiman inconstitucionales a ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de los premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a lo mínima necesidad de explicar por qué a cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Par consiguiente, en las asuntos que se rigen par el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea doble entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésto se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de mado que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de la contrario, de anolizar alguna oseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos

⁷⁴ Tesis: 1a./J. 81/2002 consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61, registro digital: 18S425.

no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en las que dicha figura está vedada.⁷⁵

Y, la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte, el cual de rubro y texto siguientes:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. *Los actos de autoridad y las sentencias están investidas de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanta, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inotendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias a argumentas y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendida y las razones apartadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para calegir y concluir lo pedida. Por consiguiente, las argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en las agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.⁷⁶*

En otro contexto, resulta **infundados** los agravios **CUARTO, QUINTO, SEXTO, DÉCIMO y DÉCIMO PRIMERO.**

En su agravio **CUARTO**, el responsable hace relación al oficio **OM/003/2019** de fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Contador Público Ignacio Sepúlveda Valenzuela, en su carácter de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, dirigido al licenciado Luis Ósar Ruiz Benítez, titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Nogales, Sonora.

Al respecto, el responsable asevera que dicho oficio se encuentra dirigido al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Nogales, Sonora y que aquél fue acordado por el licenciado Isaac Madrigal Godínez, Encargado de Unidad de Investigación adscrito al aludido Órgano de Control; con lo que se conculcó en su perjuicio el debido proceso y certeza jurídica, así como sus derechos humanos.

Lo infundado del referido agravio estriba en que, tal como lo manifestó la Autoridad Investigadora en su escrito de contestación, el citado oficio **OM/003/2019** fue emitido por el Contador Público Ignacio Sepúlveda Valenzuela, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en respuesta al diverso oficio **OCEGN27/19⁷⁷** de fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por el licenciado Isaac Madrigal Godínez, Encargado de Unidad de Investigación adscrito al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Nogales, Sonora.

⁷⁵ Tesis: (V Región)2o. J/1 (10a.) visible en la página 1683, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su Décima Época, con número de registro: 2010038.

⁷⁶ Tesis: I.4o.A. J/48 consultable en la página 2121, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, con número de registro digital: 173593.

⁷⁷ Foja 52 del expediente de origen.



Y que, si bien el oficio objetado fue dirigido al licenciado Luis Ósar Ruiz Benítez, en su carácter de titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Nogales, Sonora, sin embargo, lo cierto es que ello se debió a un error meramente formal de la parte remitente.

En ese orden de ideas, cuando se trate de un error meramente formal en cualquier promoción, la autoridad que la recibe, a efecto de subsanar el error, debe atender a los datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden.

Motivo por el cual, atendiendo al contenido y los antecedentes del multicitado oficio **OM/003/2019**, de los que se desprenden que la información plasmada en el mismo fue solicitada al Oficial Mayor del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, mediante el oficio mencionado **OCEGN27/19**, por el licenciado Isaac Madrigal Godínez, Encargado de Unidad de Investigación adscrito al referido Órgano de Control; es por ello que el oficio objetado fue turnado a la referida Autoridad Investigadora para que acordara lo correspondiente.

Sin que ello, resulte una transgresión a los derechos humanos del aquí responsable como tampoco a los principios del debido proceso y certeza jurídica; pues el oficio combatido fue turnado a la autoridad a la que le correspondía acordar respecto a su contenido, en el caso, a la Autoridad Investigadora.

Sirve de apoyo a lo anotado la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. *Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicha expediente, lo cierto es que para ella no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a las demás datos que se indican en tales promociones, las cuales se encuentran registrados en las libras que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden.*⁷⁸

Por otra parte, en los agravios **QUINTO** y **SEXTO** en los que el responsable realiza manifestaciones en relación a los oficios **018-I-Ene-2019** de fecha veintinueve de enero de 2019, y **022-I-2019** de fecha once de febrero de dos mil diecinueve, ambos suscritos por el C.P. Carlos Castro Martín del Campo, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora y dirigido al licenciado Isaac Madrigal Godínez, encargado de la Unidad

⁷⁸ Tesis: 1a./J. 3/2004 consultable en la página 264, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Marzo de 2004, Novena Época, con número de registro: 181893.

de Investigación adscrito al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del municipio de Nogales, Sonora; de los que se advierte que fue anexo un "CD" con la información en relación de los nombres de las compañías deudoras de predial que fueron requeridos por el prestador de servicios "Soluciones Legales Lomelí SC" y los montos pagados a ellos por dichos trámites de cobro.

Discos compactos que aduce el responsable, no se encuentra agregado al expediente.

Al respecto, cabe señalar que el disco compacto anexo al aludido oficio **018-I-Ene-2019** sí se encuentra agregado en el expediente E.I. 28/018, entre las fojas 575 y 576, dentro de un sobre con la leyenda "DISCO 1".

Por lo que, dicha prueba se encuentra recabada y ofrecida conforme a derecho, pues la misma fue solicitada de manera lícita por la Autoridad Investigadora, mediante el oficio **OCEGN28-G272/19**⁷⁹, de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve; asimismo, fue ofrecida en el IPRA, conforme a lo dispuesto en el artículo 234, fracción VII, de la Ley Estatal de Responsabilidades.

En otro rubro, en lo que respecta al diverso disco que dice fue anexo al mencionado oficio **022-I-2019**, cabe señalar que éste se encontraba en blanco (sin contenido), tal como lo advirtió la Autoridad Investigadora y acordó en proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.

Por otro lado, tal como se advierte del oficio **0018-I-Ene-2019**, de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, signado por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal, en el que el indicado Tesorero Municipal informó que "...realizando una minuciosa revisión en los controles y archivos de esta tesorería municipal dentro del departamento de ejecución fiscal no se encontraron archivos en físico o expedientes de los casos de los cuales ellos requerían..."; de lo que se colige que de existir el referido listado en el disco compacto que el mismo oficio advierte, éstos no se encuentran debidamente corroborados con archivos físicos ni expedientes, por lo que éstos no resultan eficaces para destruir el cúmulo probatorio existente en su contra.

Por otra parte, en su agravio DÉCIMO el responsable hace referencia al oficio **OCEGN32-G989/2020** de fecha uno de abril de dos mil veinte, suscrito por la Autoridad Investigadora, dirigido a la licenciada Ofelia Guadalupe López Chao, Coordinadora de Recursos Humanos y al acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veinte, emitido por la Autoridad Sustanciadora, en el que se estableció la suspensión de las actuaciones, plazos jurisdiccionales, actividades administrativas, sesiones públicas, diligencias presenciales de carácter jurisdiccional y términos del Órgano de Control, hasta el día veinte de abril de dos mil veinte.

⁷⁹ Foja 274 del expediente de origen.



En ese sentido, el responsable dice que en virtud de la suspensión decretada en el citado acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Autoridad Investigadora no debió emitir el referido oficio **OCEGN32-G989/2020** y que por tanto éste es ilegal.

Al respecto, cabe destacar que la suspensión de labores establecida en el acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veinte, emitido por la Autoridad Sustanciadora, que si bien se estableció la suspensión de actuaciones, plazos jurisdiccionales, actividades administrativas, sesiones públicas, diligencias presenciales de carácter jurisdiccional, plazos y términos del Órgano de Control, en el que se incluyeron las Coordinaciones de Investigación y Sustanciación y resolución; lo cierto es que también se estableció que el plazo comprendido entre el veinte marzo y veinte de abril de dos mil veinte serían considerados inhábiles pero laborables.

En esa tesitura, la Autoridad Investigadora podía seguir laborando en sus actividades de investigación, tal como lo hizo con el mencionado oficio **OCEGN32-G989/2020**, con el que, ente otras cosas, solicitó el nombramiento de [REDACTED] considere ilegal, sin que el citado oficio contuviera algún requerimiento para el aquí responsable o que debido a este oficio, el responsable tuviera que haber ejercido algún derecho en el citado plazo de suspensión; destacándose que el referido responsable fue emplazado con la totalidad de las actuaciones del expediente, sin que se le hubiere transgredido algún derecho que debió haber ejercido en ese plazo. De ahí lo infundado de su agravio.

En otro contexto, en su agravio **DÉCIMO PRIMERO** el responsable manifiesta que el IPRA no cumple con el requisito establecido en el artículo 234, fracción VI, de la Ley Estatal de Responsabilidades, el cual establece:

*"Artículo 234.- El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será emitida por las Autoridades investigadoras, el cual deberá contener las siguientes elementas:
(...)*

V.- La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta Falta administrativa;

VI.- La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando, bajo el principio de razonabilidad, los motivos por los que se considera que ha cometido la falta y se ha cumplido con las disposiciones contenidas en el artículo 130 de esta Ley;..."

Asimismo, expresa que la Autoridad Investigadora no dio cumplimiento a los principios establecidos en el artículo 130 de la Ley Estatal de Responsabilidades, que dice:

"Artículo 130.- En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de debido proceso, imparcialidad, objetividad, congruencia, tipicidad, verdad material y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de las datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto.

Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales.

Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de

investigación, compartir las mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción.”

Al efecto, el responsable aduce que la Autoridad Investigadora sólo se remitió a realizar una serie de manifestaciones por demás vagas y fuera de todo razonamiento lógico-jurídico, para considerarlo como presunto infractor y determinar remitir el IPRA a la Autoridad Sustanciadora, para el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa.

Asimismo, dice el responsable que la Autoridad Investigadora, para poder arribar a la conclusión de que la falta administrativa cometida es de las consideradas como “graves”, y que para poder arribar a tal conclusión la citada autoridad debió realizar todas las diligencias necesarias para poder establecer la gravedad del asunto y a su vez cumplir con lo establecido en los artículos 130 y 234, fracciones V y VI.

Luego entonces, continúa el agraviado, la Autoridad Investigadora realizó la calificación de las conductas sin realizar el debido razonamiento lógico jurídico por medio del cual arribara a la determinación de la comisión de la falta administrativa grave, únicamente se concreta a exponer lo que establece el artículo 93 de la Ley Estatal de Responsabilidades y narrar en forma inverosímil un sin número de facturas, violando flagrantemente la narración lógica y cronológica, el principio de razonabilidad y de tipicidad.

Bajo ese panorama, refiere el responsable, la Autoridad Investigadora omitió realizar su determinación punitiva conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Estatal de Responsabilidades.

Igualmente, aduce que el IPRA se encuentra falto de un razonamiento lógico jurídico por medio del cual la Autoridad Investigadora arribe a la normatividad aplicable, situación que en la especie no aconteció, ya que como se aprecia de lo transcrito en líneas anteriores (en el escrito se encuentra subrayada parte de la jurisprudencia con número de registro 174326 de rubro *“TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.”*) y que conforma la imputación directa de la autoridad solo se desprende la transcripción de argumentos inexactos.

De igual forma, continua expresando el responsable que la Autoridad Investigadora debió motivar la imputación directa del supuesto desvío de recursos públicos realizado, pues a su decir la citada autoridad no expone el proceso o los pasos a seguir para determinar qué el dinero desviado es recurso público o en su defecto actuó en contraposición a las normas aplicables o por qué medio determinó dicho desvío y que solamente se enfoca en mencionar que se incumple con el artículo 93 de la Ley Estatal de Responsabilidades, limitándose a realizar eras afirmaciones sin la debida fundamentación y motivación, dejándolo en estado de indefensión.

Concluyendo el responsable que la falta de precisión y claridad en la imputación que se realiza en su contra, carece de la debida integración y comprobación, quedando en simples aseveraciones sin sustento jurídico, al no cumplir con los principios de debido



proceso y tipicidad en la conducta, violándose los derechos humanos, el debido proceso, legalidad, principio de razonabilidad, de tipicidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política Mexicana.

Resultan **infundados** lo anteriores motivos de disenso, toda vez que contrariamente a lo manifestado por el responsable, el IPRA sí cumple con los requisitos establecidos en el artículo 234, fracciones V y VI, de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Esto es así, ya que como se puede apreciar del referido informe, en éste se expresa la narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta Falta administrativa, pues al efecto la Autoridad Investigadora especificó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los hechos; asimismo, se advierte la infracción que se imputa al aquí responsable, dándose cumplimiento a los principios señalados en el artículo 130.

Al respecto, del IPRA se advierte que la infracción que se imputa es la falta administrativa grave **DESVÍO DE RECURSOS** prevista en el artículo 93 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en la hipótesis *"el servidor público que autorice actos para la asignación de recursos públicos financieros en contraposición a las normas aplicables"*.

Asimismo, se expresa que el aquí responsable en su carácter de Tesorero Municipal, entre el el seis de julio y el quince de dos mil dieciocho, autorizó la asignación recursos públicos financieros por la cantidad total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), a favor de la empresa [REDACTED]; lo anterior, en contraposición a las normas aplicables.

Además, se encuentra la relación de cada una de las órdenes de pago que el responsable autorizó, así como de las pólizas que se emitieron en consecuencia, además de las facturas que la empresa aquí responsable exhibió ante esa Tesorería para su cobro con motivo de las supuestas gestiones de cobranza, y de las que se encuentran agregadas al expediente.

Además, la Autoridad Investigadora explicó cómo es que el aquí responsable en su carácter de Tesorero Municipal incumplió con sus obligaciones derivadas del contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018** de prestación de servicios por honorarios profesionales, celebrado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, entre el Ayuntamiento y la empresa [REDACTED]

Aunado a lo anterior, los argumentos y fundamentos expresados en el IPRA por la Autoridad Investigadora, éstos se encuentran soportados con medios probatorios que acreditan la existencia de la falta grave de **DESVÍO DE RECURSOS** y la responsabilidad de [REDACTED] su comisión.

Lo anterior, de acuerdo a los razonamientos que fueron expresados en el apartado 5.1. de esta resolución, a los cuales nos remitimos a fin de no incurrir en innecesarias repeticiones.

Sin que en el caso este tribunal advierta que se hubieren violentado en contra del aquí responsable sus derechos humanos, el debido proceso, legalidad, principio de razonabilidad, de tipicidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política Mexicana, como erróneamente lo asevera sin sustento y sin soporte probatorio en su escrito de agravios.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que la Autoridad Investigadora realizó argumentos lógico jurídicos debidamente soportados con medios probatorios de los que se advierte la existencia de la falta administrativa grave atribuida así como la responsabilidad administrativa del aquí responsable, sin que al efecto este último los hubiere combatido debidamente.

Destacándose que el aquí responsable fue totalmente omiso en ofrecer probanzas que pusieran en evidencia que las órdenes de pago que autorizó para la asignación de recursos financieros a favor de la empresa aquí responsable, sí se encontraban debidamente soportadas, que sí existían los informes mensuales relativos a las gestiones de cobranza supuestamente realizados por la empresa la empresa [REDACTED] [REDACTED] que no existió la falta administrativa imputada o que no se acreditara su responsabilidad administrativa en su comisión.

Circunstancia que a él le correspondía probar, pues si bien de acuerdo al principio de presunción de inocencia la carga de la prueba en cuanto a la acreditación de la existencia de la falta administrativa y la responsabilidad del presunto infractor, le corresponde a la Autoridad Investigadora, empero cabe destacar que la citada autoridad cumplió con esa carga, pues de acuerdo a los medios de prueba ofrecidos por la Autoridad Investigadora se advierten informes y otras probanzas que ponen en evidencia que no existían informes, documentos, archivos o expedientes físicos que soportaran la autorización de los recurso públicos financieros por el aquí responsable aquí asignados; sin que este último destruyera el material probatorio allegado al expediente, pues únicamente se limitó a realizar manifestaciones sin sustento probatorio.

Por otro lado, los agravios **SEGUNDO** y **OCTAVO** resultan **fundados pero insuficientes** para trascender en el sentido del presente fallo.

Pues si bien como lo menciona el responsable en su agravio **SEGUNDO**, el aludido acuerdo emitido por la Autoridad Investigadora tiene una fecha en la "cuenta" diversa a la data del "acuerdo", sin embargo, lo cierto es que tal circunstancia no invalida el auto emitido, pues en todo caso debe atenderse a la fecha en que dice se acordó lo conducente, es decir a la fecha de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, y que si bien tiene errores de redacción, los mismos son subsanables y no son motivo de invalidez del citado proveído; pues la fecha en que se hubiere emitido el acuerdo, sea al día catorce o diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, esto en nada transgrede los derechos fundamentales del aquí responsable.

Por otro lado, en el agravio **OCTAVO** en lo que respecta a la comparecencia de [REDACTED] [REDACTED], se confiere la razón al responsable en el sentido de que el compareciente no acreditó su personalidad ni representación de la empresa [REDACTED]



[REDACTED] por tanto, el citado medio probatorio no tiene la eficacia para tener por demostrado que esa mora no fue requerida por la empresa [REDACTED]

Sin embargo, dicha circunstancia resulta insuficiente para revertir el sentido del presente fallo, toda vez que la citada prueba no fue contemplada por este tribunal para tener por acreditada la existencia la falta administrativa de **DESVÍO DE RECURSOS** así como la responsabilidad administrativa de [REDACTED]

Bajo ese contexto, ante lo infundado, inoperante e insuficiencia de los agravios vertidos por el aquí responsable y, al encontrarse demostrados los elementos de la falta administrativa grave **DESVÍO DE RECURSOS** prevista en el artículo 93 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en la hipótesis *"el servidor público que autorice actos para la asignación de recursos públicos financieros en contraposición a las normas aplicables"*; así como la responsabilidad administrativa del entonces servidor público **LUIS GERARDO OLIVAS DÍAZ** en su comisión, lo procedente es dictar **SENTENCIA DE CONDENA** en su contra.

6.2. Análisis de la responsabilidad administrativa de la particular [REDACTED]

Se encuentra acreditada en autos la responsabilidad administrativa de la particular [REDACTED] en la comisión de la falta administrativa de particular **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA** prevista en el artículo 109 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en la hipótesis *"el particular que simule el cumplimiento de requisitos establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr un beneficio"*.

Falta administrativa cometida por la mencionada particular a través de su representante legal [REDACTED] de manera dolosa, en razón de que los medios de prueba analizados y valorados en el apartado que antecede, se aprecia que la infractora de la Ley Estatal de Responsabilidades conocía los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho, y aún así quiso su resultado.

Es decir, entre el seis de julio y el quince de septiembre de dos mil dieciocho, la particular [REDACTED] en su carácter de prestador de servicios del Ayuntamiento, **simuló el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo estipulado en la cláusula quinta, puntos uno, dos y siete, del contrato número O.M.-C.P.S.H.-002/2018 de prestación de servicios por honorarios profesionales, celebrado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, entre el Ayuntamiento y la empresa [REDACTED]; lo anterior, con el propósito de obtener el beneficio económico por la cantidad de \$2,974,347.80 (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional).**

Con lo cual se puso en peligro el bien jurídico tutelado que es la debida administración pública y el patrimonio del Municipio de Nogales, Sonora.

Falta administrativa que se acredita en forma dolosa.

Para concluir en la forma que antecede, debe tomarse en consideración fundamentalmente el contenido y alcance probatorio del informe de presuntas irregularidades detectadas en los procesos de entrega-recepción de la Tesorería Municipal, remitido mediante oficio **341CCMC-2018**⁸⁰ de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora.

Informe del cual, en el apartado de observaciones con posible daño patrimonial, en la número dos, se desprende lo siguiente:

“De la revisión del seguimiento presupuestal del gastos correspondiente a la dependencia de la Tesorería Municipal, en lo general se observa buen comportamiento presupuestal del gasto, a excepción del gasto efectuado, en el capítulo de servicios generales en la partida 34201, por servicios de cobranza, investigación crediticia y similar, la cual releja un excedente presupuestal al 31 de agosto de 2018, por la cantidad de \$ 2,273,212.30, en el presupuesto de la unidad administrativa de la dirección de ingresos, mismo que al analizar los registros analíticos del gasto, el importe excedido, se refleja en el pago a un prestador de servicios DE FORMA INUCUAL, denominación LEGAL [REDACTED] lo anterior debida a que en el ejercicio fiscal se le efectuaron pagos, por la cantidad de \$3,491,118.16, resulta relevante que dichos pagos acumulados antes señalados, se aplicaron de la fecha 06 de julio al 15 de septiembre de 2018, un total de 23 pagos consecutivos de facturas, con un importe total \$3,075,649.38, lo que representa el 88% de los pagos totales efectuados sobre su facturación total en los últimos meses. Así misma no se encontró evidencia o soporte documental en original de sus servicios prestados, y que se relacionaran en específico, en la carpeta de entrega recepción, y al hacer una revisión exhaustiva en el clausulado del contrato, se observa que no se cumplieron en totalidad de las cláusulas del servicio, por lo que se presume un posible daño patrimonial sobre los servicios pactados y cobrados, pues resultan documentalmente sus servicios no acreditados y los procesos jurídicos mal practicados, así como incompatibilidad entre las fechas de pago de los contribuyentes, la facturación de servicios prestada y las fechas de pago efectuadas por la Tesorería Municipal.

De igual forma, se tiene el oficio **047-E-2019**⁸¹ de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, por medio del cual remitió los Auxiliares de Cuentas correspondientes al periodo del uno de julio al quince de septiembre de dos mil dieciocho, de las que se desprenden que fueron pagadas **veintidós pólizas** expedidas por el Municipio a través de la Tesorería Municipal, las cuales en conjunto arrojan una cantidad total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), a favor de la empresa [REDACTED]

Aunado a lo anterior, remitió copia certificada de las referidas **veintidós pólizas** contables de los pagos realizados a [REDACTED] por un total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), durante el periodo de

⁸⁰ Fojas 2 a 48 del expediente de origen.

⁸¹ Fojas 54 a 259 del expediente de origen.















TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

julio a septiembre de dos mil dieciocho, con su respectivo soporte, entre el cual se encuentran **veintidós órdenes de pago** expedidas a favor de la mencionada moral, de las que se advierte que éstas fueron autorizadas por [REDACTED] en su carácter de Tesorero Municipal; **veintidós impresiones de internet de las transferencias electrónicas bancarias** correspondientes a cada una de las mencionadas pólizas, relativas a la cuenta de retiro número 0105670721, del banco BBVA Bancomer, en la que aparece como titular el Municipio de Nogales, Sonora y como cuenta de depósito número 195013828 a nombre de [REDACTED] así como las facturas y órdenes de compra relativas, de acuerdo al cuadro siguiente:

No. DE PÓLIZA	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	No. DE REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA	FECHA	CANTIDAD	CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO	PERSONA QUE AUTORIZÓ LA ORDEN DE PAGO
1	C9216218. FACT. C9216218. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PEDIALES	132320180761702420022774030	06/07/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PEDIALES	[REDACTED]
2	C0462D. FACT. 7D54792F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PEDIALES	1323201807131539060069183D24	13/07/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PEDIALES	[REDACTED]
3	C04822. FACT. 2FA9CCD. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PEDIALES	1323201807191408190021427254	19/07/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PEDIALES	[REDACTED]
4	C04823. FACT. E9AF1F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PEDIALES	132320180719140953002142727D	19/07/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PEDIALES	[REDACTED]
5	C04997. FACT. ACE19EB5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA DE PEDIALES	132320180806152B480028208D76	06/08/2018	\$116,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PEDIALES	[REDACTED]
6	C05391. ABONO FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	1323201808211656000026732172	21/08/2018	\$97,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL [REDACTED]	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
7	C05429. LIQ. FACT. 3DA34E75. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP [REDACTED]	1323201808221654540011022091	22/08/2018	\$193,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR COBRO DE CUENTA PREDIAL [REDACTED]	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
8	C05510. ABONO FACTS. AD29B312; 6954B37E; B87E1DD7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A. GP [REDACTED]	1323201808241633420077836353	24/08/2018	\$200,000.00	HONORARIOS POR COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL FACTURAS AD29B312; 6954B37E; B87E1DD7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]

9	C06029	LIQ. FACTS. AD29B312; 6954B37E; B87E10D7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A. GP 	I323201808311723160075185036	31/08/2018	\$173,520.00	HONORARIOS POR COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL FACTURAS AD29B312; 6954B37E; B87E10D7; 30E34232; 97654FA7; 8E9DA28A; A1D4788A	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE 
10	C06119	FACT. 2D51FC1F. PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP 	I323201809041711570067538D58	04/09/2018	\$145,000.00	SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIAL	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE 
11	C06174	FACT. 3B855896 PRESTACIÓN DE SERVICIOS GP 	I323201809061720370039389D28	06/09/2018	\$145,000.00	SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIAL	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE 
12	C06295	SERVICIOS DE COBRANZA DE UN FACTURA FDC3B967. GP 	I323201809121658480092466205	12/09/2018	\$53,360.00	SERVICIOS DE COBRANZA	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE 
13	C06298	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 6BA62C58. GP 	I3232018091216595200924662D	12/09/2018	\$145,000.00	NO	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE 
14	C06299	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 4D91CC7E. GP 	I323201809121706270092466257	12/09/2018	\$145,000.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 4D91CC7E	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE 



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

15	C06300	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 4D91CC7E. GP [REDACTED]	I3232D1809121708110092466272	12/09/2018	\$145,000.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 4D91CC7E	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
16	CD63D1	SERVICIOS DE COBRANZA S/F 1D119A36. GP [REDACTED]	I3232D1809121709250092466287	12/09/2018	\$16,111.10	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA 1D119A36	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
17	C06401	SERVICIOS DE COBRANZA DE PREDIALES S/F 327C0EA7	I3232D1809141656040098248063	14/09/2018	\$174,000.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COBRANZA DE PREDIALES	ORDEN DE PAGO EN LA QUE SE OBSERVA EL NOMBRE DE LUIS GERARDO OLIVAS DÍAZ Y SU FIRMA ESTAMPADA EN EL APARTADO DEL NOMBRE DEL LICENCIADO [REDACTED]
18	C06427	FACT. 98AC828A. SERVICIOS DE COBRANZA GP [REDACTED]	I3232D1809141649570098248D44	14/09/2018	\$104,400.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]

19	C06428	FACT. 09967400. SERVICIOS DE COBRANZA GP [REDACTED]	I323201809141647370098248029	14/09/2018	\$156,600.00	SERVICIOS DE COBRANZA SEGÚN FACTURA	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
20	C06472	FACTS. 34C78DES; 0C8497C3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA GP [REDACTED]	I323201809151503310040448270	15/09/2018	\$183,993.78	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA 0C8497C3	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
21	C06473	FACT. A9F1F97A. PRESTACIÓN DE SERVICIOS (COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO GP [REDACTED]	I323201809151502090040448255	15/09/2018	\$152,772.99	SERVICIOS DE COBRANZA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]
22	C06474	FACTS. 87A12ACD; FC6D0C87. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL ME. GP [REDACTED]	I323201809151452340040448240	15/09/2018	\$164,589.93	SERVICIOS DE COBRANZA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	ORDEN DE PAGO SIN FILTRO, SIN NOMBRE, SÓLO SELLO DE TESORERÍA MUNICIPAL Y FIRMA DE [REDACTED]

TOTAL \$2,974,347.80

En adición, se encuentra el oficio **271-E-feb-2019**⁸², de fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, por medio del cual informó, entre otras cosas, que la cuenta utilizada para efectuar pagos a '[REDACTED]' en el periodo de julio a septiembre de dos mil dieciocho, es la cuenta [REDACTED] de BBVA Bancomer, CLA [REDACTED] a nombre del Municipio de Nogales, Sonora.

Además, se cuenta con copia certificada del contrato número **O.M.-C.P.S.H.-002/2018**⁸³

⁸² Foja 287 del expediente de origen.
⁸³ Fojas 262 a 272 del expediente de origen.



de prestación de servicios por honorarios profesionales, celebrado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, entre el Ayuntamiento y la empresa [REDACTED] (como prestador de servicios) cuyo **objeto** era la prestación oportuna, directamente, por cuenta y bajo responsabilidad de la indicada moral, del servicio de **cobranza extrajudicial y judicial para la recuperación de créditos fiscales y asesoría jurídica**; por el **plazo** del uno de enero a quince de septiembre de dos mil dieciocho.

Contrato de prestación de servicios del cual se advierte que de acuerdo a la **cláusula quinta, puntos uno, dos y siete**, la mencionada moral tenía las siguientes obligaciones:

- **Entregar en forma mensual al H Ayuntamiento a través de Tesorería Municipal todos los informes que requiera** este, con relación a todos aquellos aspectos que involucren el desarrollo de los efectos del presente instrumento.
- **Presentar cada mes un informe de la cobranza judicial o extrajudicial** realizada, especificando los montos recaudados por motivo de su gestión.
- **Proporcionar al Ayuntamiento los datos obtenidos en función de sus servicios**, ya sea a través de los medios magnéticos o bajo la forma que el Ayuntamiento y la particular como **Prestador de Servicios** determinaren de común acuerdo, asimismo, el envío de los documentos elaborados para la firma respectiva de los funcionarios del Ayuntamiento para efecto de la tramitación de los procedimientos.

Aunado a lo anterior, se tiene el oficio **018-I-Ene-2019⁸⁴**, de fecha veintinueve de enero de dos mil **diecinueve**, suscrito por el Contador Público Carlos Castro Martín del Campo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, mediante el cual informó que en los controles y archivos de esa Tesorería Municipal, no se encontraron archivos el físico o expedientes de los casos de los cuales requería el prestador de servicios [REDACTED]

Por otro lado, se cuenta con la comparecencia de [REDACTED] en su carácter de representante legal de la empresa "[REDACTED]" (que constituye una de las empresas supuestamente requeridas con gestiones de cobranza por la aquí particular), quien de manera general, a preguntas que le fueron formuladas por la Autoridad Investigadora, aquélla manifestó que esa empresa a la que representa no había sido visitada y/o requerida por la denominación [REDACTED]; que en el mes de junio recibió un requerimiento de pago de impuestos, pero desconocen quien los entregó; y que Alexis Desiré Valdez Zazueta, en su carácter de encargada de recursos humanos de la empresa a la que representa, acudió al municipio de Nogales, Sonora, a realizar un convenio de pagos de los

⁸⁴ Foja 275 del expediente de origen.

adeudos.⁸⁵

De igual forma, se encuentra el escrito de [REDACTED] representante legal de [REDACTED] constituye una de las empresas supuestamente requeridas con gestiones de cobranza por la aquí particular presunta responsable), quien en lo conducente hizo del conocimiento que no conoce o tiene trato alguno con la diversa moral [REDACTED] or lo tanto nunca ha sido objeto de cobranza ni ha sido requerida en forma alguna por ningún adeudo.⁸⁶

Asimismo, se tienen los informes emitidos por [REDACTED] en su carácter de Apoderado General para pleitos y Cobranzas y Actos de Administración de la empresa "[REDACTED]" mediante los cuales, en lo que interesa, únicamente reconoce el oficio de notificación, requerimiento, calificación y liquidación de crédito fiscal identificado con el folio REQ/OO1/MAYO/IMP-001⁸⁷ de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitido por [REDACTED] entonces Tesorero Municipal.

Los anteriores medios de prueba fueron valorados en el apartado 5.2. de esta resolución, por lo que nos remitimos a los razonamientos de valoración plasmados, a fin de no caer en repeticiones innecesarias, por lo que se reproducen como si a la letra se insertaran.

De ahí que las anteriores probanzas, apreciadas en su conjunto, resultan idóneas para acreditar la intervención de la empresa particular "[REDACTED]" por conducto de su representante legal [REDACTED] de manera directa en la conducta reprochada, pues ésta en su carácter de prestador de servicios del Ayuntamiento, **simuló el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo estipulado en la cláusula quinta, puntos uno, dos y siete, del contrato número O.M.-C.P.S.H.-002/2018 de prestación de servicios por honorarios profesionales, celebrado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, entre el Ayuntamiento y la empresa "[REDACTED]"; lo anterior, con el propósito de obtener el beneficio económico por la cantidad de \$2,974,347.80 (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional).**

Sin que en el caso se acreditara alguna causa de exclusión de la falta administrativa a favor de la mencionada particular, ni se probó en su beneficio alguna causa de justificación como son la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho, por lo que la referida conducta fue efectuada en contraposición a las normas aplicables al no existir constancia de que el servidor público se encontraba amparado en alguna de las mencionadas causas de justificación.

⁸⁵ Fojas 443 y 444 del expediente de origen.

⁸⁶ Fojas 468 y 469 del expediente de origen.

⁸⁷ Fojas 570 a 573 del expediente de origen.



Tampoco se probó que al consumarse aquel comportamiento, la particular no tenía la capacidad de comprender el carácter infractor de esos hechos, ni de conducirse de acuerdo a esa comprensión, menos aún se justificó la existencia de algún error de prohibición que le hiciera creer que su conducta era conforme a las normas aplicables.

Máxime que actuó dentro de un amplio margen de libertad, al no mediar coacción física o moral en su contra, exigiéndole por tanto un comportamiento diverso al realizado, es decir, ajustado a derecho, pues además la representante legal de la anotada empresa es mayor de dieciocho años y al momento de cometer la falta administrativa de referencia no se encontraba bajo los efectos de algún trastorno mental transitorio o padeciera desarrollo intelectual retardado; por ello, su comportamiento le es reprochable a título administrativo y se estima acreditada su responsabilidad.

En tales condiciones, quedó demostrado en autos la existencia de la falta administrativa de particular **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA** prevista en el artículo 109 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en la hipótesis *“el particular que simule el cumplimiento de requisitos establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr un beneficio”*; así como la responsabilidad administrativa de la empresa particular empresa [REDACTED] en su comisión.

Esto es así, sin que sea óbice a lo anterior lo manifestado por [REDACTED] en su carácter de representante legal de la empresa [REDACTED] en su escrito presentado ante la Autoridad Substanciadora, en su comparecencia a la celebración de la Audiencia Inicial desahogada el trece de octubre de dos mil veinte, el cual se encuentra agregado al expediente de origen⁸⁸, de los cuales resulta innecesaria su transcripción, partiendo del principio de economía procesal y en especial, porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto del presente fallo, sin que ello constituya una transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad por parte de esta Sala Especializada, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman el litigio.

Resulta orientadora al respecto por analogía, las razones contenidas en el criterio de rubro y tenor literal siguiente: **CDNCEPTOS DE VIOLACIÓN DE AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.**⁸⁹

Al efecto, [REDACTED] su carácter de representante legal de la empresa

⁸⁸ Fojas 869 a 892 del expediente de origen.

⁸⁹ Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, con número de registro 164618.

[REDACTED] su escrito realiza agravios de manera idéntica a los expresados por [REDACTED] por lo que nos remitimos a la contestación que este tribunal realizó a los mismos en el apartado 6.1. de esta resolución.

Bajo ese contexto, ante lo infundado, inoperante e insuficiencia de los agravios vertidos por la aquí responsable y, al encontrarse demostrados los elementos de la falta administrativa de particular **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA** prevista en el artículo 109 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en la hipótesis "*el particular que simule el cumplimiento de requisitos establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr un beneficio*"; así como la responsabilidad administrativa de la particular [REDACTED] través de su representante legal [REDACTED] su comisión, lo procedente es dictar **SENTENCIA DE CONDENA** en su contra.

7. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

7.1. Individualización de la sanción de [REDACTED]

En el caso quedó demostrado en autos que [REDACTED] en la época de los hechos tenía el carácter de servidor público, por lo que las sanciones aplicables a la falta administrativa grave **DESVÍO DE RECURSOS** prevista en el artículo 93 de la Ley Estatal de Responsabilidades, son las que al caso establece el artículo 118 en relación con el 119, de esa ley, los cuales estipulan:

"Artículo 118.- Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en:

I.- Suspensión del empleo, cargo o comisión;

II.- Destitución del empleo, cargo o comisión;

III.- Sanción económica; y

IV.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una a más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellos y de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa grave.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días naturales.

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de una hasta diez años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez o veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses o un año de inhabilitación.



Artículo 119.- En el caso de que la falta administrativa grave cometida por el servidor público le genere beneficios económicos, a sí misma o a cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 91 de esta Ley, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior."

Parámetros dentro de los cuales abarcará el arbitrio de este tribunal en la individualización de la sanción.

Ahora bien, para la imposición de las sanciones por faltas administrativas graves se deberá tomar en cuenta los lineamientos que marcan los artículos 120 y 124, de la Ley Estatal de Responsabilidades, por lo que habrá de considerarse los siguientes aspectos:

I. Empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta.

El ex servidor público responsable, al momento de cometer la falta administrativa grave se desempeñaba como Tesorero Municipal; aspecto que le perjudica, pues de conformidad con el artículo 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades, como servidor público tenía la obligación de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, perspectiva de género, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

Para ello debió actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas le atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que debe conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

Asimismo, debió conducirse con rectitud sin utilizar su empleo para autorizar la asignación de recursos públicos financieros en contraposición a las normas aplicables; y satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

Además, debió corresponder a la confianza que la sociedad le ha conferido; tener una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general.

Lo que en el caso no aconteció, por lo que tal aspecto le perjudica.

II. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

El daño causado es el ocasionado al bien jurídico tutelado que es el buen gobierno y adecuado desarrollo de la actividad administrativa del Estado, así como el patrimonio del Ayuntamiento.

Al respecto, cabe señalar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos, el derecho humano a una buena administración pública.

En ese sentido, toda persona tiene derecho al buen gobierno una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Asimismo, cabe precisar que la buena administración de instituciones públicas es un derecho ciudadano, de naturaleza fundamental, estrechamente vinculado con el interés general, que es el fundamento de la administración pública y los derechos ciudadanos, y el cual se refiere al interés de toda la colectividad, de todos los integrantes de la sociedad.

En ese rubro, es conveniente señalar que todas las personas en una sociedad que intervienen en alguna actividad con el Estado, también se encuentran constreñidas a participar en cumplimiento a las obligaciones legales estipuladas para la actividad o trámite que en su caso efectúe con el Estado.

En el caso concreto, de acuerdo a los medios probatorios allegados al expediente y conforme a lo expresado en el cuerpo de la sentencia, se demostró que **LUIS [REDACTED]** se condujo bajo los anotados principios, toda vez que, autorizó actos para la asignación recursos públicos financieros a favor de la empresa **[REDACTED]** en contraposición a las normas aplicables; con los que antepuso el interés particular sobre el general, dejando a un lado la disciplina y la honradez, lealtad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, integridad, eficiencia y eficacia en el servicio público; actuando en contraposición a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas le atribuyen a su empleo, cargo o comisión.

Con lo que contribuyó a la indebida administración pública, lo cual no puede pasarse por alto, pues de ser así, ese tipo de conductas, al dejarse impunes, tendrían un efecto replicador en su entorno, que perturbaría el buen gobierno de una sociedad, al extremo de llegar a afectaciones no sólo económicas, sino de integridad y seguridad física, pues las medidas y obligaciones Constitucionales y legales que se imponen a los servidores públicos de administrar los recursos públicos que tienen asignados, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Aunado a lo anterior, se acreditó que con la conducta del aquí responsable existió una afectación al patrimonio del Municipio por la cantidad de por la cantidad total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), que fue la cantidad que el aquí



responsable en su carácter de Tesorero Municipal autorizó actos para su asignación a la empresa [REDACTED] sin soporte documental, en contraposición a las normas aplicables.

Afectación al patrimonial Municipal cuya cantidad **excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización** para el año dos mil veintiuno, toda vez que multiplicado dicho valor \$89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos pesos con centavos) por doscientos, se obtiene la cantidad de \$17, 924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos), de lo que se observa que la afectación por la cantidad de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional), excede en demasía la anotada cantidad.

En ese aspecto, se destaca la obligación del Estado y en ese contexto de todas las autoridades y servidores públicos, de aplicar los recursos públicos con eficiencia, eficacia y transparencia.

De ahí que, el daño causado no es de interés particular, sino de forma general, ya que afecta a toda una sociedad que tiene el derecho a la implementación de un buen gobierno y debida administración pública.

Aspectos que le perjudican.

III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio.

En cuanto al **nivel jerárquico** del infractor, en la época de los hechos [REDACTED] tenía el cargo de Tesorero Municipal; nivel jerárquico que se considera de rango alto, pues en una comparativa de acuerdo con el Catálogo de Puestos del Gobierno del Estado de Sonora, que corresponden del nivel 01 al 15, el nivel para un Tesorero Municipal es 13.

Por otro lado, en el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de Hacienda Municipal, el Presupuesto de Egresos, entre otras, se encuentran contenidas las atribuciones y facultades, así como obligaciones del entonces servidor público, las cuales involucraban decisiones de impacto a la dependencia en que laboraba así como a la sociedad; tenía actividades que requerían su supervisión y decisión de acción, asimismo, tenía personas que actuaban bajo su mando, a quienes debía instruir y otorgarles responsabilidades; además el aquí responsable como Tesorero Municipal era el encargado de la recaudación y, en general, el manejo de la Hacienda Pública Municipal, por lo que se encontraban bajo su resguardo los recursos públicos del Municipio, los cuales debió administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estaban destinados. Lo cual le resulta perjudicial.

Por otro lado, en cuanto a los **antecedentes** del infractor, se debe subrayar que de las constancias que obran en autos no se advierte que existan antecedentes por parte del ex servidor público que pongan de manifiesto que hubiere cometido alguna otra falta administrativa. Aspecto que le beneficia.

En tanto que, en lo que respecta a la **antigüedad en el servicio**, en autos no se allegó informe o documento alguno del cual se desprenda la antigüedad del ex servidor público. Por lo que dicho aspecto ni le afecta ni le beneficia.

IV. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público.

En el caso no se allegaron medios probatorios que acrediten la capacidad económica de la particular, por lo que, no es posible cuantificarla.

V. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.

Por la clase de la falta administrativa en estudio y dada la mecánica de los hechos, se advierte que el servidor público realizó por sí la conducta reprochada, pues fue él quien autorizó la asignación de los recursos financieros; se valió de su cargo como Tesorero Municipal para autorizar las asignaciones del recurso público financiero y actuó en contraposición a las normas aplicables, lo cual esto último le es desfavorable pues como servidor público debió regirse de acuerdo a sus funciones y atribuciones, sin quebrantar las leyes.

VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

Al respecto, el artículo 116 de la Ley Estatal de Responsabilidades, establece que se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo.

Sin embargo, en autos no existen constancias que pongan en evidencia que el ex servidor público hubiere incurrido en una infracción diversa a la que aquí se sentencia; por lo que en el caso no se tiene por actualizada la figura de reincidencia; lo cual es un factor que le beneficia.

VII. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable.

En el caso, el monto del beneficio no es cuantificable, pues en el caso de los medios probatorios existentes en el expediente, así como del IPRA no se desprende que el responsable hubiere obtenido un beneficio para sí. Lo cual beneficia al aquí responsable, pues tal aspecto lo exime de la imposición de la sanción económica que refiere el artículo 119 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Ahora bien, de los anteriores factores de individualización, se advierte que éstos son más los que benefician a [REDACTED]



Así, la ponderación de todos los datos y circunstancias tomados en cuenta, conducen a determinar que el grado de reprochabilidad del entonces servidor público [REDACTED] se ubica como **mínimo**; por lo que en el caso, es considerable imponerle la sanción estipulada en el artículo 118, fracción IV, de la Ley Estatal de Responsabilidades, consistente en inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Ahora bien, para la individualización de la sanción de inhabilitación, debe tomarse en cuenta que el artículo 118 de la Ley Estatal de Responsabilidades, estipula que en caso de que se determine como sanción la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite.

En esa tesitura, como se adelantó la afectación causada al patrimonial Municipal por la falta administrativa grave cometida, **excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización** para el año dos mil veintiuno, por lo que para la individualización la sanción ésta deberá corresponder entre una pena **mínima de diez años a una máxima de veinte años**.

Bajo ese contexto, siendo congruente con el grado de reprochabilidad estimado, se considera justo y equitativo imponer [REDACTED] sanción de **INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS** para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

En apoyo a lo anteriormente anotado, se cita la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONCEPTO DE SANCIÓN QUE DA LUGAR A SU APLICACIÓN. El término "sanción" es ambiguo, pues admite distintas formas o tiene significados diversos. En principio, se concluye que la sanción jurídica es, desde un punto de vista estructural, una reacción -positiva o negativa- frente a ciertas conductas establecidas por el derecho. Ahora bien, partiendo de la noción de sanción que se centra en la reacción negativa prevista por el derecho frente a ciertas conductas, es posible distinguir diferentes acepciones cuya naturaleza diverge considerablemente una de la otra. Así, por ejemplo, la nulidad de un acto puede considerarse como una sanción, pero aquella que establece una consecuencia para el incumplimiento de ciertos requisitos de validez o existencia de un acto jurídico es distinta de la sanción entendida como reproche de una conducta que se desvía de la juridicidad y que da lugar al surgimiento de responsabilidad -civil, política, administrativa o penal-. A partir de los precedentes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se ha dicho que el derecho administrativo tiene dos grandes vertientes, dependiendo de si el Estado actúa en su faceta reguladora -en ejercicio de su facultad constitucional de planificación de actividades económicas, sociales y culturales, para la realización de ciertos fines- o en la de policía o vigilante, resulta evidente que, aun cuando ambas facetas prevén la imposición de sanciones -comprendiendo incluso nulidades-, sólo la faceta de "Estado-policía" prevé la posibilidad de sancionar, en sentido estricto, infracciones administrativas que dan lugar al surgimiento de responsabilidad a cargo de las y los servidores públicos mediante el uso de la potestad punitiva. Es precisamente éste el ámbito en el cual tiene cabida la intervención de los órganos internos

de control y de los tribunales administrativos y en el que, atendiendo a la proyección que tiene sobre la vida de las personas, se ha considerado necesario reconocer la existencia de un debido proceso administrativo, con los alcances que le han dado este alto tribunal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estos términos, estaremos ante una manifestación del derecho administrativo sancionador cuando el procedimiento: 1) presuponga la existencia de un tipo administrativo que conlleve el reproche a una infracción -que entrañe la transgresión a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones públicos- y dé lugar al surgimiento de responsabilidad administrativa; 2) se siga en forma de juicio, en el cual se determine si la conducta -acción u omisión- de quien desempeñe el servicio público contraviene aquellas prohibiciones a las cuales se sujeta el ejercicio de su función; y, 3) tenga por finalidad procurar la correcta actuación de los servidores públicos, sancionar a los infractores y, en su caso, lograr la restitución de aquellos bienes jurídicos que fueron afectados con su irregular actuación.⁹⁰

7.2. Individualización de la sanción de la particular [REDACTED]

En el caso quedó demostrado en autos que la particular [REDACTED] es una persona moral, por lo que las sanciones aplicables a la falta administrativa de **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA** prevista en el artículo 109 de la Ley Estatal de Responsabilidades, son las que establece el artículo 121, fracción II, de esa ley, que en lo conducente estipula:

"II.- Tratándose de personas morales:

a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años;

c) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta Ley;

d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una Falta administrativa grave prevista en esta Ley; y

e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción, sólo serán procedentes cuando la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.

⁹⁰ Tesis: 1a. XXXV/2017 (10a.) visible en la página 441, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su Décima Época, con número de registro: 2013954.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor uno o más de las sanciones señaladas, siempre que sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de las Faltas de particulares.

Se considerará como atenuante en la imposición de sanciones a personas morales cuando los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las personas morales denuncien o colaboren en las investigaciones proporcionando la información y los elementos que posean, resarzan los daños que se hubieren causado.

Se considera como ogravante para la imposición de sanciones a las personas morales, el hecho de que los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las mismas, que conozcan presuntos actos de corrupción de personas físicas que pertenecen a aquellas no los denuncien."

(Lo resaltado no es de origen)

Parámetros dentro de los cuales abarcará el arbitrio de este tribunal en la individualización de la sanción.

Ahora bien, para la imposición de las sanciones por faltas de particulares se deberá tomar en cuenta los lineamientos que marcan los artículos 122 y 124, de la Ley Estatal de Responsabilidades, por lo que habrá de considerarse los siguientes aspectos:

I. El grado de participación del o los sujetos en la falta de particulares.

La empresa [REDACTED] a través de su representante legal, [REDACTED] simuló el cumplimiento de requisitos establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr un beneficio; por lo que tiene el carácter de autor, teniendo a su alcance el dominio de los acontecimientos que pudo detener o dejar de hacer; aspecto que le perjudica.

II. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley.

Al respecto, el artículo 116 de la Ley Estatal de Responsabilidades, establece que se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo.

Sin embargo, en autos no existen constancias que pongan en evidencia que la particular hubiere incurrido en una infracción diversa a la que aquí se sentencia; por lo que en el caso no se tiene por actualizada la figura de reincidencia; lo cual es un factor que le beneficia.

III. La capacidad económica del infractor.

En el caso no se allegaron medios probatorios que acrediten la capacidad económica de la particular, por lo que, no es posible cuantificarla.

IV. El daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad administrativa del Estado.

En este aspecto, fue puesto en peligro el buen gobierno y adecuado desarrollo de la actividad administrativa del Municipio, en razón de que la particular simuló el

cumplimiento de requisitos establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr un beneficio económico; sin embargo cabe destacar que la conducta de infractora de la particular lo fue del seis de julio al quince de septiembre de dos mil dieciocho, con lo que se puede decir que la puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad administrativa no se vio expuesta por tiempo prolongado; aspecto que le beneficia a la particular.

V. El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se hubieren causado.

El monto del beneficio obtenido por la particular fue de un total de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional). Aspecto que le perjudica pues esa cantidad del beneficio obtenido constituye a su vez el daño patrimonial ocasionado al Municipio, el cual resulta una cuantía considerable.

Ahora bien, de los anteriores factores de individualización, se advierte que son más los que benefician a la particular.

Así, la ponderación de todos los datos y circunstancias tomados en cuenta, conducen a determinar que el grado de reprochabilidad de la particular se ubica como **mínimo**; por lo que en el caso, es considerable imponer al particular las penas estipuladas en el artículo 121, fracción II, inciso a) y b), de la Ley Estatal de Responsabilidades, que estipula:

"II.- Tratándose de personas morales:

a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años;..."

(Lo resaltado no es de origen)

Ahora bien, para la individualización de las sanciones, debe tomarse en cuenta que en lo que respecta a la sanción económica, en el caso concreto ésta podrá alcanzar hasta dos tantos del beneficio obtenido, destacándose que en el caso el beneficio obtenido lo fue de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional).

Mientras que en lo que respecta a la inhabilitación, ésta deberá corresponder entre una pena mínima de **tres meses a una máxima de diez años**.

Bajo ese contexto, siendo congruente con el grado de reprochabilidad estimado, se considera justo y equitativo imponer a la particular [REDACTED]

[REDACTED] las siguientes sanciones:



1. **SANCIÓN ECONÓMICA** por la cantidad de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional).
2. **INHABILITACIÓN TEMPORAL POR TRES MESES** para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

En apoyo a lo anteriormente anotado, se citan las tesis sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y texto siguientes:

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES ECONÓMICAS. El principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones a los servidores públicos contemplado en el artículo 113 constitucional, obliga al legislador a prever en la ley que las sanciones económicas correspondan por lo menos al beneficio económico obtenido por el responsable o los daños y perjuicios patrimoniales causados y, por otro, que no excedan de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. En ese sentido, el artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dispone que la autoridad podrá imponer sanciones económicas por un monto mínimo que no podrá ser igual o inferior a los daños causados, mientras que el monto máximo podrá ser de hasta tres tantos del beneficio o lucro obtenido o el daño o perjuicio causado. En consecuencia, el precepto respeta cabalmente las exigencias derivadas de la garantía de proporcionalidad contemplada en el artículo 113 constitucional.⁹¹

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONCEPTO DE SANCIÓN QUE DA LUGAR A SU APLICACIÓN. El término "sanción" es ambiguo, pues admite distintas formas o tiene significados diversos. En principio, se concluye que la sanción jurídica es, desde un punto de vista estructural, una reacción -positiva o negativa- frente a ciertas conductas establecidas por el derecho. Ahora bien, partiendo de la noción de sanción que se centra en la reacción negativa prevista por el derecho frente a ciertas conductas, es posible distinguir diferentes acepciones cuya naturaleza diverge considerablemente una de la otra. Así, por ejemplo, la nulidad de un acto puede considerarse como una sanción, pero aquella que establece una consecuencia para el incumplimiento de ciertos requisitos de validez o existencia de un acto jurídico es distinta de la sanción entendida como reproche de una conducta que se desvía de la juridicidad y que da lugar al surgimiento de responsabilidad -civil, política, administrativa o penal-. A partir de los precedentes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se ha dicho que el derecho administrativo tiene dos grandes vertientes, dependiendo de si el Estado actúa en su faceta reguladora -en ejercicio de su facultad constitucional de planificación de actividades económicas, sociales y culturales, para la realización de ciertos fines- o en la de policía o vigilante, resulta evidente que, aun cuando ambas facetas prevén la imposición de sanciones -comprendiendo incluso nulidades-, sólo la faceta de "Estado-policía" prevé la posibilidad de sancionar, en sentido estricto, infracciones administrativas que dan lugar al surgimiento de responsabilidad a cargo de las y los servidores públicos mediante el uso de la potestad punitiva. Es precisamente éste el ámbito en el cual tiene cabida la intervención de los órganos internos de control y de los tribunales administrativos y en el que, atendiendo a la proyección que tiene sobre la vida de las personas, se ha considerado necesario reconocer la existencia de un debido proceso administrativo, con los alcances que le han dado este alto tribunal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estos términos, estaremos ante una

⁹¹ Tesis: 1a. XLVI/2013 (10a.) consultable en la página 842, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Décima Época, con número de registro: 2002903.

manifestación del derecho administrativo sancionador cuando el procedimiento: 1) presuponga la existencia de un tipo administrativo que conlleve el reproche a una infracción -que entrañe la transgresión a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones públicos- y dé lugar al surgimiento de responsabilidad administrativa; 2) se siga en forma de juicio, en el cual se determine si la conducta -acción u omisión- de quien desempeñe el servicio público contraviene aquellas prohibiciones a las cuales se sujeta el ejercicio de su función; y, 3) tenga por finalidad procurar la correcta actuación de los servidores públicos, sancionar a los infractores y, en su caso, lograr la restitución de aquellos bienes jurídicos que fueron afectados con su irregular actuación.⁹²

8. EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN.

Las sanciones impuestas por este Tribunal se ejecutarán de acuerdo a las siguientes directrices:

A) SANCIÓN ECONÓMICA.

La sanción económica por la cantidad de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional) impuesta a la particular [REDACTED] constituirá en crédito fiscal a favor de la Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, la cual se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal del Estado de Sonora, tratándose de contribuciones y aprovechamientos, y se hará efectiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por la Tesorería Municipal del citado Ayuntamiento. Lo anterior, de conformidad con los artículos 124, fracción III, 126 y 262, de la Ley Estatal de Responsabilidades.

En esa tesitura, con fundamento en el artículo 125 de la citada ley, hágase lo anterior del conocimiento a los responsables, requiriéndoles el pago de la sanción económica impuesta.

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto 264, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades, **una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, gírese oficio a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora**, comunicándole el sentido de la presente sentencia para su cumplimiento, para que realice las gestiones correspondientes a fin de lograr el cobro y pago por parte de la citada moral de la sanción económica impuesta.

B) INHABILITACIÓN.

La sanción de **INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS** para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas impuesta al entonces servidor público [REDACTED] la diversa de **INHABILITACIÓN**

⁹² Tesis: 1a. XXXV/2017 (10a.) visible en la página 441, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su Décima Época, con número de registro: 2013954.



TEMPORAL POR TRES MESES para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, impuesta a la particular [REDACTED] para su ejecución estas deberán ser registradas y publicadas conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para la ejecución de las indicadas sanciones, tanto económica como de inhabilitación, una vez que causa ejecutoria la presente sentencia, gírese atento oficio a la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Contraloría General del estado de Sonora, a fin de que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lleve a cabo el registro de las indicadas sanciones impuestas al mencionado ex servidores públicos y a la citada moral, para efectos de la reincidencia y para el conocimiento público de las autoridades competentes, en lo que concierne a las sanciones de inhabilitación para ser contratado como Servidor público, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En otro contexto, háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 67 TER, de la Constitución Política del Estado de Sonora; 9 fracción IV, en relación con el 3, fracción XXX, 12, 105, 121, fracción II, inciso a), 118, 119, 120, 121, fracción II, 122, 124, 247 y 249, de la Ley Estatal de Responsabilidades; y, 13 BIS, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, se resuelve el presente asunto bajo los siguientes:

RESOLUTIVOS:

PRIMERO. Se encuentra demostrada en el expediente la existencia de la falta administrativa grave de **DESVÍO DE RECURSOS**, estipulada en el numeral 93 de la Ley Estatal de Responsabilidades, así como la responsabilidad del ex servidor público en su comisión. Lo anterior de acuerdo a los motivos y fundamentos expuestos en los apartados 5, 5.1 y 6.1 de esta sentencia.

SEGUNDO. Se encuentra acreditada en autos la existencia de la falta de particular de **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA** prevista en el artículo 109 de la Ley Estatal de Responsabilidades, así como la responsabilidad de la particular en su comisión. Lo anterior conforme a los razonamientos y fundamentos expresados en los apartados 5, 5.2 y 6.2 de esta sentencia.

TERCERO. Se Impone al ex servidor público la sanción de **INHABILITACIÓN TEMPORAL POR DIEZ AÑOS** para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, de acuerdo

a la individualización de la sanción especificada en el apartado 7.1 de esta resolución y bajo los lineamiento referidos en el rubro 8 de esta sentencia.

CUARTO. Se impone a la particular la **SANCIÓN ECONÓMICA** por la cantidad de **\$2,974,347.80** (dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos, moneda nacional); así como la **INHABILITACIÓN TEMPORAL POR TRES MESES** para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, conforme a la individualización de la sanción especificada en el apartado 7.2 de esta resolución y bajo los lineamiento referidos en el rubro 8 de esta sentencia.

QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, gírense los oficios a las autoridades correspondientes para su cumplimiento, en los términos plasmados en el punto 8 de esta sentencia.

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente a las partes y hágaseles saber el derecho y término de quince días hábiles, que el artículo 255 de la Ley Estatal de Responsabilidades, les concede para impugnar la presente sentencia mediante el recurso de apelación, el cual en su caso, deberán interponer por escrito ante este Tribunal, en el que habrán de formular los agravios que consideren se les haya causado, exhibiéndose una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes.

Así lo resolvió la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, por unanimidad de votos de los Magistrados Ricardo García Sánchez (Presidente), Rosa Mireya Félix López y Marisol Cota Cajigas, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el Secretario General de Acuerdos, licenciado Arnoldo Barceló Sainz, que autoriza y da fe.- DOY FE.

Lic. Ricardo García Sánchez.

Magistrado Presidente.

Lic. Rosa Mireya Félix López.

Magistrada.

Lic. Marisol Cota Cajigas.

Magistrada

Lic. Arnoldo Barceló Sainz.

Secretario General



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORA
Sala Especializada en Materia de Anticorrupción
y Responsabilidades Administrativas

SENTENCIA
SEMARA-PRA-35/2020

El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se publicó en lista de acuerdos la resolución anterior. - CONSTE.